

La Revista...!



Justo Medio

18 Años

ANÁLISIS • REPORTAJES • ACTUALIDAD

EL PERÚ QUE VIENE



Gobernabilidad, Seguridad y Desarrollo con Justicia Social



**SONDEO
POPULAR**
Información Apropriadada es Poder

**SECCIÓN JURÍDICA
INTERNACIONAL FIA**
Justo Medio El Heraldo de la FIA

NOTA DE REDACCIÓN

Con el propósito de fortalecer el análisis jurídico y promover una cultura de respeto al Estado de derecho, la Revista JustoMedio ha establecido una alianza estratégica con ARRUNATEGUI PARTNERS – Abogados | Consultores | Litigios Estratégicos, prestigiosa firma legal que, a través de su equipo multidisciplinario de profesionales, contribuirá de manera permanente con artículos de análisis, opinión e investigación sobre las principales ramas del Derecho y los temas de mayor relevancia para la comunidad jurídica y la sociedad.

Esta colaboración permitirá ofrecer a nuestros lectores contenidos elaborados con rigor técnico, enfoque académico y una visión práctica, abordando los desafíos que enfrenta el sistema de justicia, las reformas legislativas, la jurisprudencia y el impacto del Derecho en el desarrollo económico y social del país.

Asimismo, la Revista JustoMedio reafirma su compromiso con la comunidad jurídica internacional en su calidad de vocero oficial de la Federación Interamericana de Abogados (FIA), institución fundada en 1940 y con sede en Washington D. C., Estados Unidos, que reúne a miles de abogados, jueces, académicos y profesionales del Derecho de todo el continente.

En ese marco, nuestras páginas difundirán de manera permanente las actividades institucionales, congresos, pronunciamientos y artículos de los miembros de la Federación Interamericana de Abogados, fortaleciendo el intercambio de experiencias y el debate jurídico sobre los grandes desafíos que enfrenta la justicia en América.

Con esta doble alianza, la Revista Justo Medio consolida su compromiso de convertirse en un espacio de referencia para la reflexión jurídica, el análisis técnico y la promoción de una justicia moderna, independiente y al servicio de la sociedad.

Finalmente, el Equipo Multidisciplinario de la Revista Justo Medio desarrollará análisis sobre los principales asuntos de Estado y de interés nacional e internacional con rigor, medida y objetividad, sustentados en evidencia, datos estadísticos y un enfoque pedagógico, formulando propuestas orientadas a contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas, la institucionalidad democrática y el desarrollo del país.



4	Editorial El Perú que Viene
8	Observando El Panorama Capitalismo Popular: El Emprendimiento que ...
11	Debate Tecnico perú 3031: Diez Reformas Estructurales...
12	Mesa Redonda ¿Cómo Derrotar al Crimen Organizado?
14	Debate Técnico 2026: Propuestas, Antecedentes y los Desafíos Reales ...
16	Propuestas en Debate Seguridad, Lucha Anticorrupción y Desarrollo ...
20	Reflexiones de Coyuntura Más allá de la Elección
22	Judiciales • ARRUNATEGUI PARTNERS ¿Garantismo o Impunidad? ¿Protege realmente el Derecho Civil al Propietario? ¿Protege realmente nuestra Legislación Laboral... Extinción de Dominio • Antuanette Zuloeta Sánchez Trata de Personas
30	Mayor General FAP (r) Fernando Ordoñez V. La urgente Transformación del Sistema Educativo...
31	Reconocimiento Antero Flores Áraoz
32	Dr. José Joaquín Díaz Pérez Gobernar para Todos
42	Teniente General PNP (r) Julio Coa Mariño Sin una Policía fuerte, no hay Democracia ni ...
44	Christian Pardo Reyes Candidato a la Alcaldía – Partido Visión Perú
45	Alejandro Ramírez Merino Las Falsas Narrativas de la Izquierda
46	Rodolfo A. Pacheco Vera Reforma Integral de la Ley de Seguridad Ciudadana
50	Sondeo Popular El Serenazgo Fuerza Preventiva
52	Municipales

56	Ing. Marcos Daniel Paucar Cotrina Una Mirada desde la Gestión Pública
58	Reportaje Instituto Catastral de Lima
60	Suplemento FIA
72	Eventos Homenaje a “Los Chacales”
74	Gustavo Montoya Resiliencia y Solidez Macroeconómica
76	Mercedes Fernández El País que Reconstruye Más de lo que Previene
78	Chengzun Pan ¿Hacia dónde se Dirigirá la relación entre el Perú y ...
80	Escenario Internacional Medio Oriente: Una Guerra Prolongada, una Paz... Estados Unidos, China y Rusia: La nueva Competencia ...
84	Diplomaticos
88	Eventos Aora Solución Confederación Mundial de Instituciones y Empresas... Foro Internacional
92	Personajes Mauro Lionel: Prodigio Peruano que Conquista Teatros Enrique Victoria Obando, director de la Orquesta ...
96	Cine Hollywood en Transformación
98	Dr. Jesús Ochoa La Actitud como mi Filosofía de Vida



Mauro Lionel: Prodigio Peruano que Conquista Teatros

EL PERÚ QUE VIENE

Gobernabilidad, Seguridad y Desarrollo con Justicia Social

“La legitimidad de un gobierno no se mide únicamente por el resultado de las urnas, sino por su capacidad para devolver esperanza, seguridad y oportunidades a la ciudadanía.”

La democracia después de las elecciones

La reciente elección presidencial que llevó a la señora Keiko Fujimori a la Presidencia de la República marca el inicio de una nueva etapa para el país. Millones de peruanos ejercieron libremente su derecho al voto, respaldando distintas propuestas según sus convicciones, prioridades y expectativas. Esa pluralidad constituye la esencia de toda democracia y merece absoluto respeto.

Concluido el proceso electoral, el desafío ya no es quién ganó o quién perdió, sino cómo construir un país más seguro, próspero e inclusivo. Corresponde al nuevo gobierno gobernar para todos los peruanos y a las demás fuerzas políticas ejercer una oposición responsable, priorizando el diálogo, la estabilidad institucional y el interés nacional por encima de las diferencias partidarias.

El Perú demanda acuerdos sobre los grandes temas de Estado: seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, reactivación económica, generación de empleo, salud, educación y modernización del Estado. Solo con unidad de propósito y respeto a las instituciones será posible recuperar la confianza ciudadana y encaminar al país hacia un desarrollo sostenible con justicia social.

El Perú inicia un nuevo ciclo político en uno de los momentos más complejos de las últimas décadas. La polarización política, el debilitamiento institucional, el crecimiento del crimen organizado, la persistente corrupción, la informalidad económica y la pérdida de confianza en las instituciones públicas constituyen desafíos que trascienden cualquier ideología o coyuntura electoral.

Los resultados de las recientes elecciones representan mucho más que la elección de un nuevo presidente. Expresan también la expectativa de millones de peruanos que demandan un Estado más eficiente, una economía dinámica y una sociedad donde el esfuerzo individual encuentre respaldo en instituciones sólidas y transparentes.

La historia reciente demuestra que ningún gobierno puede construir desarrollo sostenible si no garantiza simultáneamente seguridad, estabilidad política, inversión, justicia y cohesión social. Estos elementos no son objetivos independientes; conforman un mismo ecosistema que determina la competitividad de una nación.

El reto consiste, por tanto, en pasar de un Estado reactivo a un Estado estratégico.

Seguridad: recuperar el control del territorio

La principal preocupación de los ciudadanos continúa siendo la inseguridad.

Diversas encuestas nacionales muestran que la delincuencia se mantiene como el problema que

más preocupa a la población, por encima incluso del desempleo y del costo de vida. El incremento de las extorsiones, el sicariato, la minería ilegal, el narcotráfico y las economías criminales ha modificado profundamente la percepción de seguridad en numerosas regiones del país.

La criminalidad organizada ya no constituye únicamente un problema policial. Se ha convertido en un fenómeno económico, financiero y político.

Combatirla exige una política de Estado sostenida durante varios gobiernos.

Entre las medidas prioritarias destacan:

- Fortalecimiento de la inteligencia policial.
- Interoperabilidad entre Policía, Ministerio Público y Poder Judicial.
- Mayor capacidad de investigación financiera.
- Control efectivo de fronteras.
- Modernización tecnológica de las fuerzas del orden.
- Protección integral de jueces y fiscales especializados.
- Recuperación de espacios públicos mediante intervención conjunta del Estado y gobiernos locales.

La seguridad debe entenderse como una condición indispensable para el desarrollo económico y la convivencia democrática.

La lucha contra la corrupción continúa siendo una prioridad nacional

La corrupción representa uno de los mayores obstáculos para el desarrollo del Perú.

Más allá del impacto económico que generan los actos ilícitos, la

corrupción erosiona la confianza ciudadana, debilita las instituciones y desalienta la inversión pública y privada.

Las soluciones no pueden limitarse al endurecimiento de las sanciones penales.

Es necesario fortalecer:

- Los sistemas de control preventivo.
- La transparencia en las contrataciones públicas.
- La digitalización de los procedimientos administrativos.
- La protección efectiva de denunciantes.
- La rendición permanente de cuentas.
- La evaluación por resultados en todas las entidades estatales.

Un Estado moderno requiere procesos simples, información pública accesible y mecanismos tecnológicos que reduzcan la discrecionalidad administrativa.

La transparencia debe convertirse en una política permanente y no únicamente en una respuesta frente a los escándalos.

El capitalismo popular merece convertirse en política pública

Uno de los fenómenos económicos más importantes de los últimos años ha sido el crecimiento del denominado capitalismo popular. Miles de familias que perdieron sus empleos durante las sucesivas crisis económicas decidieron crear pequeñas empresas, emprendimientos familiares, negocios digitales y actividades comerciales que hoy sostienen buena parte del empleo nacional.

Las micro y pequeñas empresas representan la inmensa mayoría del tejido empresarial peruano y generan una proporción significa-

tiva del empleo privado. Sin embargo, muchas continúan enfrentando limitaciones para acceder al crédito, la formalización, la innovación tecnológica y nuevos mercados.

El Estado debe asumir un rol promotor.

No se trata de sustituir la iniciativa privada, sino de crear condiciones favorables para que los emprendedores puedan crecer.

Resulta indispensable:

- Simplificar los procedimientos administrativos.
- Ampliar el acceso al financiamiento.
- Promover la capacitación empresarial.
- Fortalecer la digitalización de los pequeños negocios.
- Incentivar la innovación.
- Facilitar la internacionalización de las microempresas.

El emprendimiento constituye hoy uno de los principales motores del desarrollo económico nacional.

Salud: invertir en prevención y gestión

La pandemia dejó importantes lecciones sobre las fortalezas y debilidades del sistema sanitario peruano.

Persisten brechas significativas en infraestructura hospitalaria, equipamiento, disponibilidad de especialistas y atención primaria.

La política pública debería priorizar:

- Fortalecimiento del primer nivel de atención.
- Historia clínica digital interoperable.
- Reducción de listas de espera.
- Descentralización de servicios especializados.
- Telemedicina para zonas rurales.

- Mayor inversión en prevención. Cada sol invertido en prevención representa un ahorro considerable en tratamientos posteriores y mejora la productividad del país.

Educación y juventud

Más del 60 % de la población peruana se encuentra en edad económicamente activa.

El bono demográfico representa una oportunidad histórica.

Sin embargo, miles de jóvenes enfrentan dificultades para acceder a empleos formales y de calidad.

Las políticas públicas deberían orientarse hacia:

- Educación técnica moderna.
- Fortalecimiento de institutos tecnológicos.
- Vinculación entre universidad y empresa.
- Formación en inteligencia artificial.
- Programación.
- Robótica.
- Inglés.
- Emprendimiento.

La economía del conocimiento exige nuevas competencias laborales. Preparar a los jóvenes para los empleos del futuro constituye una inversión estratégica para el país.

Vivienda e infraestructura

El déficit habitacional continúa afectando a cientos de miles de familias.

Al mismo tiempo, persisten importantes brechas en infraestructura vial, saneamiento, transporte urbano y conectividad digital.

La inversión pública debe priorizar proyectos de alto impacto social y económico.

Cada obra ejecutada con transparencia genera empleo, mejora la competitividad regional y eleva la calidad de vida de la población. Asimismo, resulta fundamental fortalecer las asociaciones público-privadas como mecanismo para acelerar el cierre de brechas.

Justicia social y desarrollo inclusivo

El crecimiento económico, por sí solo, no garantiza bienestar.

El verdadero desarrollo requiere que los beneficios del progreso lleguen a todas las regiones y sectores sociales.

La justicia social implica igualdad de oportunidades, acceso efectivo a servicios públicos de calidad y políticas orientadas a reducir las brechas territoriales.

La inclusión económica debe convertirse en uno de los principales objetivos del próximo gobierno.

Modernización del Estado

La transformación digital ofrece una oportunidad histórica para modernizar la administración pública. La interoperabilidad entre entidades, la inteligencia artificial aplicada a los servicios públicos, la automatización de procesos y el gobierno digital pueden reducir tiempos, costos y espacios para la corrupción.

La ciudadanía demanda un Estado que resuelva problemas, no que los multiplique.

Modernizar la gestión pública constituye una necesidad impostergable.

Reflexión Final

El próximo quinquenio representa una oportunidad para reconstruir la confianza entre el Estado y la ciudadanía.

Los desafíos son enormes, pero también lo son las capacidades del Perú.

La estabilidad institucional, la seguridad ciudadana, la inversión productiva, la educación, la innovación, la salud, la vivienda, la justicia social y el fortalecimiento del emprendimiento no deben entenderse como políticas aisladas, sino como parte de una estrategia nacional de desarrollo sostenible.

Más allá de las diferencias políticas, el país necesita consensos mínimos que permitan avanzar hacia objetivos comunes.

El verdadero éxito del próximo gobierno no dependerá únicamente de las reformas que anuncie, sino de su capacidad para ejecutarlas con transparencia, eficiencia y visión de largo plazo.

Desde Revista Justo Medio, reiteramos nuestro compromiso con un periodismo que privilegia la medida, la objetividad, el análisis crítico y la pedagogía. Creemos que una ciudadanía mejor informada participa con mayor responsabilidad en la construcción del país. En ese espíritu, invitamos a autoridades, empresarios, academia y sociedad civil a convertir el diálogo, la integridad y la búsqueda de consensos en las bases de una nueva etapa para el Perú, donde el crecimiento económico vaya de la mano con la seguridad, la justicia social y el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas.

.....
Esa es nuestra opinión, en uso de las facultades que otorga la Constitución a todos los ciudadanos (Artículo 2°, Inciso 4).

PRESIDENTE DIRECTOR GENERAL (PDG)

Marco Antonio Arrunátegui Cevallos

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO Y EDITORIAL

DIRECTOR: Dr. Moisés Tambini del Valle
Manuel Yompián Martínez
Stephen Haas del Carpio
Dr. José Palomino Manchego
Dr. Erasmo Reyna Alcántara
Dr. Jesús Ochoa Zavaleta
Dr. Carlos Navas Rondón
Dr. Omar Sumaria Benavente
Ing. Luis Bedoya Wallace
Dr. Octavio Rodríguez Velis Gadea
Dr. Fernando de Piérola Romero
Dra. Lorena Bellina Schrader

DIRECTOR INTERNACIONAL

Marco Antonio Arrunátegui Martínez

DIRECTOR DE CINE, ARTE Y ESPECTÁCULOS EN EEUU

Gian Carlo Arrunátegui Varillas

DIRECTORA REGIONAL LIMA PROVINCIAS

Ing. Adelia Changan Chinga

DIRECTOR REGIONAL SUR

Mario Chilco Ccama

DIRECTOR REGIONAL CENTRO

Dr. Helio Vilchez Jorge

DIRECTOR REGIONAL NORTE

Gustavo Velásquez Morveli

DIRECTOR LIMA NORTE

Lic. Julio Delgado Cavallini

ALIANZA ESTRATÉGICA

- FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS con sede en Washington
- Asociación Nacional de Magistrados Cesantes del Ministerio Público
- Asociación de Clubes Departamentales del Perú
- Red Mundial de Personalidades y Empresas Benefactoras
- Colegio Oficial Internacional de Doctores
- Association de Residents Peruanos Al Principat D' Andorra
- Peruvian American National Council
- B & S Televisión
- Best Cable
- Oxford Business Group
- Agencia Internacional de

Gobernabilidad y Política (AIGP)

- Proyecto de Desarrollo Perú Cordilleras (PRODEPECOR)
- TVI Tecnología Visual Integradora
- Global Gateway University
- Canal Digital Empresarial Pyme TV

DIRECTORA INTERNACIONAL DE PRENSA Y PROYECTOS DE EEUU Y EUROPA

Silvia Marisol Quispe Bautista

DIRECTOR DE ARTE Y CULTURA LATINOAMÉRICA

Carlos Enrique Malvestiti

DIRECTOR DE ARTE Y DISEÑO

Guillermo Gamarra Ortiz

SECCIÓN DIPLOMÁTICA

DIRECTOR: Orlando Tafur del Águila
SUBDIRECTORA:

Rosa Vargas Camacho

DIRECTOR DE RELACIONES INTERNACIONALES

Ing. Gian Piero Mubarak

DIRECTORA DE SECCIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL

Isabel Victoria Arrunátegui Varillas

SECCIÓN IDEAS E INNOVACIONES

DIRECTOR: Fernán Muñoz Rodríguez

DIRECTORA DE LATINOAMÉRICA

Elizabeth Núñez Acosta

SECCIÓN MUNICIPAL Y REGIONAL PUBLIREPORTAJES

DIRECTOR: Jaime Rossi del Castillo

SECCIÓN JURÍDICA - JUDICIAL

DIRECTOR: Dr. Humberto Valladares Ñaupari

SECCIÓN JURÍDICA-JUDICIAL SUBDIRECTORA

Antuanette Zuloeta

CORRESPONSAL DE LATINOAMÉRICA

Juan Cruz Castiñeiras

CORRESPONSAL DE COLOMBIA

Roque Alfredo Pimentel Gómez

DIRECTOR DE PRODUCCIÓN VISUAL Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Julio César Barriga V.

REDACCIÓN

María Ruth Díaz Ñato
Pedro Arrunátegui Arainga

REPORTERA INTERNACIONAL

Angelly Yolein Lázaro Cubas

REPORTERO GRÁFICO LATINOAMERICANO

Ángel López Remigio

COLABORADORES

Jorge Luis Espinoza Sánchez
María Carolina Renaud
Ricardo Ángel Basílico
Abraham Fudrini
Carmela de Orbegoso Russell
Walter Espinoza
José Torres Iriarte
Víctor Plaza Vidaurre
Luisa Victoria Gil Salas
Jorge Chávez Cotrina
Rosa Arrunátegui Alejandría

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SISTEMAS

Rubén Taipe Janampa

DIRECTOR DE MEDIA STREAM

Omar José Salvatierra Berrocal

REALIZADOR AUDIOVISUAL

Carlos A. Gabe Villaverde

ASESORA EN SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

Marlene Gutiérrez Astudillo

LOGÍSTICA Y SEGURIDAD

Samuel Estrada Meza

ASESORÍA LEGAL

Estudio Flint Abogados

ASESORÍA CONTABLE

Gil y Asociados Consultora Contable

NOTARIO

- Notaría Zuleta Guimet
- Notaría Soldevilla Gala

IMPRESIÓN

Vértice Consultores Gráficos

DISTRIBUCIÓN

JustoMedio Distributions

EDITADO POR PRINCIPE PRODUCCIONES S.A.C.

Nicolas de Pierola N° 917 Of. 211 Cercado de Lima Lima-Perú
Central: (511) 427-2060 Web site: www.justomedio.com E-mail: redaccion@justomedio.com
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2008-04025

"La verdad no la buscaré, ni con mi mano derecha ni con mi mano izquierda; porque en los extremos no habita la razón".
LAOZI, TAO TÉ KING SIGLO V A.C.

Nota de Redacción: La Revista JustoMedio no se solidariza necesariamente con las opiniones de sus entrevistados.

CAPITALISMO POPULAR

El Emprendimiento que sostiene la Economía Peruana



Por: Marco Antonio Arrunátegui Cevallos*

*Economista Graduado en La Sorbona de París, Francia y Abogado con Maestría en Derecho Penal en la Universidad Federico Villarreal de Lima, Perú.

“Cuando el empleo escasea, la creatividad y el esfuerzo de millones de peruanos se convierten en el principal motor de la economía.”



Durante las últimas décadas, el Perú ha experimentado un fenómeno económico y social que merece mayor atención desde las políticas públicas: el crecimiento del denominado capitalismo popular. Se trata de millones de peruanos que, ante la falta de oportunidades en el mercado laboral formal, decidieron crear su propio empleo mediante pequeños negocios, emprendimientos familiares, comercio, servicios, producción artesanal, agricultura, transporte y, más recientemente, plataformas digitales.

Lejos de responder a una estrategia planificada del Estado, este fenómeno nació de la necesidad y del espíritu emprendedor de la población. Familias enteras transformaron la incertidumbre en oportunidad, demostrando una extraordinaria capacidad de adaptación frente a las sucesivas crisis económicas, políticas y sanitarias que ha enfrentado el país.

Hoy, ese esfuerzo silencioso sostiene una parte importante de la economía nacional.

Una economía impulsada por los emprendedores

El Perú figura entre los países con mayor vocación emprendedora de América Latina. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), las micro y pequeñas empresas representan más del 99 % del universo empresarial peruano y gene-

ran alrededor del 60 % del empleo privado. A ello se suma que más del 70 % de la población ocupada desarrolla sus actividades en condiciones de informalidad, realidad que refleja tanto las limitaciones del mercado laboral formal como la capacidad de millones de ciudadanos para generar ingresos por cuenta propia.

Detrás de cada pequeña bodega, restaurante, taller, agricultor, comerciante, transportista o profesional independiente existe una historia de esfuerzo, inversión familiar y perseverancia. En muchos casos, estos emprendimientos comenzaron con escasos recursos, sin acceso al sistema financiero y enfrentando una compleja carga burocrática.

Sin embargo, lograron consolidarse gracias al trabajo diario y a la confianza de sus clientes.

La informalidad: un desafío pendiente

El crecimiento del capitalismo popular también pone en evidencia una realidad que el país no ha logrado resolver: la elevada informalidad.

La mayoría de pequeños emprendedores no permanece fuera de la formalidad por decisión propia, sino porque los costos administrativos, tributarios y laborales muchas veces resultan desproporcionados para negocios de reducida escala. A ello se suman la excesiva tramitología, la limitada asistencia técnica y las dificultades para acceder al crédito formal.

La informalidad genera importantes consecuencias. Reduce la productividad, limita el acceso al financiamiento, restringe la protección social de los trabajadores y disminuye la recaudación fiscal necesaria para financiar servicios públicos de calidad.

Formalizar no debe significar únicamente exigir obligaciones, sino ofrecer beneficios concretos que hagan atractivo incorporarse plenamente a la economía formal.

El nuevo emprendedor peruano

La transformación tecnológica también ha cambiado el perfil del emprendimiento nacional.

Hoy miles de pequeños empresarios utilizan redes sociales, plataformas digitales, comercio electrónico y sistemas de pago electrónicos para ampliar sus mercados. La pandemia aceleró este proceso y permitió que numerosos negocios encontraran nuevas formas de comercialización.

Este cambio demuestra que la innovación ya no es exclusiva de las grandes empresas.

La digitalización representa una oportunidad para incrementar la productividad, reducir costos y



La digitalización representa una oportunidad para incrementar la productividad, reducir costos y acceder a nuevos consumidores dentro y fuera del país.

acceder a nuevos consumidores dentro y fuera del país.

Un Estado promotor y no un Estado obstaculizador

El capitalismo popular requiere políticas públicas orientadas a fortalecer el ecosistema emprendedor. Más que subsidios permanentes, los emprendedores necesitan reglas claras, estabilidad jurídica y un Estado que facilite el desarrollo de sus actividades.

Entre las principales prioridades destacan:

- Simplificación administrativa para la apertura y funcionamiento de empresas.
- Acceso oportuno al financiamiento mediante programas de garantías y créditos competitivos.
- Capacitación en gestión empresarial, innovación y transformación digital.
- Incentivos para la formalización progresiva.
- Fortalecimiento de la educación financiera;
- Mayor articulación entre el sector público, la academia y el sector privado.
- Promoción de la exportación de productos y servicios desarrollados por las micro y pequeñas empresas.

Cada nuevo emprendimiento exitoso representa empleo, inversión, innovación y mayores oportunidades para las familias peruanas.

Desarrollo con inclusión

El capitalismo popular no debe entenderse únicamente como un fenómeno económico, sino también como un mecanismo de movilidad social.



Miles de familias han logrado mejorar sus condiciones de vida gracias al trabajo independiente, al ahorro y a la inversión realizada en sus propios negocios. Muchos pequeños emprendimientos terminan convirtiéndose en empresas consolidadas que generan empleo

formal y dinamizan las economías regionales.

Fortalecer este sector significa reducir la pobreza, ampliar la base productiva y descentralizar el crecimiento económico.

Reflexión final

El capitalismo popular constituye una de las mayores fortalezas del Perú contemporáneo. Ha demostrado que, incluso en los momentos más difíciles, millones de ciudadanos son capaces de generar oportunidades mediante el trabajo, la creatividad y la iniciativa privada.

El desafío del próximo gobierno consiste en reconocer ese esfuerzo y convertirlo en una verdadera política de Estado. Ello implica construir un entorno donde emprender sea más sencillo, formalizar resulte conveniente y crecer empresarialmente deje de ser una excepción para convertirse en una posibilidad real.

Desde Revista Justo Medio, consideramos que el desarrollo económico sostenible no depende únicamente de las grandes inversiones. También se construye cada día en los mercados, talleres, campos agrícolas, pequeñas empresas y negocios familiares que, con esfuerzo y perseverancia, sostienen la economía nacional. Apostar por el capitalismo popular es apostar por el talento, la resiliencia y la capacidad emprendedora de millones de peruanos que hacen del trabajo su principal herramienta de progreso.

Esa es mi opinión, en uso de las facultades que otorga la Constitución a todos los ciudadanos (Artículo 2°, Inciso 4).

Por: Equipo Multidisciplinario de la Revista JustoMedio



Diez Reformas Estructurales para Construir un Estado Moderno, Eficiente y Competitivo

“Los problemas estructurales no se resuelven con medidas temporales. Requieren visión de Estado, continuidad en las políticas públicas y la voluntad de emprender reformas que trasciendan un período de gobierno.”

El Perú inicia un nuevo quinquenio con importantes fortalezas macroeconómicas, una población emprendedora y abundantes recursos naturales. Sin embargo, también enfrenta profundas brechas en seguridad, justicia, educación, salud, infraestructura, productividad y calidad institucional.

Durante las últimas décadas, diversos gobiernos han impulsado reformas parciales que, si bien generaron avances en determinados sectores, no lograron transformar de manera integral el funcionamiento del Estado. La consecuencia es un aparato público que continúa mostrando limitaciones para responder con eficacia a las demandas de la ciudadanía.

Frente a este escenario, diversos especialistas coinciden en que el país necesita una agenda de reformas estructurales que permita sentar las bases de un crecimiento sostenido, con instituciones sólidas y mayor competitividad.

1

Reforma integral de la seguridad ciudadana

La expansión del crimen organizado ha convertido la seguridad en el principal desafío nacional.

La prioridad debe centrarse en fortalecer la inteligencia policial, modernizar el equipamiento de las fuerzas del orden, mejorar la coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial, reforzar el control fronterizo y combatir las economías ilegales que financian la delincuencia.

Una política de seguridad eficiente requiere planificación, tecnología y continuidad.



2

Reforma del sistema de justicia

La administración de justicia enfrenta problemas relacionados con la sobrecarga procesal, la demora en los procesos, la percepción de corrupción y la limitada confianza ciudadana.

La modernización debe orientarse hacia:

- Expedientes judiciales completamente digitales.
- Interoperabilidad entre instituciones.
- Especialización de juzgados.
- Fortalecimiento de la carrera judicial y fiscal.
- Transparencia en la evaluación del desempeño.

Una justicia oportuna fortalece el Estado de derecho y mejora el clima para la inversión.



3

Reforma del Estado y simplificación administrativa

El exceso de procedimientos continúa siendo uno de los principales obstáculos para ciudadanos y empresas. La digitalización de los servicios públicos, la reducción de trámites innecesarios y la interoperabilidad entre entidades permitirán disminuir tiempos, costos y espacios para la corrupción.

El ciudadano debe adaptarse cada vez menos al Estado; el Estado debe adaptarse al ciudadano.

4

Reforma educativa orientada al siglo XXI

La educación constituye la principal herramienta para reducir desigualdades y mejorar la competitividad.

Resulta indispensable fortalecer:

- La educación inicial.
- La formación docente.
- La educación técnica.
- La investigación científica.
- La innovación.
- La enseñanza de idiomas.
- Las competencias digitales y la inteligencia artificial.

El desafío consiste en formar profesionales preparados para los empleos del futuro



5

Reforma del sistema de salud

La pandemia evidenció importantes debilidades estructurales.

Las prioridades deben orientarse hacia:

- Fortalecimiento del primer nivel de atención.
- Ampliación de infraestructura hospitalaria.
- Digitalización de historias clínicas.
- Telemedicina.
- Prevención de enfermedades.
- mejor distribución del personal médico especializado.

La salud debe entenderse como una inversión estratégica para el desarrollo nacional.

6

Reforma tributaria para promover la formalización

La elevada informalidad limita la productividad y reduce la capacidad recaudatoria del Estado.

La política tributaria debe incentivar la formalización mediante procedimientos simples, reglas estables y un sistema proporcional a la capacidad económica de los contribuyentes.

Formalizar debe representar una ventaja para el emprendedor y no una carga excesiva.

7

Reforma laboral y promoción del empleo

El crecimiento económico necesita traducirse en empleo digno y productivo.

Las políticas públicas deben incentivar la contratación formal, fortalecer la capacitación laboral, promover la certificación de competencias y facilitar la inserción de jóvenes y mujeres al mercado de trabajo.

La inversión privada continúa siendo el principal generador de empleo formal.

8

Reforma de infraestructura y descentralización

El cierre de brechas en transporte, agua potable, saneamiento, conectividad digital y energía constituye uno de los mayores desafíos del país.

La descentralización debe ir acompañada de fortalecimiento institucional, asistencia técnica y una mejor capacidad de gestión en gobiernos regionales y municipales.

La infraestructura incrementa la competitividad y reduce las desigualdades territoriales.

9

Reforma para impulsar la innovación y la transformación digital

La economía mundial avanza hacia procesos cada vez más digitalizados.

El Perú necesita acelerar la adopción de tecnologías emergentes mediante:

- Inteligencia artificial.
- Automatización.

- Gobierno digital.
- Ciberseguridad.
- Investigación científica.
- Apoyo a startups tecnológicas.

La innovación será uno de los principales factores de competitividad durante la próxima década.

10

Reforma política para fortalecer la gobernabilidad

La estabilidad institucional constituye un requisito indispensable para cualquier proceso de desarrollo.

Resulta necesario promover reformas que fortalezcan los partidos políticos, mejoren la representación ciudadana, incrementen la

transparencia del financiamiento político y favorezcan una relación más equilibrada entre los poderes del Estado.

La gobernabilidad depende tanto de buenas normas como de una cultura democrática basada en el diálogo y el respeto institucional.

Un nuevo pacto para el desarrollo

Las reformas estructurales requieren continuidad y consenso. No pueden depender exclusivamente de la voluntad de un gobierno ni interrumpirse con cada cambio de administración.

El país necesita construir políticas de Estado que trasciendan los ciclos electorales y cuenten con la participación del sector público, la empresa privada, la academia y la sociedad civil.

Los países que han logrado mayores niveles de desarrollo comparten una característica común: la capacidad de mantener objetivos estratégicos de largo plazo.

Conclusiones

El debate técnico permite identificar algunos consensos fundamentales:

- La seguridad ciudadana debe convertirse en una prioridad permanente.
- La modernización del Estado es indispensable para mejorar los servicios públicos.
- La educación, la salud y la innovación constituyen inversiones estratégicas y no simples gastos públicos.
- La formalización empresarial y la inversión privada son esenciales para generar empleo y crecimiento económico.
- La estabilidad política y el fortalecimiento institucional crean las condiciones necesarias para el desarrollo sostenible.

Reflexión Final

El Perú posee el potencial humano, económico y geográfico para convertirse en una de las economías más dinámicas de América Latina. Sin embargo, alcanzar ese objetivo exige decisiones que trasciendan la coyuntura política y se orienten hacia una visión compartida de futuro.

Las reformas estructurales no deben entenderse como un fin en sí mismas, sino como instrumentos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, fortalecer las instituciones y generar igualdad de oportunidades. El verdadero desafío del próximo gobierno será impulsar estos cambios con liderazgo, capacidad técnica y vocación de consenso.

Desde Revista la Justo Medio, sostenemos que el desarrollo sostenible solo será posible si el país avanza hacia un Estado moderno, eficiente, transparente y promotor de la inversión, el emprendimiento y la justicia social, donde las políticas públicas respondan al interés nacional y no a las urgencias de la coyuntura política.



¿CÓMO DERROTAR AL CRIMEN ORGANIZADO?

Siete propuestas para recuperar la seguridad y el Estado de derecho

“La seguridad ciudadana no puede seguir siendo una promesa electoral. Debe convertirse en una política de Estado permanente, articulada y basada en resultados.”

La inseguridad ciudadana se ha consolidado como la principal preocupación de los peruanos. La expansión de las extorsiones, el sicariato, la minería ilegal, el narcotráfico, la trata de personas y otras economías ilícitas evidencia que el crimen organizado ha evolucionado hacia estructuras cada vez más sofisticadas, con capacidad para infiltrar instituciones públicas, corromper funcionarios y generar elevados niveles de violencia.

Frente a esta realidad, Revista Justo Medio convocó a diversos especialistas para responder una pregunta fundamental: ¿qué debe hacer el próximo gobierno para recuperar el control del territorio y devolver la tranquilidad a la población?

Aunque existen distintas perspectivas, el consenso es claro: la lucha contra el crimen organizado requiere una estrategia integral que combine prevención, inteligencia, fortalecimiento institucional y desarrollo económico.

1 Recuperar la inteligencia policial

Los especialistas coinciden en que ninguna organización criminal puede ser desarticulada únicamente mediante operativos reactivos. Es indispensable fortalecer los sistemas de inteligencia, anticipar las acciones delictivas e identificar las redes de financiamiento que sostienen a las organizaciones criminales.

La inversión en tecnología, análisis de datos e intercambio de información entre instituciones debe convertirse en una prioridad.

2 Fortalecer la investigación y la justicia

La eficacia de la lucha contra el crimen depende de una coordinación permanente entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

La investigación criminal requiere mayores recursos, laboratorios especializados, capacitación continua y procesos judiciales más ágiles, respetando siempre el debido proceso y las garantías constitucionales.

La impunidad continúa siendo uno de los principales incentivos para la expansión del delito.



MESA REDONDA

3 Atacar las finanzas del crimen organizado

Toda organización criminal necesita recursos para operar.

Por ello, además de capturar a sus integrantes, resulta indispensable identificar y decomisar los bienes obtenidos mediante actividades ilícitas.

El fortalecimiento de las unidades de inteligencia financiera y la cooperación internacional permiten seguir la ruta del dinero y debilitar las estructuras económicas que sostienen a estas organizaciones.

4 Recuperar el control del territorio

Diversas zonas del país han sido afectadas por actividades ilícitas vinculadas a la minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal y el contrabando.

La presencia efectiva del Estado no puede limitarse a intervenciones policiales temporales. Debe incluir infraestructura, educación, salud, oportunidades de empleo y servicios públicos que reduzcan la influencia de las economías ilegales sobre la población.

Donde el Estado está ausente, el crimen organizado encuentra espacio para crecer.

5 Prevenir antes que reprimir

La seguridad también se construye mediante políticas sociales.

La reducción de la deserción escolar, el acceso a educación técnica, el fortalecimiento de programas deportivos y culturales, así como mayores oportunidades laborales para los jóvenes, contribuyen a disminuir los factores de riesgo asociados a la delincuencia.

Invertir en prevención resulta menos costoso que enfrentar posteriormente las consecuencias del crimen.

6 Tecnología al servicio de la seguridad

La transformación digital ofrece nuevas herramientas para combatir la criminalidad.

La incorporación de inteligencia artificial, videovigilancia inteligente, reconocimiento de patrones delictivos, interoperabilidad de bases de datos y sistemas modernos de geolocalización pueden incrementar significativamente la capacidad de respuesta de las autoridades.

La tecnología no reemplaza al factor humano, pero fortalece la eficiencia de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.

7 Tecnología al servicio de la seguridad

Los especialistas consideran que la seguridad ciudadana no debe depender de los cambios de gobierno.

Se requiere una política pública con objetivos de mediano y largo plazo, indicadores de cumplimiento y una coordinación permanente entre el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales, municipalidades, sector privado y sociedad civil.

La lucha contra el crimen organizado exige continuidad, liderazgo político y voluntad de trabajar de manera articulada.

Conclusiones de la Mesa Redonda

Los participantes coincidieron en cuatro ideas fundamentales:

- La seguridad ciudadana debe convertirse en una prioridad nacional permanente y no en una respuesta coyuntural.
- La inteligencia, la investigación financiera y la cooperación interinstitucional son más eficaces que las acciones exclusivamente represivas.
- La prevención social constituye un complemento indispensable de la acción policial y judicial.
- El fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción son condiciones esenciales para enfrentar con éxito al crimen organizado.

Reflexión Final

El crimen organizado representa hoy una de las mayores amenazas para la democracia, la economía y la convivencia social. Su combate requiere firmeza, profesionalismo y respeto irrestricto al Estado de derecho. No existen soluciones inmediatas ni medidas aisladas capaces de resolver un problema de esta magnitud.

Desde Revista Justo Medio, consideramos que el Perú necesita una política nacional de seguridad construida sobre tres pilares fundamentales: instituciones sólidas, inteligencia estratégica y prevención social. Recuperar la tranquilidad de los ciudadanos exige liderazgo político, coordinación entre los poderes del Estado y una acción sostenida que trascienda los periodos de gobierno. Solo así será posible garantizar un entorno seguro para las familias, promover la inversión y fortalecer la democracia como base del desarrollo sostenible.



**ARRUNATEGUI
PARTNERS**

ESTUDIO JURIDICO MULTIDISCIPLINARIO

**FIRMA JURÍDICA MULTIDISCIPLINARIA
ESPECIALIZADA.**

**QUE BRINDA ASESORÍA ESTRATÉGICA Y
REPRESENTACIÓN LEGAL DE ALTO NIVEL PARA
PERSONAS, EMPRESAS Y ORGANIZACIONES QUE
REQUIEREN SOLUCIONES EFECTIVAS
Y RESULTADOS CONCRETOS.**

Derecho Civil
Derecho Penal
Derecho Laboral
Derecho Constitucional
Derecho Municipal
Derecho Tributario
Derecho Administrativo
Derecho Electoral
Derechos Humanos
Propiedad Intelectual
Derechos del Consumidor
Derecho Penal Militar y Policial

CONTACTANOS:

✉ consultas@arrunateguipartners.com

📅 agenda@arrunateguipartners.com

✉ maac@arrunateguipartners.com

☎ **(+51) 939 308 241**

ARRUNATEGUI PARTNERS

Abogados | Consultores | Litigios Estratégicos

Donde la experiencia jurídica se convierte en resultados.

📍 **Dirección: Nicolás de Piérola 917 Of. 211 Plaza San Martín Lima 1 - Perú**

**Web: <https://www.arrunateguipartners.com/>
Revistas.PeruRadio.net.pe**

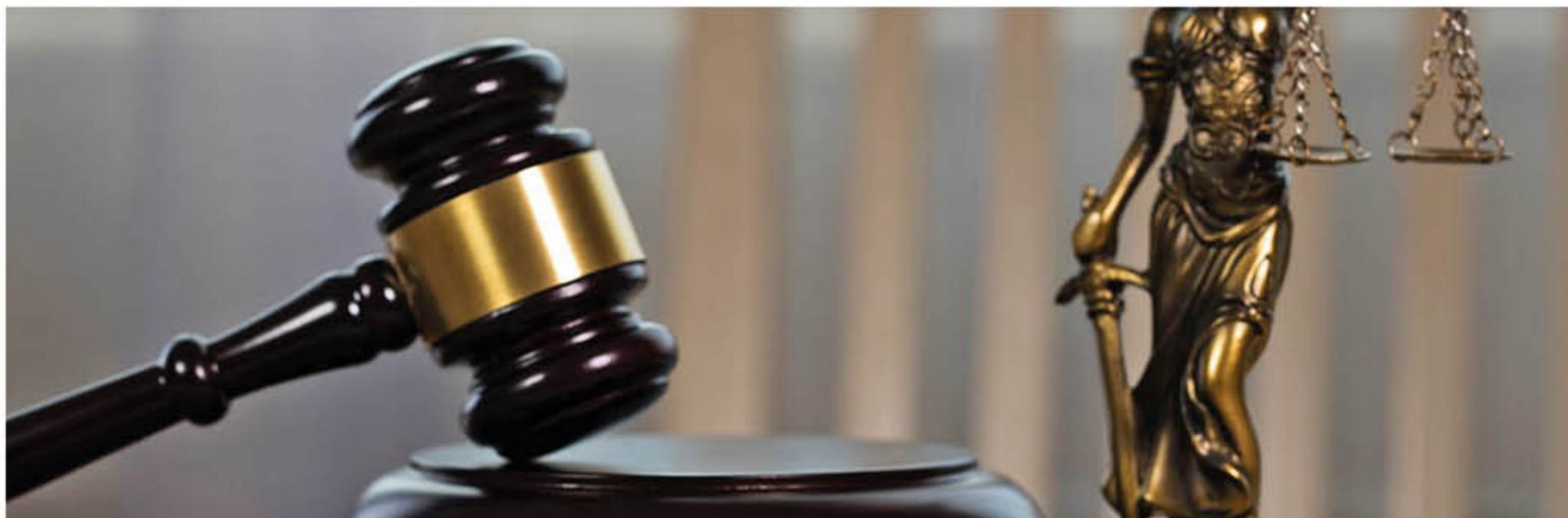


¿GARANTISMO O IMPUNIDAD?

La urgente necesidad de replantear la política criminal frente al crimen organizado en el Perú

Por: ARRUNATEGUI PARTNERS – Abogados | Consultores | Litigios Estratégicos

"El Derecho Penal debe proteger la libertad de los inocentes, pero también garantizar que la ley actúe con firmeza frente a quienes convierten el delito en una forma de vida."



Introducción

Durante las últimas décadas, el Derecho Penal peruano ha evolucionado bajo el principio del garantismo, fortaleciendo la protección de los derechos fundamentales, el debido proceso y la presunción de inocencia. Estos principios constituyen pilares irrenunciables del Estado Constitucional de Derecho y no pueden ser sacrificados bajo ninguna circunstancia.

Sin embargo, la realidad que vive el país obliga a formular una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿el sistema penal peruano ha encontrado el equilibrio adecuado entre la protección de los derechos

del investigado y el derecho de los ciudadanos a vivir seguros?

La respuesta merece una reflexión profunda. Cuando la delincuencia organizada expande su poder, las extorsiones paralizan a pequeños empresarios, el sicariato se vuelve cotidiano y la ciudadanía percibe que la justicia llega tarde o nunca, el debate deja de ser exclusivamente jurídico y se convierte en un asunto de supervivencia institucional.

No se trata de elegir entre garantismo o autoritarismo. El verdadero desafío consiste en construir un sistema penal eficaz que respete

los derechos fundamentales, pero que también proteja de manera efectiva a las víctimas y a la sociedad.

El crimen organizado ya no es delincuencia común

El Perú enfrenta una criminalidad distinta a la de hace veinte años.

Hoy operan organizaciones dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico de armas, el lavado de activos, la extorsión y el sicariato, con estructuras jerarquizadas, financiamiento internacional y capacidad para infiltrar instituciones públicas.



Estas organizaciones no improvisan. Planifican, invierten, reclutan, corrompen y utilizan tecnología para ampliar sus operaciones.

Combatirlas con herramientas diseñadas para enfrentar delitos individuales resulta claramente insuficiente.

El crimen organizado ha evolucionado; la política criminal también debe hacerlo.

¿Estamos utilizando el Derecho Penal del siglo pasado para combatir el crimen del siglo XXI?

Gran parte de la legislación procesal fue concebida para investigar delitos tradicionales.

Sin embargo, hoy las organizaciones criminales operan mediante redes internacionales, utilizan criptomonedas, plataformas digitales, inteligencia artificial y mecanismos financieros altamente sofisticados.

Mientras tanto, muchas investigaciones continúan enfrentando limitaciones tecnológicas, escasez de recursos humanos especializados y una excesiva carga procesal. La consecuencia es evidente: Los procesos se prolongan.

Las investigaciones pierden eficacia.

Las víctimas pierden confianza.

Y las organizaciones criminales continúan operando.

Garantías sí... pero también resultados

Defender el debido proceso no significa aceptar la ineficacia del sistema penal.

Las garantías constitucionales protegen a todos los ciudadanos y constituyen uno de los mayores logros del Estado de Derecho.

Pero también existe otro derecho fundamental:

El derecho de la sociedad a vivir en seguridad.

Cuando una organización criminal extorsiona durante años a comerciantes sin recibir una respuesta eficaz del Estado, también se están vulnerando derechos fundamentales.

Cuando un empresario debe cerrar su negocio por amenazas permanentes, también fracasa el sistema de justicia.

Cuando una familia pierde a uno de sus integrantes por el sicariato, la discusión deja de ser únicamente procesal.

El Derecho Penal debe proteger tanto la libertad individual como la seguridad colectiva.

La prisión preventiva no puede convertirse en política criminal

Uno de los debates más intensos de los últimos años gira alrededor de la prisión preventiva.

Su utilización indiscriminada vulnera el principio de presunción de inocencia.

Pero su aplicación excesivamente restrictiva también puede facilitar la continuidad de organizaciones criminales altamente peligrosas. El problema no reside en la institución jurídica.

El problema aparece cuando se utiliza para compensar investigaciones deficientes o cuando se convierte en el único instrumento disponible frente a una estructura criminal compleja.

La verdadera solución consiste en mejorar la calidad de las investigaciones y no en convertir las medidas cautelares en sustitutos de una política criminal eficiente.

Inteligencia antes que improvisación

Los países que han logrado reducir significativamente la criminalidad organizada tienen un elemento en común:

La inteligencia criminal.

El intercambio de información, el análisis financiero, la cooperación internacional, la investigación patrimonial y el uso de tecnología permiten atacar la estructura





económica de las organizaciones criminales antes que únicamente detener a sus integrantes.

Golpear las finanzas del crimen suele ser mucho más efectivo que multiplicar operativos aislados.

La corrupción: el mayor aliado del crimen

Ninguna organización criminal alcanza niveles elevados de expansión sin algún grado de corrupción institucional.

Funcionarios públicos, autoridades, policías o servidores que colaboran con redes ilícitas terminan debilitando todo el sistema de justicia.

Por ello, la lucha contra el crimen organizado debe ir acompañada de una política permanente de integridad pública, transparencia y control interno.

No basta con perseguir delincuentes.

También es indispensable cerrar los espacios que permiten la infiltración criminal dentro del Estado.

Cinco reformas impostergables
Desde una perspectiva técnico-jurídica, el Perú debería impulsar una reforma integral de su política criminal basada en cinco ejes:

Primero. Fortalecer las unidades especializadas de inteligencia e investigación financiera.

Segundo. Incorporar tecnología e inteligencia artificial para el análisis criminal y la investigación digital.

Tercero. Incrementar la protección de jueces, fiscales, policías y testigos que participan en procesos contra organizaciones criminales.



Cuarto. Modernizar la legislación sobre extorsión, lavado de activos, ciberdelincuencia y crimen organizado.

Quinto. Crear una verdadera política nacional de prevención que reduzca el ingreso de jóvenes a las economías ilegales mediante educación, empleo y oportunidades.

El gran desafío

El Derecho Penal no puede medirse únicamente por la cantidad de leyes aprobadas ni por el incremento de las penas.

Su verdadera eficacia se refleja cuando reduce la criminalidad, fortalece la confianza ciudadana y garantiza que la justicia actúe con rapidez, independencia y respeto a los derechos fundamentales.

El populismo penal tampoco constituye una solución.

Endurecer penas sin fortalecer la investigación, la inteligencia y el sistema penitenciario produce escasos resultados.

La política criminal debe construirse sobre evidencia, no sobre titulares.

Reflexión Final

El Perú atraviesa uno de los momentos más críticos en materia de seguridad ciudadana. La expansión del crimen organizado exige abandonar tanto la improvisación como los extremos ideológicos. Ni el endurecimiento indiscriminado de las penas resolverá el problema, ni un sistema incapaz de responder con eficacia frente a organizaciones criminales devolverá la tranquilidad a la ciudadanía.

Desde Arrunategui Partners, sostenemos que ha llegado el momento de replantear la política criminal del Estado peruano. No para restringir derechos fundamentales, sino para garantizar que el Derecho Penal cumpla su verdadera finalidad: proteger a las personas, preservar el Estado de Derecho y asegurar que la justicia sea oportuna, eficaz y equitativa.

La mayor garantía que puede ofrecer un Estado democrático no es únicamente un debido proceso impecable; es también la certeza de que ningún ciudadano tendrá que vivir bajo el miedo impuesto por el crimen organizado. Ese debe ser el verdadero objetivo de la justicia penal en el Perú del siglo XXI.



¿PROTEGE REALMENTE EL DERECHO CIVIL AL PROPIETARIO?

La Excesiva Tutela del Ocupante y la Necesidad de Recuperar la Seguridad Jurídica

Por: ARRUNATEGUI PARTNERS – Abogados | Consultores | Litigios Estratégicos

"El derecho de propiedad constituye uno de los pilares del Estado de derecho. Cuando el propietario no puede ejercer plenamente sus derechos, se debilita la confianza en la justicia, la inversión y el desarrollo económico."

Introducción

El derecho de propiedad es reconocido por la Constitución Política del Perú como un derecho fundamental y constituye uno de los principales pilares de la economía social de mercado. Sin embargo, en la práctica, numerosos propietarios enfrentan una realidad muy distinta: recuperar un inmueble ocupado ilegalmente puede demandar años de procesos judiciales, elevados costos económicos y una incertidumbre que muchas veces termina favoreciendo al ocupante antes que al verdadero titular del derecho.

Esta situación ha abierto un debate jurídico cada vez más intenso: ¿el sistema de justicia protege realmente al propietario o ha generado un desequilibrio que termina incentivando la ocupación ilegal de inmuebles?

No se trata de desconocer los derechos humanos ni las garantías procesales. El verdadero debate consiste en determinar si el Estado ha encontrado el equilibrio adecuado entre la protección de



la propiedad privada y la tutela de quienes ocupan un bien sin contar con un título válido.

Un derecho constitucional con protección insuficiente

La Constitución reconoce el derecho de propiedad como inviolable y dispone que el Estado debe garantizar su protección.

Sin embargo, la realidad judicial evidencia que muchos propietarios enfrentan procesos de desalojo, reivindicación o ejecución que pueden prolongarse durante varios años, aun cuando su derecho se encuentre plenamente acreditado.

Mientras tanto, el ocupante continúa utilizando el inmueble, percibiendo beneficios económicos o impidiendo que el propietario disponga libremente de su patrimonio.

Esta situación genera una evidente contradicción entre el reconocimiento constitucional del derecho y su protección efectiva.

El costo de una justicia tardía

En materia civil suele afirmarse que "justicia tardía equivale a justicia denegada".

Cuando un propietario debe esperar varios años para recuperar un inmueble, el perjuicio trasciende el aspecto patrimonial.

Existen consecuencias adicionales:

- Pérdida de ingresos por alquiler.
- Deterioro del inmueble.
- Incremento de gastos judiciales.
- Imposibilidad de vender o invertir.
- Incertidumbre jurídica.
- Afectación del crédito y del patrimonio familiar.

En muchos casos, el proceso termina siendo más costoso que el propio bien cuya restitución se reclama.



La otra cara del problema

No puede desconocerse que existen situaciones donde familias vulnerables ocupan inmuebles por razones económicas o sociales.

El Estado tiene la obligación de desarrollar políticas públicas de vivienda, inclusión social y protección de personas en situación de vulnerabilidad.

Sin embargo, estas políticas no pueden financiarse trasladando la carga exclusivamente al propietario privado.

La solución al déficit habitacional corresponde al Estado, no al ciudadano que legítimamente adquirió un inmueble mediante años de trabajo y ahorro.

Confundir política social con afectación del derecho de propiedad termina debilitando ambos objetivos.

Seguridad jurídica e inversión

La protección efectiva del derecho de propiedad no beneficia únicamente al propietario.

Constituye uno de los principales factores que determinan la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros.

Cuando existe incertidumbre respecto de la recuperación de un bien o la ejecución de contratos, disminuye la inversión inmobiliaria, se incrementan los costos del crédito y se reduce la competitividad del país.

La seguridad jurídica representa uno de los activos más importantes para el desarrollo económico.

Los países con mayores niveles de inversión suelen contar con procedimientos civiles ágiles, previsibles y eficientes.

¿Qué reformas necesita el Derecho Civil?

El desafío consiste en modernizar la justicia civil sin sacrificar las garantías del debido proceso.

Algunas reformas podrían contribuir significativamente:

- Procesos de desalojo más céleres cuando el derecho de propiedad se encuentre plenamente acreditado.
- Expedientes completamente digitales, reduciendo tiempos procesales.
- Mayor utilización de audiencias virtuales y medios tecnológicos.
- Fortalecimiento de la conciliación especializada en conflictos patrimoniales.
- Sanciones efectivas frente a la litigación temeraria, evitando el uso abusivo del proceso judicial como mecanismo dilatorio.
- Especialización de juzgados civiles para atender con mayor eficiencia procesos relacionados con propiedad y contratos.

Estas medidas no buscan restringir derechos, sino garantizar que la tutela jurisdiccional sea realmente efectiva.

Un debate necesario

Resulta legítimo preguntarse si el sistema jurídico peruano ha desplazado progresivamente el centro

de protección desde el derecho de propiedad hacia una excesiva prolongación de los conflictos judiciales.

La discusión no debe plantearse entre propietarios y ocupantes, sino entre un sistema eficiente y otro que, por su lentitud, termina perjudicando a todas las partes.

El Derecho Civil no puede perder de vista que la función principal de la justicia consiste en resolver conflictos oportunamente.

Cuando ello no ocurre, la confianza ciudadana comienza a deteriorarse.

Conclusión

El fortalecimiento del derecho de propiedad no significa privilegiar intereses particulares sobre derechos fundamentales. Significa garantizar que toda persona pueda ejercer plenamente un derecho reconocido por la Constitución y protegido por el ordenamiento jurídico.

La seguridad jurídica constituye uno de los pilares del crecimiento económico, la inversión y la convivencia democrática. Un país donde recuperar un inmueble demora años difícilmente puede ofrecer confianza a sus ciudadanos o atraer inversiones sostenibles.

Reflexión Final

El Derecho Civil peruano enfrenta el desafío de adaptarse a una sociedad que exige respuestas más rápidas, eficientes y previsibles. La modernización de los procesos civiles, el fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y una adecuada protección del derecho de propiedad constituyen reformas impostergables.

Desde ARRUNATEGUI PARTNERS, consideramos que este debate debe abordarse con serenidad, rigor jurídico y visión de Estado. Proteger la propiedad privada no significa desconocer la función social de la propiedad; significa garantizar que el Estado cumpla su deber de brindar seguridad jurídica a todos los ciudadanos. En un país que aspira a consolidar su democracia y atraer inversión, una justicia civil oportuna y eficaz deja de ser una aspiración para convertirse en una necesidad nacional.



¿PROTEGE REALMENTE NUESTRA LEGISLACIÓN LABORAL AL TRABAJADOR... O DESALIENTA LA GENERACIÓN DE EMPLEO FORMAL?

El Desafío de encontrar el Equilibrio entre Derechos Laborales y Competitividad

Por: ARRUNATEGUI PARTNERS – Abogados | Consultores | Litigios Estratégicos

"Un país no elige entre proteger al trabajador o promover la inversión. El verdadero desafío consiste en construir un sistema laboral que haga posible ambas cosas."

El Derecho Laboral nació para corregir el desequilibrio natural entre empleador y trabajador. Su finalidad histórica ha sido garantizar condiciones dignas de trabajo, proteger derechos fundamentales y promover relaciones laborales justas.

Sin embargo, el mundo del trabajo ha cambiado profundamente.

La digitalización, el teletrabajo, la inteligencia artificial, la economía de plataformas, la globalización y las nuevas formas de contratación están transformando la manera en que las personas producen, emprenden y generan ingresos. Frente a esta nueva realidad surge una pregunta que resulta tan necesaria como polémica:

¿Nuestra legislación laboral responde a los desafíos del siglo XXI o continúa regulando un mercado laboral que ya no existe?

Responder esta interrogante exige abandonar posiciones ideológicas

y analizar el problema desde una perspectiva técnica y objetiva.

La paradoja peruana

El Perú posee una de las legislaciones laborales más protectoras de la región en determinados aspectos, pero, al mismo tiempo, registra una de las tasas de informalidad laboral más elevadas de América Latina.

Esta aparente contradicción merece una profunda reflexión.

Si las normas laborales fueran suficientes para garantizar empleo digno, la informalidad sería mínima. Sin embargo, millones de

trabajadores desarrollan sus actividades fuera del sistema formal, sin acceso a seguridad social, vacaciones, compensación por tiempo de servicios ni protección previsional.

La primera víctima de la informalidad no es el Estado. Es el propio trabajador.

Proteger derechos también significa generar empleo

Con frecuencia, el debate laboral se plantea como una confrontación entre empleadores y trabajadores. Esa visión resulta equivocada.

No existe empleo sin empresa, ni empresa sostenible sin trabajadores comprometidos.

Ambos constituyen elementos complementarios del proceso productivo.

Una legislación excesivamente rígida puede desalentar nuevas contrataciones, limitar el crecimiento empresarial e incentivar la informalidad. Por el contrario, una regulación demasiado flexible puede debilitar la protección de los trabajadores y generar condiciones precarias.





El desafío consiste en encontrar un equilibrio razonable.

El costo de la informalidad

Más del setenta por ciento de la población ocupada desarrolla actividades en condiciones de informalidad.

Detrás de esa cifra existen millones de personas que trabajan diariamente sin cobertura de salud, sin pensión, sin estabilidad jurídica y sin mecanismos eficaces para reclamar sus derechos.

Combatir la informalidad no depende únicamente de incrementar la fiscalización.

También requiere revisar aquellos factores que dificultan la contratación formal, simplificar procedimientos administrativos y promover incentivos para las micro y pequeñas empresas.

La inteligencia artificial cambia las reglas

La automatización y la inteligencia artificial ya están modificando numerosos sectores económicos. Las tareas repetitivas serán progresivamente sustituidas por tecnologías más eficientes, mientras aumentará la demanda de trabajadores especializados en análisis, innovación, programación, gestión de datos y resolución de problemas complejos.

Este proceso no debe generar temor, sino preparación.

El Derecho Laboral tendrá que adaptarse para regular nuevas modalidades de trabajo, garantizar la capacitación permanente y facilitar la transición hacia una economía basada en el conocimiento.

¿Más normas o mejores normas?

Con frecuencia se considera que la solución consiste en aprobar

nuevas leyes laborales. No necesariamente.

En muchos casos, el problema no radica en la ausencia de normas, sino en la complejidad del sistema, la dispersión normativa y la inseguridad jurídica que enfrentan empleadores y trabajadores.

El país necesita reglas claras, estables y previsibles.

Una legislación sencilla facilita el cumplimiento voluntario.

La complejidad, por el contrario, favorece la informalidad y los conflictos judiciales.

Cinco propuestas para modernizar el Derecho Laboral

El próximo gobierno debería impulsar una reforma laboral construida sobre el consenso y orientada a la generación de empleo de calidad.

Entre las principales prioridades destacan:

Primera. Simplificar el régimen laboral para reducir costos administrativos y promover la formalización.

Segunda. Incentivar la contratación formal de jóvenes, mujeres y trabajadores mayores de 50 años mediante beneficios tributarios y programas de capacitación.

Tercera. Regular adecuadamente el trabajo remoto, la economía digital y las nuevas modalidades laborales derivadas de la transformación tecnológica.

Cuarta. Fortalecer los mecanismos de conciliación y solución temprana de conflictos laborales para reducir la excesiva judicialización.

Quinta. Promover la capacitación permanente y la reconversión laboral frente al avance de la inteligencia artificial y la automatización.

La verdadera justicia laboral

La justicia laboral no consiste únicamente en resolver conflictos después de que ocurren.

Su principal finalidad debe ser prevenirlos.

Ello exige relaciones laborales basadas en el respeto mutuo, la buena fe, la negociación y el cumplimiento oportuno de las obligaciones de ambas partes.

Trabajadores protegidos y empresas competitivas no son objetivos incompatibles.

Por el contrario, constituyen la base de una economía moderna y sostenible.

Reflexión Final

El futuro del Derecho Laboral no puede construirse mirando únicamente al pasado. La transformación tecnológica, la globalización y las nuevas formas de organización del trabajo exigen una legislación moderna, flexible e inteligente, capaz de proteger la dignidad del trabajador sin desincentivar la inversión ni la creación de empleo formal.

Desde ARRUNATEGUI PARTNERS – Abogados | Consultores | Litigios Estratégicos, consideramos que el verdadero debate ya no debe centrarse en elegir entre más protección o más competitividad. El desafío consiste en diseñar un marco laboral que promueva ambas. Un país con trabajadores protegidos, empresas sólidas y reglas claras genera mayor productividad, atrae inversiones y fortalece la paz social. La mejor política laboral no es la que produce más litigios, sino la que crea más empleo formal, reduce la informalidad y garantiza oportunidades de desarrollo para todos.



EXTINCIÓN DE DOMINIO: ¿Una Herramienta contra el Crimen o un Riesgo para el Derecho de Propiedad? El delicado equilibrio entre la lucha contra la criminalidad y las garantías constitucionales

Por: ARRUNATEGUI PARTNERS – Abogados | Consultores | Litigios Estratégicos

"El Estado tiene el deber de perseguir el patrimonio ilícito. Pero en un Estado Constitucional de Derecho, ese poder nunca puede ejercerse al margen de las garantías fundamentales."

La lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción, la minería ilegal y el lavado de activos ha llevado al Estado peruano a fortalecer diversos mecanismos jurídicos destinados a privar a las organizaciones criminales de los bienes obtenidos ilícitamente. Entre ellos, la extinción de dominio se ha convertido en una de las herramientas más poderosas y, al mismo tiempo, una de las más debatidas del Derecho contemporáneo.

Su finalidad resulta legítima: impedir que el delito siga financiándose con el patrimonio obtenido ilegalmente. Sin embargo, su aplicación también ha abierto un intenso debate jurídico sobre la protección del derecho de propiedad, la presunción de inocencia y la seguridad jurídica.

La pregunta es inevitable: ¿La extinción de dominio combate eficazmente al crimen organizado o corre el riesgo de afectar derechos fundamentales cuando se aplica sin suficientes garantías?

Una herramienta necesaria contra el crimen organizado

Ninguna organización criminal sobrevive únicamente por la violencia. Su verdadero poder radica en su capacidad económica.

Las redes de narcotráfico, corrupción, trata de personas, minería ilegal o lavado de activos utilizan empresas, inmuebles, vehículos, cuentas bancarias y otros bienes para ocultar el origen ilícito de sus ganancias.

Por ello, perseguir únicamente a las personas responsables resulta insuficiente.

El patrimonio ilícito debe ser identificado, inmovilizado y, cuando corresponda, incorporado al patrimonio del Estado.

En ese aspecto, la extinción de dominio constituye una herramienta moderna ampliamente utilizada en diversos sistemas jurídicos.

El gran debate jurídico

La controversia surge porque el proceso de extinción de dominio posee características distintas al proceso penal.

Su finalidad no consiste en imponer una pena, sino determinar si un bien tiene origen o destino ilícito.

Ello significa que, en determinadas circunstancias, puede tramitarse independientemente de una sentencia penal condenatoria.

Precisamente allí se concentra el debate.

Diversos especialistas sostienen que esta autonomía fortalece la lucha contra el crimen organizado. Otros consideran que podría generar afectaciones al derecho de propiedad si no existe una adecuada valoración de las pruebas y un estricto respeto del debido proceso.

El desafío consiste en evitar que una herramienta creada para combatir organizaciones criminales termine afectando injustamente a ciudadanos que actuaron de buena fe.

El derecho de propiedad también merece protección

La Constitución reconoce el derecho de propiedad como uno de los pilares del Estado de Derecho. Ese derecho no protege únicamente a grandes empresarios o inversionistas.



Protege también a pequeños comerciantes, agricultores, profesionales, familias y emprendedores que han construido su patrimonio mediante trabajo honesto.

Por ello, cualquier medida que limite o extinga ese derecho debe sustentarse en pruebas suficientes, procedimientos transparentes y pleno respeto de las garantías constitucionales.

Combatir el crimen no puede significar debilitar el Estado de Derecho.

La buena fe no puede convertirse en una víctima

En numerosas operaciones comerciales intervienen terceros completamente ajenos a actividades ilícitas.

Compradores de buena fe, acreedores, herederos, inversionistas o instituciones financieras pueden verse involucrados indirectamente en procesos de extinción de dominio.

El sistema jurídico debe garantizar mecanismos eficaces para proteger a quienes acrediten haber actuado con diligencia y desconocer razonablemente cualquier origen ilícito del bien.

La buena fe constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Civil y no puede quedar relegada frente a la eficacia de la persecución patrimonial.

El desafío de la prueba

La eficacia de la extinción de dominio depende, en gran medida, de la calidad de la investigación.

No basta con sospechas.

No basta con percepciones.

Resulta indispensable construir investigaciones patrimoniales sólidas, análisis financieros rigurosos y pruebas objetivas que permitan

al juez adoptar decisiones plenamente fundamentadas.

Mientras mayor sea el poder que el Estado ejerce sobre el patrimonio de los ciudadanos, mayor debe ser también el estándar de motivación y control judicial.

Cinco propuestas para fortalecer la extinción de dominio

El Perú puede consolidar esta herramienta respetando plenamente el Estado Constitucional de Derecho.

Para ello, consideramos necesarias las siguientes medidas:

Primera. Fortalecer las investigaciones financieras y patrimoniales antes de iniciar procesos de extinción de dominio.

Segunda. Garantizar un debido proceso efectivo, con pleno ejercicio del derecho de defensa y motivación reforzada de las resoluciones judiciales.

Tercera. Proteger expresamente a los terceros adquirentes de buena fe que acrediten haber actuado con diligencia.

Cuarta. Capacitar permanentemente a jueces, fiscales y aboga-

dos en técnicas de investigación patrimonial y valoración de activos complejos.

Quinta. Garantizar absoluta transparencia sobre el destino, administración y utilización de los bienes extinguidos, asegurando que beneficien efectivamente al interés público.

¿Eficacia o garantías? El falso dilema

Con frecuencia se presenta la discusión como una elección entre combatir eficazmente al crimen organizado o proteger los derechos fundamentales.

Ese planteamiento es equivocado. Un Estado democrático no debe escoger entre seguridad y libertad. Debe garantizar ambas.

Las organizaciones criminales deben ser despojadas de los bienes obtenidos ilícitamente, pero esa finalidad jamás puede justificar procedimientos arbitrarios ni decisiones carentes de suficiente sustento probatorio.

La fortaleza del Estado de Derecho se demuestra precisamente cuando combate el delito respetando la Constitución.

Reflexión Final

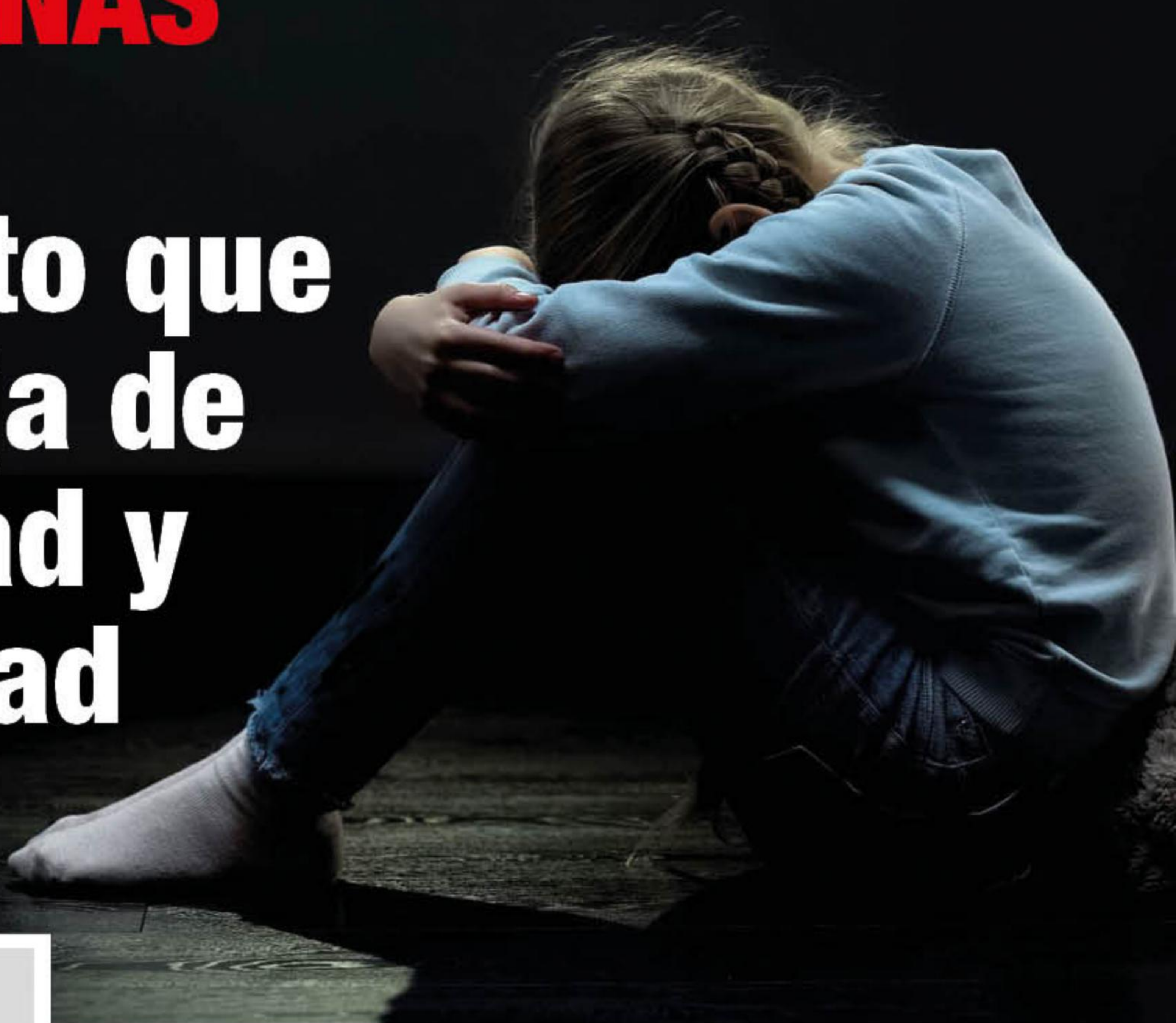
La extinción de dominio constituye una herramienta indispensable para debilitar las estructuras económicas del crimen organizado y recuperar para la sociedad los bienes provenientes de actividades ilícitas. Sin embargo, su legitimidad dependerá siempre del respeto irrestricto al debido proceso, al derecho de propiedad y a las garantías constitucionales.

Desde ARRUNATEGUI PARTNERS – Abogados | Consultores | Litigios Estratégicos, consideramos que el verdadero desafío no consiste en decidir si la extinción de dominio debe existir o no. El reto es asegurar que se aplique con el máximo rigor técnico, transparencia y control judicial. Un Estado fuerte no es aquel que ejerce mayores poderes sobre los ciudadanos, sino aquel que demuestra que puede combatir el crimen con eficacia sin renunciar a los principios que sustentan el Estado Constitucional de Derecho. Solo así la justicia será, al mismo tiempo, firme frente al delito y respetuosa de los derechos fundamentales



LA TRATA DE PERSONAS

El Delito que Despoja de Libertad y Dignidad



Por: Antuanette
Zuloeta Sánchez*

* Abogada / Subdirectora Sección Jurídica Judicial

Cada 30 de julio, el mundo conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para visibilizar uno de los delitos más graves y lucrativos del crimen organizado. Sin embargo, más allá de una efeméride, la trata de personas constituye una realidad que exige una respuesta permanente del Estado y de la sociedad. Se trata de un delito que no solo vulnera la libertad de las personas, sino que las reduce a simples objetos de explotación, atentando contra el principio más importante sobre el que se construye todo Estado democrático: **LA DIGNIDAD HUMANA.**



El Protocolo de Palermo, instrumento internacional adoptado por las Naciones Unidas en el año 2000, define la trata de personas como la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas mediante amenazas, engaño, abuso de poder o aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, con fines de explotación. Dicha explotación puede presentarse bajo diversas modalidades, como la explotación sexual, el trabajo forzoso, la servidumbre, la mendicidad, los matrimonios forzados o la extracción ilícita de órganos. En el Perú, esta conducta se encuentra tipificada en el artículo 153 del Código Penal, mientras que la Ley N.º 28950 establece medidas para prevenir el delito, proteger a las víctimas y fortalecer la persecución penal.

No obstante, contar con un marco normativo sólido no ha sido suficiente para frenar su expansión. La trata de personas continúa siendo uno de los negocios ilícitos más rentables del mundo porque explota aquello que nunca debió tener un valor económico: la vida, la libertad y la vulnerabilidad de las personas. A diferencia de otros delitos, donde el beneficio económico proviene de bienes materiales, en la trata la víctima puede ser explotada de manera reiterada durante meses o incluso años, generando ganancias permanentes para las organizaciones criminales.

Las cifras confirman la magnitud del problema. El Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2024, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), advierte que el número de víctimas detectadas aumentó aproximadamente un 25 % respecto de los niveles previos a la pandemia. Asimismo, el 38

% de las víctimas identificadas corresponde a niños, niñas y adolescentes, mientras que las mujeres y niñas continúan siendo las principales víctimas de explotación sexual. Estos datos evidencian una realidad preocupante: la criminalidad organizada encuentra en las personas en situación de vulnerabilidad el blanco perfecto para sus actividades ilícitas.

El Perú no es ajeno a esta problemática. Nuestro país es considerado un territorio de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas. Las organizaciones criminales aprovechan la pobreza, la falta de oportunidades, la migración, la violencia familiar y el acceso masivo a las tecnologías para captar a sus víctimas mediante falsas ofertas de empleo, promesas de estudios, supuestas agencias de modelaje o relaciones sentimentales creadas con fines de manipulación. Según información del Ministerio del Interior, durante el año 2024 la Policía Nacional logró rescatar 1,128 víctimas, detener a 265 presuntos tratantes y desarticular 44 organizaciones criminales dedicadas a este delito. Sin embargo, estas cifras reflejan únicamente los casos detectados; la realidad es mucho mayor, pues innumerables víctimas nunca llegan a denunciar por miedo, amenazas o dependencia emocional.

Uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo radica en el uso de las tecnologías digitales como mecanismo de captación. Hoy los tratantes ya no necesitan recorrer ciudades o comunidades para encontrar víctimas. Basta un teléfono celular y una conexión a internet. Las redes sociales se han convertido en espacios donde perfiles falsos ofrecen empleos con salarios elevados, oportunidades académicas inexistentes o

relaciones afectivas cuidadosamente planificadas para generar confianza. Esta nueva modalidad obliga a replantear las estrategias de prevención y a reconocer que la educación digital constituye una herramienta indispensable para proteger especialmente a niños, adolescentes y jóvenes.

Frente a esta realidad, la respuesta no puede limitarse al ámbito penal. La lucha contra la trata de personas exige fortalecer las políticas públicas de prevención, mejorar la coordinación entre las instituciones, garantizar una atención integral a las víctimas y promover una educación basada en el respeto irrestricto de los derechos humanos. La familia, la escuela, las universidades, los medios de comunicación y los operadores de justicia compartimos la responsabilidad de construir una sociedad capaz de identificar los riesgos y actuar antes de que la explotación ocurra.

Combatir la trata de personas implica comprender que detrás de cada estadística existe una historia interrumpida, una familia afectada y un proyecto de vida truncado. Significa reconocer que la vulnerabilidad nunca debe convertirse en una oportunidad para el delito y que la indiferencia social solo fortalece a quienes lucran con el sufrimiento ajeno. La verdadera erradicación de este fenómeno no dependerá únicamente de sanciones más severas, sino de nuestra capacidad para educar, prevenir y proteger.

Porque una sociedad que permite que un ser humano sea tratado como mercancía no solo fracasa en la aplicación de la ley; fracasa, sobre todo, en la defensa de su propia humanidad.

La urgente Transformación del Sistema Educativo Nacional

Lecciones de Singapur y desafíos para el Perú



Por: Mayor General FAP (r) Fernando Ordoñez Velázquez*

Con el triunfo esperado —aún por confirmar— de Keiko Fujimori, deberá iniciarse una profunda reestructuración del sistema educativo nacional. Durante las últimas décadas, funcionarios de izquierda y profesores ideologizados han ejercido una influencia poco positiva sobre la educación peruana. Desde el más alto nivel de formulación de políticas públicas —el Ministerio de Educación (Minedu)— se han incorporado enfoques y contenidos que han impactado negativamente en las aulas, disminuyendo el nivel de exigencia y el rendimiento académico en materias clave, bajo el pretexto de privilegiar el bienestar socioemocional del estudiante en un ambiguo marco de inclusión y diversidad.

Según el Informe Nacional de Resultados PISA 2022, publicado por la Unidad de Medición de la Calidad (UMC) del Minedu el 5 de diciembre de 2023, el país presenta un desempeño crítico en Matemática y Lectura. Los resultados muestran que el rendimiento en matemáticas es el más débil, mientras que en comprensión lectora es insuficiente en comparación con los estándares internacionales. En Lectura, solo dos de cada diez estudiantes alcanzan el nivel mínimo internacional, lo que significa que siete de cada diez no logran una comprensión lectora funcional. En Matemática la situación es aún más grave: apenas uno de cada diez estudiantes llega al nivel mínimo esperado por PISA, mientras que nueve de cada diez se mantienen en los niveles más bajos de desempeño.

En general, el país arrastra niveles de aprendizaje deficientes, con una proporción alarmante de estudiantes que no alcanzan las competencias mínimas esperadas. A esto se suman las persistentes brechas de rendimiento asociadas a desigualdades socioeconómicas y territoriales entre las zonas urbanas y rurales.

Por ello, resulta fundamental revisar los contenidos curriculares, los programas de formación docente y los materiales educativos. El propósito debe ser garantizar una educación equilibrada, plural y orientada al fortalecimiento de la identidad nacional, el respeto por las instituciones democráticas y la valoración de la historia del Perú, incluyendo la defensa de la democracia frente a la violencia terrorista que afectó al país durante décadas. Actualmente, los índices de violencia y criminalidad en los que crecen nuestros jóvenes son asumidos como una constante forma de vida basada en la confrontación social con la autoridad y el conflicto de clases, lo



que termina afectando los valores tradicionales que históricamente han contribuido a la cohesión de la sociedad peruana.

Singapur y Perú: dos modelos educativos, dos resultados distintos

Una comparación entre los sistemas educativos de Singapur y Perú permite comprender cómo las políticas públicas sostenidas influyen en la calidad de la enseñanza, la competitividad económica y el progreso nacional.

Desde su independencia en 1965, Singapur convirtió la educación

en una prioridad estratégica. Bajo el liderazgo de Lee Kuan Yew, el país entendió que, al carecer de recursos naturales significativos, su principal riqueza debía ser el conocimiento y la capacitación de su población. Como resultado, desarrolló un sistema educativo altamente exigente, orientado a la excelencia académica y estrechamente vinculado a las necesidades de su economía.

Una de las principales fortalezas de Singapur es la calidad de sus docentes. Los profesores son seleccionados minuciosamente y reciben formación especializada

en el National Institute of Education. Además, la carrera docente goza de un alto prestigio social y de oportunidades permanentes de capacitación. En el Perú, aunque existen numerosos maestros comprometidos y capaces, la profesión aún enfrenta severas limitaciones relacionadas con el presupuesto, el reconocimiento social y el acceso a una formación continua de nivel.

Mas aun, los estudiantes singapurenses destacan regularmente entre los mejores del mundo en evaluaciones internacionales. Su currículo enfatiza las matemáticas, las ciencias, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. La experiencia de Singapur demuestra que el éxito educativo no depende únicamente de la riqueza económica, sino de una visión nacional coherente y sostenida en el tiempo. Frente al modelo peruano actual, Singapur otorga un mayor énfasis a la competitividad, la excelencia educativa y la preparación para los desafíos tecnológicos y económicos del futuro, poniendo el foco en la meritocracia, la construcción del carácter y el compromiso explícito con los intereses nacionales.

Lecciones y desafíos para el país

Para el Perú, las principales lecciones de este modelo son: fortalecer la formación docente, garantizar políticas educativas estables, mejorar la infraestructura escolar y vincular la educación con los objetivos de desarrollo nacional. Solo así se podrá aprovechar plenamente el talento de los ciudadanos y enfrentar con éxito los desafíos del siglo XXI.

Los valores cívicos, patrióticos y ciudadanos —como la honestidad, el respeto a la ley, el amor por la patria y la responsabilidad individual— deben ocupar un lugar central en el sistema educativo, junto con materias que fomenten la in-



Centro de Aprendizaje en Singapur.

vestigación científica y tecnológica y los principios que sustentan una sociedad libre y próspera.

En este sentido, las aulas deben convertirse en espacios que eduquen a las nuevas generaciones bajo la premisa de que el emprendimiento, el esfuerzo individual y el trabajo personal son las verdaderas y únicas fuentes de creación de riqueza y movilidad social. El sistema educativo tiene el deber de desmontar aquellos falsos discursos de corte socialista que promueven la simple redistribución de la riqueza como solución mágica a los problemas económicos; una narrativa que históricamente solo ha generado corrupción, desincentivos, mediocridad y estancamiento. En su lugar, se debe empoderar al estudiante enseñándole que el progreso material y el éxito se construyen mediante el estudio, el mérito, la creatividad empresarial, el respeto a las leyes y a la propiedad privada.

Todo ello debe enseñarse en un marco de reflexión y pensamiento crítico que permita a los estudian-

tes formarse sus propios criterios y resistir cualquier intento de manipulación política o ideológica. La formación de niños y jóvenes no puede quedar subordinada a intereses de ningún signo político; por el contrario, debe orientarse al desarrollo de ciudadanos libres, responsables y capaces de analizar la información de manera objetiva para participar en la construcción del bien común.

Sin embargo, ninguna reforma educativa será plenamente exitosa si no está acompañada por una transformación ética del Estado. El próximo gobierno tiene la enorme responsabilidad de liderar con el ejemplo, mostrando honestidad, transparencia y compromiso con el interés nacional. Esto implica renovar el aparato estatal, apartar a los funcionarios ideologizados y estructurar una burocracia profesional, íntegra y eficiente. La ética y la integridad personal deben constituir dos de los cimientos sobre los cuales se construya una verdadera renovación educativa para las futuras generaciones de peruanos.

*Mayor General FAP en situación de retiro. Piloto de caza, defensor de la patria y veterano de guerra.



Reconocimiento al Dr. Ántero Flores-Aráoz

El jurista y estadista Dr. Ántero Flores-Aráoz Esparza recibió un merecido homenaje por parte del Parlamento Andino, en reconocimiento a su destacada trayectoria democrática.

La ceremonia se llevó a cabo el martes 16 en la sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), donde el titular de la institución, Gustavo Pacheco, le hizo entrega de la distinción.

Al evento asistieron importantes figuras políticas, entre ellas el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y los parlamentarios Gladys Echaíz y Jorge Montoya entre otros. Durante su intervención, Rospigliosi resaltó la firmeza de Flores-Aráoz en la defensa de sus ideas y del libre mercado, señalándolo como un referente de integridad: "Ha encarado todas las situaciones políticas que le ha tocado vivir con decisión y valentía. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es realmente un político honesto que ha defendido sus ideas a lo largo de toda su trayectoria".

Flores-Aráoz cuenta con una amplia hoja de servicio al país, habiéndose desempeñado como diputado, congresista, presidente del Congreso, ministro de Defensa, presidente del Consejo de Ministros y embajador del Perú ante la OEA. ¡Felicitaciones por este reconocimiento!



GOBERNAR PARA TODOS

Cinco compromisos para la reconciliación democrática en el Perú

La reconciliación no se plantea como una exhortación abstracta a la concordia, sino como una política pública de reconstrucción de legitimidad, capaz de combinar reglas imparciales, resultados verificables y reconocimiento territorial.



Dr. José Joaquín
Díaz Pérez*

CONTEXTO NACIONAL QUE ENMARCA EL PROBLEMA

2.6% / 3.5% Confianza en partidos políticos y Congreso, respectivamente	60.3% / 53.7% Identifica corrupción y delincuencia entre los principales problemas	>1,800 Acciones colectivas de protesta entre octubre de 2025 y junio de 2026
---	--	---

Nota. Indicadores seleccionados del INEI (2026) y la Defensoría del Pueblo (2026b). Las cifras describen el punto de partida del análisis, no resultados obtenidos por trabajo de campo propio.

Objetivo: analizar las condiciones institucionales que dificultan la reconciliación democrática en el Perú y formular cinco compromisos de política pública orientados a reconstruir legitimidad. Método: investigación cualitativa de alcance descriptivo-analítico y diseño documental-propositivo. El corpus integra literatura sobre apoyo político, legitimidad, deliberación y cohesión social; informes oficiales peruanos publicados hasta julio de 2026; y cuatro experiencias comparadas de institucionalización de la convivencia. El análisis se organizó en tres dimensiones: legitimidad procedimental, legitimidad de desempeño y legitimidad de reconocimiento. Resultados: la evidencia muestra que la crisis peruana combina cierre formal del ciclo electoral con desconfianza institucional extrema, persistencia de conflictos sociales, inseguridad y brechas territoriales. La reconciliación exige, por tanto, algo más que legalidad de origen: requiere imparcialidad verificable, entrega de bienes públicos, participación con incidencia y trato territorialmente justo. Como respuesta, se proponen un pacto de garantías democráticas e integridad, una estrategia de seguridad democrática territorial, pactos territoriales de cumplimiento, un sistema preventivo de diálogo y seguimiento de acuerdos, y una política de infraestructura cívica. Conclusión: gobernar para todos no significa eliminar el desacuerdo, sino crear instituciones capaces de procesarlo con reglas creíbles, resultados observables y reconocimiento recíproco.

Palabras clave: reconciliación democrática; legitimidad; confianza institucional; gobernabilidad; Perú.

1 Introducción

La pregunta por cómo gobernar para todos se vuelve especialmente urgente cuando la legalidad formal del proceso político no basta para producir confianza social. En el Perú de 2026, el Jurado Nacional de Elecciones proclamó los resultados de la elección del nuevo Congreso bicameral y, posteriormente, los de la segunda elección presidencial, con lo cual concluyó el itinerario formal del proceso electoral (Jurado Nacional de Elecciones [JNE], 2026a, 2026b). La Defensoría del Pueblo, a partir de su despliegue nacional de supervisión, informó que no encontró evidencia concluyente de fraude capaz de invalidar la voluntad ciudadana, aunque sí registró incidencias operativas, controversias y responsabilidades institucionales que debían esclarecerse (Defensoría del Pueblo, 2026a).

Ese cierre formal convivió con una conflictividad social persistente. Entre octubre de 2025 y junio de 2026 se registraron más de 1,800 acciones colectivas de protesta, mientras el número mensual de conflictos activos o latentes se mantuvo entre 190 y 204. La secuencia electoral, por tanto, no reemplazó los agravios vinculados con actividades extractivas, gestión pública, demandas

*Universidad Nacional Federico Villarreal / ORCID 0000-0003-1663-8626

rurales e indígenas o incumplimiento de acuerdos; se superpuso a ellos y, en algunos territorios, amplificó su expresión política (Defensoría del Pueblo, 2026b).

La opinión pública completa este diagnóstico. Para el semestre julio-diciembre de 2025, la confianza declarada en los partidos políticos fue de 2.6% y en el Congreso de 3.5%. Al mismo tiempo, 60.3% de la población identificó la corrupción y 53.7% la delincuencia entre los principales problemas nacionales. La ciudadanía continuó valorando derechos, libertades y elecciones limpias, pero mostró una ruptura severa con las instituciones encargadas de convertir esos valores en protección, imparcialidad y servicios (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2026).

En este artículo, reconciliación democrática designa la reconstrucción de las condiciones institucionales que permiten convivir, competir y discrepar sin convertir al adversario en enemigo ni al Estado en patrimonio de una facción. La noción se vincula con la diferencia entre legitimidad de origen -obtenida mediante el voto- y legitimidad de ejercicio -construida por decisiones justificadas, resultados verificables, controles públicos y trato equitativo-. Desde esta perspectiva, reconciliar no es pedir uniformidad ideológica: es asegurar que el conflicto se tramite mediante reglas confiables y que la acción estatal reduzca, en lugar de reproducir, agravios acumulados.

Problema de investigación

¿Qué compromisos de política pública pueden contribuir a reconstruir legitimidad democrática y reducir la polarización destructiva en un contexto de baja confianza institucional, persistencia del conflicto social y fuerte heterogeneidad territorial?

Objetivo, preguntas y proposición central

El objetivo general es analizar la relación entre confianza institucional, capacidades estatales, conflicto social y polarización, y convertir ese diagnóstico en una propuesta operativa de cinco compromisos. El trabajo responde cuatro preguntas: (a) ¿qué rasgos presenta la crisis contemporánea de legitimidad democrática en el Perú?; (b) ¿cómo interactúan imparcialidad, desempeño estatal y reconocimiento territorial?; (c) ¿qué enseñanzas ofrecen experiencias comparadas de reconciliación o reconstrucción de confianza?; y (d) ¿qué instrumentos permitirían que la reconciliación sea evaluable, y no solo retórica?

La proposición central sostiene que la reconciliación democrática depende de la articulación simultánea de tres dimensiones. La primera es procedimental:

reglas limpias, árbitros creíbles y rendición de cuentas. La segunda es de desempeño: seguridad, justicia y servicios que produzcan resultados observables. La tercera es de reconocimiento: proximidad, respeto y cierre progresivo de brechas sociales, territoriales y culturales. Cuando una de ellas falla, las otras pierden eficacia; cuando las tres convergen, aumenta la posibilidad de aceptar decisiones adversas sin abandonar el marco democrático.

El artículo se organiza en siete partes. Después de esta introducción, desarrolla el marco teórico; explica la metodología documental y el diseño de validación futura; presenta los hallazgos del análisis; compara cuatro experiencias internacionales; formula los cinco compromisos; y concluye con una hoja de ruta, limitaciones y agenda de investigación.

2 Marco teórico y revisión de literatura

Apoyo político y confianza institucional

La distinción de Easton (1965) entre apoyo difuso y apoyo específico ayuda a explicar por qué una democracia puede conservar adhesión normativa general y, al mismo tiempo, sufrir un desplome de confianza en instituciones concretas. El apoyo difuso se dirige al régimen y a sus principios; el apoyo específico evalúa autoridades, decisiones y resultados. La desconfianza en el Congreso, los partidos o el sistema de justicia no equivale automáticamente a un rechazo total de la democracia, pero sí debilita la disposición a cooperar, cumplir decisiones y reconocer a las instituciones como árbitros legítimos.

La evidencia latinoamericana confirma que la confianza institucional se relaciona con percepciones de desempeño, probidad, representación y trato. Rizzo et al. (2019) muestran que las evaluaciones de instituciones no son un reflejo puramente abstracto de valores políticos: están mediadas por experiencias, información y juicios sobre la capacidad de respuesta. Esta observación es clave para el caso peruano, donde la desconfianza atraviesa instituciones nacionales y subnacionales y se combina con temor al delito y percepciones de corrupción.

Legitimidad: imparcialidad, desempeño y proximidad

Rosanvallón (2010) desplaza la discusión más allá de la investidura electoral y propone dimensiones complementarias de legitimidad: imparcialidad, reflexividad y proximidad. Un gobierno puede ser legalmente elegido y, sin embargo, ser percibido como distante, opaco o parcial. En contextos de baja confianza, la imparcialidad debe hacerse visible mediante procedimientos, la

reflexividad mediante la capacidad de revisar decisiones y la proximidad mediante una relación estatal que reconozca diferencias territoriales y sociales.

Scharpf (1999) distingue, a su vez, entre input legitimacy y output legitimacy. La primera depende de la participación y la incorporación de preferencias; la segunda, de la capacidad de resolver problemas y producir bienes públicos. La legitimidad de entrada pierde sentido cuando la participación es simbólica, y la legitimidad de salida se erosiona cuando los servicios, la seguridad o la justicia no responden a necesidades reales. En el Perú, ambos déficits suelen reforzarse: la ciudadanía percibe que no es escuchada y, a la vez, que las promesas públicas no se cumplen.

Deliberación, conflicto y terceros institucionales

La teoría deliberativa no presupone una sociedad sin conflicto. Habermas (1998) sostiene que la legitimidad democrática se construye mediante procedimientos de formación de la voluntad en los que las decisiones pueden justificarse con razones públicas. Lo decisivo no es lograr unanimidad emocional, sino ofrecer condiciones inclusivas para argumentar, impugnar, revisar y decidir. La polarización se vuelve destructiva cuando desaparece la confianza en un tercero institucional capaz de ordenar el desacuerdo.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2023) advierte que América Latina y el Caribe

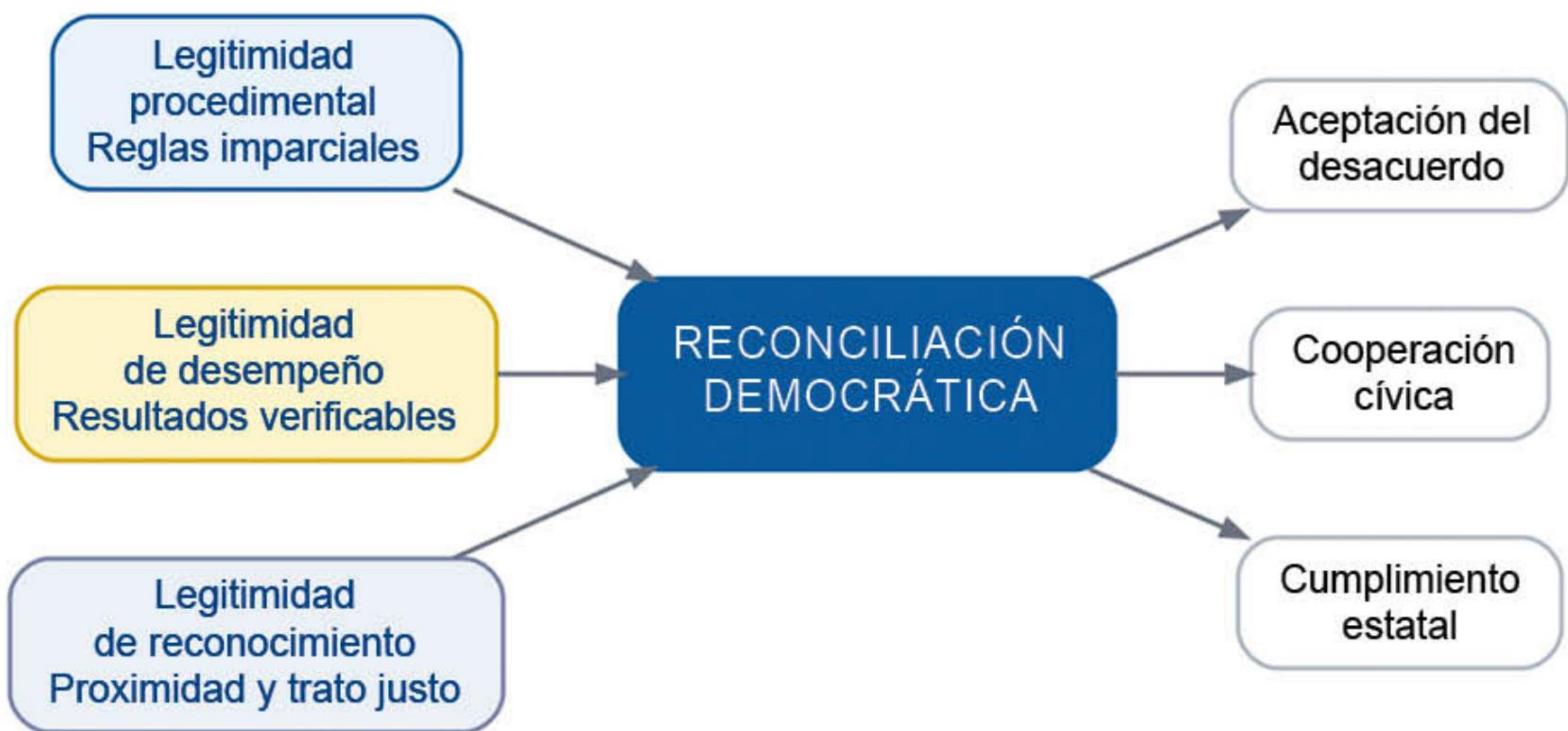
se encuentran entre las regiones más polarizadas y que las instituciones pierden eficacia cuando dejan de ser vistas como neutrales. La reconstrucción de confianza exige consistencia, predictibilidad, procesos justos y resultados positivos que permitan a las personas actualizar sus expectativas sobre el comportamiento estatal (PNUD, 2024).

Reconciliación, justicia y reconocimiento

En el Perú, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR, 2003) constituye el referente normativo más importante. Su informe concibe la reconciliación como un proceso de restablecimiento y refundación de vínculos fundamentales, inseparable de la justicia judicial, reparadora, política y social. Esta formulación impide reducir la reconciliación a olvido o perdón obligatorio: la vincula con reformas institucionales, ciudadanía plena y cierre de brechas históricas.

La literatura regional sobre cohesión social coincide en que desigualdad, desconfianza y distancia respecto de las autoridades debilitan el sentido de pertenencia común. La cohesión no supone homogeneidad; requiere mecanismos que permitan reconocer diferencias, distribuir oportunidades y procesar conflictos sin violencia (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2021). La Defensoría del Pueblo (2017) agrega que el diálogo solo produce valor público cuando existe preparación, facilitación, información, voluntad de cumplimiento y seguimiento posterior.

Figura 1 Modelo analítico de la reconciliación democrática



Nota. Elaboración propia a partir de Easton (1965), Scharpf (1999), Rosanvallon (2010), Habermas (1998) y la CVR (2003).

3 Metodología

Enfoque y alcance

La investigación adopta un enfoque cualitativo, con alcance descriptivo-analítico y diseño documental-propositivo. Su propósito no es estimar efectos causales con datos primarios, sino reconstruir un problema público, identificar mecanismos institucionales plausibles y formular una propuesta susceptible de validación posterior. La unidad de análisis es la legitimidad democrática entendida como relación entre procedimientos, desempeño estatal, reconocimiento y disposición a aceptar el desacuerdo político.

El corpus se integró mediante muestreo intencional de cuatro tipos de fuentes: (a) literatura teórica sobre apoyo político, legitimidad, deliberación, confianza y cohesión social; (b) informes estadísticos y defensoriales sobre gobernabilidad, elecciones, protesta, conflicto y participación; (c) documentos de política pública peruana sobre modernización y cumplimiento; y (d) fuentes oficiales de cuatro experiencias comparadas. Se priorizaron documentos con autoría institucional identificable, fecha, trazabilidad y relación directa con las categorías analíticas.

Procedimiento analítico

La revisión se desarrolló en cuatro pasos. Primero, se extrajeron afirmaciones, cifras, conceptos y recomendaciones relevantes. Segundo, se codificó el material en cinco categorías: imparcialidad, capacidad de respuesta, reconocimiento territorial, gestión del conflicto y calidad de la participación. Tercero, se contrastaron convergencias y tensiones entre literatura y evidencia oficial. Cuarto, se aplicó comparación estructurada y focalizada a los casos internacionales, preguntando qué dispositivo se creó, qué problema buscó resolver, cómo operó y qué lección podía transferirse al Perú. El análisis comparado se usa con finalidad heurística, no para asumir equivalencia entre contextos.

La validez se fortaleció mediante triangulación de fuentes institucionales y académicas, explicitación de criterios de selección y separación entre evidencia observada, inferencias y propuestas. El artículo evita presentar como resultados empíricos propios las cifras producidas por otras instituciones y distingue con claridad el diagnóstico documental del diseño de investigación futura.

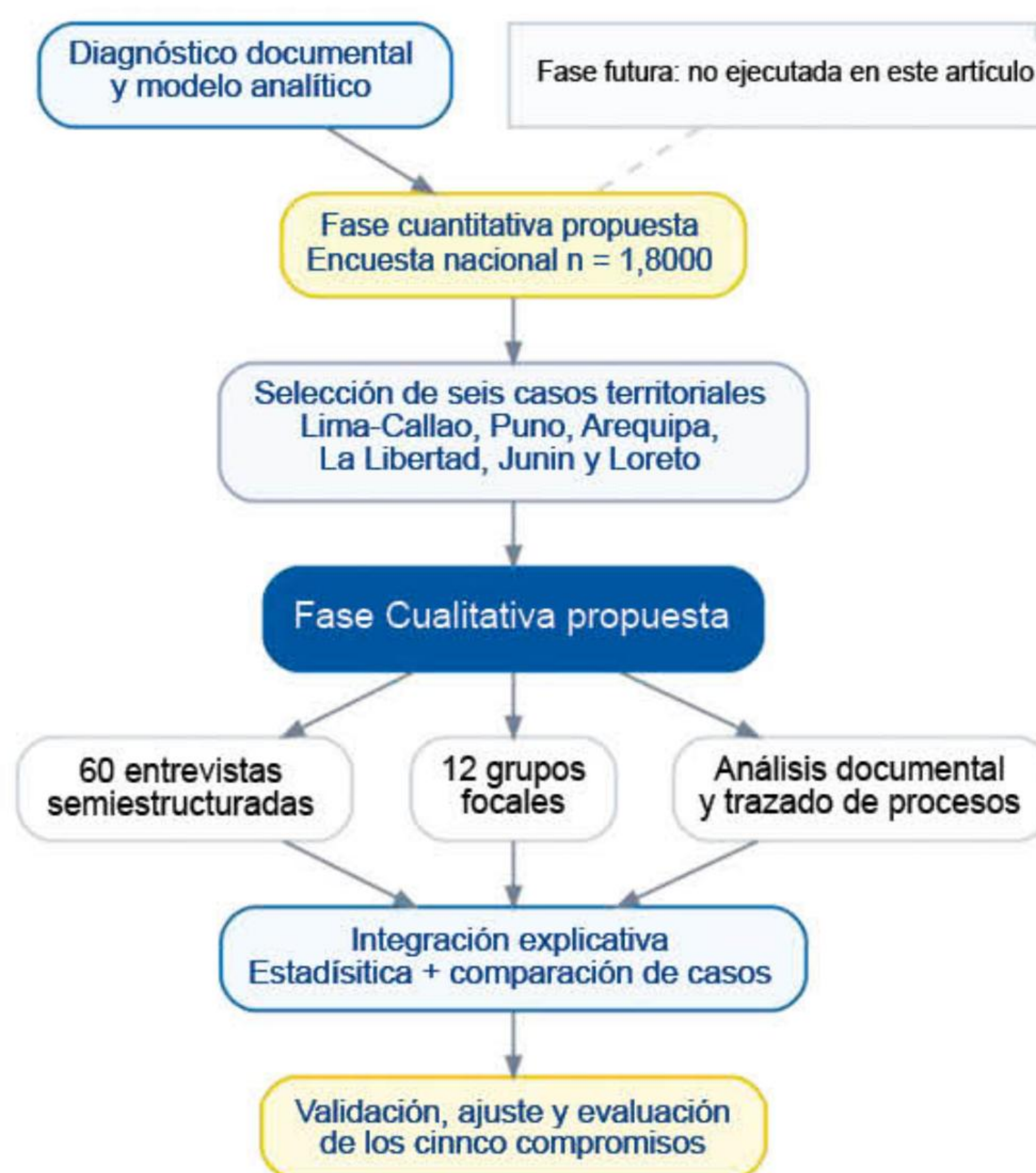
Diseño de validación empírica futura

Como segunda etapa, se propone un diseño secuencial explicativo de métodos mixtos. La fase cuantitativa comprendería una encuesta nacional a 1,800 personas

de 18 años o más, estratificada por macroregión, sexo, edad, ámbito urbano-rural y nivel socioeconómico, con sobrerrepresentación en Lima Metropolitana-Callao, Puno, Arequipa, La Libertad, Junín y Loreto. La variable dependiente sería un índice de reconciliación democrática percibida, compuesto por confianza institucional, aceptación de decisiones adversas cuando provienen de reglas justas, percepción de trato equitativo y disposición a convivir políticamente con sectores distintos.

Las variables explicativas incluirían percepción de corrupción, miedo al delito, satisfacción con servicios, exposición a conflicto, experiencia participativa y evaluación de imparcialidad. Una segunda fase seleccionaría seis estudios de caso y combinaría entrevistas semiestructuradas, grupos focales y trazado de procesos. La integración buscaría explicar por qué patrones similares de desconfianza producen respuestas distintas según territorio, experiencia organizativa y capacidad estatal. Este diseño sigue la lógica de métodos mixtos secuenciales de Creswell y Plano Clark (2018), el estudio de caso de Yin (2018) y el trazado de procesos de Beach y Pedersen (2019).

Figura 2 Secuencia propuesta para la validación empírica



Nota. La figura describe una fase futura de contrastación. La presente versión informa hallazgos del análisis documental y una propuesta de política pública.

4 Hallazgos del análisis documental

4.1. La legalidad electoral es necesaria, pero no suficiente

El primer hallazgo es la coexistencia de dos planos de legitimidad. En el plano jurídico, el sistema electoral culminó la proclamación de resultados y agotó las etapas previstas. En el plano social, permanecieron narrativas de ilegitimidad, protestas y agravios no resueltos. La supervisión defensorial permite sostener que las incidencias detectadas no equivalen automáticamente a fraude, pero también muestra que la confianza no se produce por decreto: necesita explicaciones públicas, corrección de errores y responsabilidad institucional (Defensoría del Pueblo, 2026a; JNE, 2026a, 2026b).

Esta diferencia entre cierre formal y aceptación social ayuda a evitar dos reduccionismos. El primero consiste en suponer que la proclamación jurídica disuelve por sí sola la desconfianza. El segundo, en tratar toda inconformidad como prueba de invalidez electoral. Una política de reconciliación debe sostener simultáneamente la legalidad del procedimiento y el deber de responder con transparencia a las dudas verificables.

4.2. La crisis de confianza es sistémica y está vinculada con desempeño

Los niveles de confianza reportados por el INEI (2026) no describen un problema aislado de una institución. Partidos, Congreso, sistema de justicia, policía y gobiernos subnacionales enfrentan evaluaciones negativas. La extensión del fenómeno sugiere una crisis de intermediación y capacidad estatal: la ciudadanía desconfía de quienes representan, de quienes deciden y de quienes ejecutan. La corrupción y la delincuencia operan como experiencias sintetizadoras de esa falla, porque expresan simultáneamente parcialidad, impunidad e incapacidad de protección.

Desde el marco teórico, este patrón combina deterioro del apoyo específico (Easton, 1965), déficit de imparcialidad y proximidad (Rosanvallon, 2010) y bajo desempeño institucional (Scharpf, 1999). Por ello, una campaña comunicacional sin cambios observables tendría un efecto limitado. La confianza puede reconstruirse cuando las instituciones cumplen promesas acotadas, explican decisiones, corrigen errores y mantienen criterios estables (PNUD, 2024).

4.3. La polarización peruana es territorial y experiencial

La conflictividad registrada entre 2025 y 2026 no puede reducirse a identidades partidarias. Las demandas vinculadas con minería, ambiente, transporte, servicios,

agricultura, gestión regional o derechos de comunidades se conectan con la competencia electoral, pero tienen historias y mecanismos propios. En territorios donde el Estado llega de manera intermitente, una promesa incumplida o un acuerdo sin seguimiento puede convertirse en evidencia de desprecio o trato desigual (Defensoría del Pueblo, 2026b).

La polarización adquiere así una dimensión experiencial: no solo separa posiciones ideológicas, sino memorias de trato, expectativas de reconocimiento y evaluaciones de abandono. Esta observación converge con la CVR (2003), que vinculó reconciliación con justicia y ciudadanía, y con la CEPAL (2021), que identifica desigualdad y distancia institucional como obstáculos para la cohesión social.

4.4. La participación produce legitimidad solo cuando tiene incidencia

El Perú cuenta con audiencias públicas, mesas de diálogo, consultas y mecanismos de rendición de cuentas. Sin embargo, la existencia formal de un espacio no garantiza participación significativa. La supervisión nacional de audiencias públicas encontró barreras de acceso, difusión, calidad de información y seguimiento que reducen la capacidad ciudadana de controlar a las autoridades (Defensoría del Pueblo, 2025). Un diálogo sin respuesta o una audiencia sin consecuencias puede profundizar el cinismo.

La participación que contribuye a la reconciliación debe reunir cuatro condiciones: información comprensible, pluralidad efectiva, trazabilidad de lo acordado e incidencia verificable. Esta definición desplaza el énfasis desde el número de reuniones hacia la calidad del proceso y el cumplimiento. También conecta input y output: la ciudadanía debe ser escuchada, pero el espacio debe producir decisiones, explicaciones o correcciones concretas.

4.5. Seguridad y legalidad forman una sola agenda

La inseguridad ocupa un lugar central en las preocupaciones ciudadanas. Ello crea incentivos para respuestas de severidad inmediata que pueden obtener respaldo transitorio. Sin embargo, una estrategia arbitraria, ineficaz o abusiva deteriora la confianza y amplía la percepción de que el Estado actúa selectivamente. La seguridad contribuye a la reconciliación cuando protege a víctimas, focaliza capacidades, usa evidencia, controla la corrupción y rinde cuentas por el uso de la fuerza.

Este hallazgo impide separar gobernabilidad democrática y seguridad ciudadana. Un Estado que no protege deja espacio a economías ilícitas, extorsión y justicia

informal; un Estado que protege sin legalidad erosiona derechos y legitimidad. La respuesta debe integrar inteligencia, prevención, persecución penal, protección a denunciantes y evaluación territorial.

Síntesis de los hallazgos

La crisis peruana no es únicamente electoral ni únicamente social. Es una crisis de relación entre ciudadanía e instituciones. Su núcleo combina percepción de parcialidad, resultados insuficientes y falta de reconocimiento territorial. Por ello, la reconciliación debe diseñarse como arquitectura institucional y como política de cumplimiento.

5 Experiencias comparadas y lecciones transferibles

La comparación no busca importar modelos de manera mecánica. Colombia, Chile, Sudáfrica e Irlanda del Norte difieren en historia, intensidad de violencia, arquitectura estatal y momento político. Su utilidad radica en mostrar que la reconciliación requiere dispositivos, reglas, recursos y seguimiento; no se sostiene únicamente en discursos de unidad.



Tabla 1: Dispositivos comparados de reconciliación y convivencia

País / experiencia	Dispositivo y propósito	Mecanismo operativo	Lección para el Perú
Colombia	Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia; articula política de paz, convivencia y no estigmatización.	Órgano asesor y consultivo con participación estatal y de la sociedad civil; articulación nacional y territorial.	Se necesita institucionalidad permanente y plural, no solo acuerdos entre élites.
Chile	Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento; construye diagnóstico y propuestas frente al conflicto de tierras.	Comisión plural, diálogo con actores, sistematización de propuestas, informe final y recomendaciones de reparación.	Los conflictos históricos requieren diagnóstico compartido, legitimidad transversal y continuidad política.
Sudáfrica	Truth and Reconciliation Commission; documenta violaciones, reconoce a víctimas y formula reformas.	Testimonios públicos, investigación, informe, reparaciones y recomendaciones de reforma institucional.	Sin verdad, reconocimiento y reparación, la convivencia queda incompleta y vulnerable.
Irlanda del Norte	Belfast/Good Friday Agreement; administra un conflicto político persistente mediante reglas de consentimiento.	Poder compartido, instituciones cooperativas, garantías de derechos y mecanismos intergubernamentales.	Reconciliar también significa diseñar reglas estables para convivir con desacuerdos duraderos.

Nota. Elaboración propia con base en República de Colombia (2017), Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento (2025), Truth and Reconciliation Commission of South Africa (1998) y Northern Ireland Office (1998).

La lección transversal es que la reconciliación necesita permanencia, pluralidad y capacidad de implementación. Los casos también advierten que el diseño institucional no sustituye la voluntad política, que los acuerdos sin recursos pierden legitimidad y que la inclusión de víctimas, territorios y oposiciones debe ocurrir desde el inicio, no como corrección tardía.

6 Propuesta: cinco compromisos para gobernar para todos

Los hallazgos convergen en una idea: la reconciliación democrática es menos una exhortación moral que una arquitectura de reglas, capacidades y señales verificables. Los compromisos siguientes forman un paquete integrado. Ninguno, por separado, puede reconstruir legitimidad; juntos buscan producir imparcialidad, desempeño y reconocimiento.

6.1. Pacto de Garantías Democráticas e Integridad Pública

El primer compromiso consiste en acordar reglas mínimas que protejan la competencia democrática y hagan visible la imparcialidad del Estado. Debe incluir reconocimiento expreso del adversario como actor legítimo, rechazo a la violencia y a la estigmatización, criterios públicos de idoneidad para altos cargos, trazabilidad de decisiones sensibles, transparencia reforzada de reuniones y conflictos de interés, y un tablero de cumplimiento accesible. La integridad no debe presentarse como una agenda técnica separada: es el lenguaje institucional de la igualdad ante la ley. El pacto debe ser verificable y limitarse a compromisos medibles. Una secretaría técnica autónoma o colegiada puede publicar avances trimestrales, alertas de incumplimiento y respuestas de las entidades involucradas. La finalidad no es impedir el conflicto político, sino reducir la sospecha de que las reglas se modifican según la identidad del beneficiario.

6.2. Estrategia de Seguridad Democrática Territorial

El segundo compromiso integra seguridad y legalidad. Propone priorizar territorios y mercados delictivos con base en evidencia, fortalecer inteligencia contra extorsión y economías ilícitas, proteger a denunciantes y víctimas, mejorar la interoperabilidad entre policía, fiscalía y gobiernos locales, y establecer controles públicos sobre tiempos de respuesta, resultados y quejas por abuso. La unidad territorial de intervención debe ser más precisa que la región administrativa: corredores, distritos o cadenas económicas pueden concentrar riesgos distintos.

La rendición de cuentas es parte de la eficacia, no un obstáculo. Publicar metas, criterios de focalización y resultados permite corregir despliegues ineficientes y evitar prácticas discriminatorias. El éxito debe medirse por reducción de victimización, desarticulación de redes, atención a víctimas y confianza, no solo por número de operativos.

6.3. Pactos Territoriales de Cumplimiento

El tercer compromiso traduce la reconciliación en servicios y obras concretas. En provincias o corredores críticos, el Gobierno nacional, los gobiernos subnacionales y la ciudadanía deberían acordar un portafolio acotado de prioridades en salud, educación, agua, conectividad, seguridad o justicia, con responsables, presupuesto, hitos y fechas. Cada pacto debe contar con un tablero público y verificación ciudadana independiente.

La lógica es pasar de listas extensas de demandas a compromisos priorizados que puedan cumplirse y evaluarse. La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030 identifica como problema central que bienes, servicios y regulaciones no respondan a las necesidades de las personas; los pactos territoriales convierten ese diagnóstico en una unidad práctica de entrega y rendición de cuentas (Presidencia del Consejo de Ministros [PCM], 2022).

6.4. Sistema Preventivo de Diálogo y Seguimiento de Acuerdos

El cuarto compromiso crea continuidad entre prevención, diálogo y cumplimiento. Requiere alertas tempranas, gestores de caso con autoridad, protocolos de facilitación, registro único de acuerdos, responsables nominados, plazos y semáforos públicos. La Defensoría del Pueblo (2017) ha mostrado que el valor del diálogo depende de su calidad; la experiencia reciente demuestra que la ausencia de seguimiento transforma la mesa en un archivo de promesas.

El sistema debe distinguir entre espacios informativos, consultivos y negociadores, para evitar expectativas falsas. También necesita reglas de representación, acceso a información técnica y mecanismos de revisión cuando cambien las condiciones. El indicador central no es el número de mesas instaladas, sino la proporción de acuerdos cumplidos, parcialmente cumplidos o reformulados con justificación pública.

6.5. Política de Infraestructura Cívica

El quinto compromiso fortalece las capacidades sociales para convivir con el desacuerdo. Incluye educación cívica vinculada con problemas reales, alfabetización mediática y digital, memoria democrática, formación de facilitadores, foros deliberativos locales y apoyo a redes comunitarias que funcionen como puentes entre grupos. La infraestructura cívica no es propaganda gubernamental: debe ser plural, descentralizada y evaluada por su capacidad de aumentar conocimiento, escucha y cooperación.

La desinformación prospera cuando encuentra instituciones opacas y comunidades aisladas. Por ello, la respuesta no puede limitarse a desmentidos; debe combinar acceso oportuno a información, vocerías confiables, competencias para verificar contenidos y espacios presenciales donde las personas puedan formular preguntas y contrastar experiencias.



Tabla 2: Matriz operativa de los cinco compromisos

Compromiso	Acciones prioritarias	Indicadores iniciales de verificación
1. Garantías democráticas e integridad	Código público de garantías; reglas de idoneidad; transparencia de decisiones y reuniones; tablero trimestral; mecanismo de respuesta a alertas.	Porcentaje de compromisos con responsable y fecha; altas designaciones con evaluación pública; tiempos de respuesta a alertas; publicación oportuna de agendas y decisiones.
2. Seguridad democrática territorial	Focalización por corredores; inteligencia contra extorsión; protección de víctimas y denunciantes; interoperabilidad; control del uso de la fuerza.	Victimización y extorsión por territorio; tiempo de atención; casos con protección efectiva; redes desarticuladas; quejas y sanciones por abuso; confianza en la respuesta.
3. Pactos territoriales de cumplimiento	Portafolio acotado de servicios; presupuesto e hitos; responsables multinivel; tablero público; auditoría social y visitas de verificación.	Hitos cumplidos en plazo; ejecución presupuestal vinculada a productos; cobertura y calidad del servicio; satisfacción usuaria; brechas territoriales reducidas.
4. Diálogo preventivo y seguimiento	Alertas tempranas; gestores de caso; protocolo de facilitación; registro único de acuerdos; semáforo público; mecanismos de revisión.	Proporción de acuerdos cumplidos; días entre alerta e intervención; conflictos que desescalan; representación plural; acuerdos reformulados con justificación.
5. Infraestructura cívica	Educación cívica; memoria democrática; alfabetización mediática; foros locales; formación de facilitadores; redes de cooperación.	Participación diversa; cambios en conocimiento y tolerancia; capacidad de verificación de información; continuidad de foros; iniciativas colaborativas generadas.

Nota. Los indicadores son una propuesta inicial. Su línea de base, metas, fuente y periodicidad deben definirse durante el diseño operativo y validarse con actores territoriales

7 Hoja de ruta de implementación y evaluación

La propuesta requiere conducción política, coordinación multinivel y una unidad de seguimiento con capacidad de publicar información comparable. Para evitar que la agenda se diluya, la implementación puede organizarse en tres horizontes

Horizonte	Decisiones centrales	Producto verificable
Primeros 100 días	Aprobar gobernanza del programa; publicar línea de base; seleccionar territorios piloto; adoptar código de garantías; abrir tablero público.	Marco de compromisos, responsables, presupuesto, territorios y primer reporte público.
Meses 4-12	Ejecutar pilotos de seguridad, pactos territoriales y seguimiento; formar facilitadores; realizar evaluación de proceso y ajustes.	Reportes trimestrales, registro de acuerdos, evaluación de participación y avance de servicios.
Meses 13-24	Escalar componentes que muestran resultados; integrar presupuesto por desempeño; evaluación externa y deliberación pública sobre continuidad.	Informe de resultados y efectos, decisiones de escalamiento y plan de sostenibilidad institucional.

Nota. La evaluación debe distinguir productos, resultados y efectos. Cumplir actividades no equivale automáticamente a reconstruir confianza; se requieren mediciones periódicas de percepción, experiencia de trato y desempeño territorial.



Conclusiones

1. La crisis es multidimensional. El Perú enfrenta una combinación de desconfianza institucional, conflictividad persistente, inseguridad y brechas territoriales. Reducir el problema a una disputa electoral o a un déficit de comunicación impide comprender su profundidad.
2. La legitimidad de origen necesita legitimidad de ejercicio. La proclamación electoral es indispensable, pero la aceptación sostenible se construye mediante imparcialidad, resultados, corrección de errores y trato equitativo.
3. La reconciliación es una política pública. No consiste en borrar diferencias, sino en crear reglas y capacidades para procesarlas sin violencia, con participación incidente y cumplimiento verificable.
4. Los cinco compromisos forman un sistema. Garantías democráticas, seguridad legal, servicios territoriales, diálogo con seguimiento e infraestructura cívica se refuerzan mutuamente. La ausencia de uno limita a los demás.
5. La evaluación es parte del pacto. La confianza no debe inferirse a partir de anuncios. Debe observarse mediante indicadores públicos, mediciones territoriales y evaluación externa capaz de corregir la política.

Recomendaciones de presentación e implementación

1. Presentar la propuesta como una agenda de Estado, no como una consigna de gobierno. La conducción política debe convocar a oficialismo, oposición, gobiernos subnacionales, sociedad civil, academia y sector privado bajo reglas públicas.
2. Empezar con compromisos acotados y demostrables. La credibilidad se recupera mediante entregas verificables. Es preferible cumplir un portafolio priorizado que anunciar una lista inabarcable.
3. Diferenciar diálogo, consulta, negociación y rendición de cuentas. Cada espacio debe tener mandato, participantes, información, plazos y efectos definidos para evitar expectativas falsas.
4. Proteger la independencia de la evaluación. Los indicadores, informes y alertas deben poder mostrar incumplimientos sin represalias y permitir respuesta documentada de las entidades.
5. Comunicar con evidencia y proximidad. Los avances deben explicarse territorialmente, con datos comprensibles, testimonios verificables y reconocimiento de errores o retrasos.



Limitaciones y agenda futura

La principal limitación es que esta versión no incluye trabajo de campo propio. Los hallazgos se basan en revisión documental y datos producidos por instituciones públicas; por ello, no permiten estimar causalidad individual ni representar todas las variaciones subnacionales. La coyuntura peruana también es volátil: percepciones, conflictos y decisiones institucionales pueden cambiar con rapidez. Además, las experiencias comparadas operan en contextos históricos distintos y sus lecciones solo son transferibles después de adaptación y deliberación local.

La agenda futura debe desarrollar mediciones longitudinales de legitimidad y polarización a nivel territorial; evaluar el cumplimiento de acuerdos de diálogo; analizar la relación entre inseguridad, demandas punitivas y confianza democrática; y someter a prueba intervenciones de educación cívica, alfabetización mediática y foros deliberativos. El diseño mixto propuesto ofrece una ruta para contrastar la proposición central, identificar mecanismos y ajustar los cinco compromisos con evidencia primaria.

El reto final no es únicamente explicar por qué cuesta gobernar para todos. Es construir instituciones que permitan que esa aspiración deje de ser retórica y se traduzca en experiencias repetidas de imparcialidad, protección, cumplimiento y reconocimiento.

Referencias

- Referencias normalizadas según APA 7. Los enlaces se presentan como URL activas y las obras se ordenan alfabéticamente por autor corporativo o personal.
- Beach, D., & Pedersen, R. B. (2019). *Process-tracing methods: Foundations and guidelines* (2nd ed.). University of Michigan Press.
- Comisión de la Verdad y Reconciliación. (2003). Informe final (Tomo IX, cap. 1, Fundamentos de la reconciliación).
<https://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20IX/1.%20RECONCILIACION.pdf>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2021). Panorama de la cohesión social en América Latina y el Caribe.
<https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/5f5da96a-ce9c-44a8-aebb-270914008dc4/content>
- Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. (2025). Informe final.
<https://www.comisionpazyentendimiento.gob.cl/wp-content/uploads/2025/05/INFORME-FINAL.pdf>
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE.
- Defensoría del Pueblo. (2017). El valor del diálogo (Documento Defensorial n.º 29).
<https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/02/El-valor-del-dialogo.pdf>
- Defensoría del Pueblo. (2025). Supervisión nacional a las audiencias públicas de rendición de cuentas (Informe Defensorial n.º 250).
<https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2025/09/Informe-Defensorial-n-250-Supervisi%C3%B3n-Nacional-a-las-Audiencias-P%C3%BAblicas-de-Rendici%C3%B3n-de-Cuentas-APRC.pdf>
- Defensoría del Pueblo. (2026a). Informe de supervisión de las Elecciones Generales 2026 (Informe Defensorial n.º 274).
<https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2026/05/Informe-Defensorial-n-274-Supervisi%C3%B3n-de-Elecciones-Generales-2026.pdf>
- Defensoría del Pueblo. (2026b). Informe sobre conflictos en materia electoral y su prospectiva en la sucesión gubernamental (Informe Defensorial n.º 284).
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2026/06/id_conflictos_electoral-1.pdf
- Easton, D. (1965). *A systems analysis of political life*. Wiley.
- Habermas, J. (1998). Facticidad y validez: Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso. Trotta.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2026, febrero). Perú: Percepción ciudadana sobre gobernabilidad, democracia y confianza en las instituciones. Julio-diciembre 2025 (Boletín n.º 1). https://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_gobernabilidad_julio_diciembre2025.pdf
- Jurado Nacional de Elecciones. (2026a, 3 de julio). JNE proclama a Keiko Fujimori Higuchi como presidenta electa de la República.
<https://www.gob.pe/institucion/jne/noticias/1414770-jne-proclama-a-keiko-fujimori-higuchi-como-presidenta-electa-de-la-republica>
- Jurado Nacional de Elecciones. (2026b, 19 de junio). JNE proclama resultados de la elección de senadores, diputados y parlamentarios andinos.
<https://www.gob.pe/institucion/jne/noticias/1409609-jne-proclama-resultados-de-la-eleccion-de-senadores-diputados-y-parlamentarios-andinos>
- Northern Ireland Office. (1998, April 10). The Belfast Agreement. GOV.UK. <https://www.gov.uk/government/publications/the-belfast-agreement>
- Presidencia del Consejo de Ministros. (2022). Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030 (Decreto Supremo n.º 103-2022-PCM).
<https://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2022/Agosto/21/DS-103-2022-PCM.pdf>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2023, 28 de febrero). “Conmigo o en mi contra”: La intensificación de la polarización política en América Latina y el Caribe. <https://www.undp.org/es/latin-america/blog/conmigo-o-en-mi-contra-la-intensificacion-de-la-polarizacion-politica-en-america-latina-y-el-caribe>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2024, 23 de enero). ¿En quién confiamos? Menos en las instituciones y más en las comunidades en ALC. <https://www.undp.org/es/latin-america/blog/en-quien-confiamos-menos-en-las-instituciones-y-mas-en-las-comunidades-en-alc>
- República de Colombia. (2017, 26 de mayo). Decreto Ley 885 de 2017, por medio del cual se modifica la Ley 434 de 1998 sobre la política de Estado de paz, reconciliación, convivencia y no estigmatización y se crea el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia.
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=81854>
- Riffo, F., Pérez, D., Salazar, C., & Acuña, A. (2019). ¿Qué influye en la confianza en las instituciones? Evidencia empírica para Chile. *Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión*, 27(2), 83-104. <https://doi.org/10.18359/rfce.3517>
- Rosanvallon, P. (2010). *La legitimidad democrática: Imparcialidad, reflexividad y proximidad*. Paidós.
- Scharpf, F. W. (1999). *Governing in Europe: Effective and democratic?* Oxford University Press.
- Truth and Reconciliation Commission of South Africa. (1998). Truth and Reconciliation Commission of South Africa report (Vol. 1). Department of Justice and Constitutional Development. <https://www.justice.gov.za/trc/report/finalreport/volume%201.pdf>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE.

Sin una Policía fuerte, no hay Democracia ni Desarrollo



Por: Teniente General
PNP (r) Julio Coa
Mariño*

Ningún país puede aspirar al desarrollo cuando la delincuencia desafía la autoridad del Estado, cuando la violencia pretende imponerse sobre la ley y cuando las instituciones encargadas de garantizar la seguridad actúan bajo permanentes presiones y cuestionamientos. Esa es la realidad que enfrenta hoy el Perú.

En una coyuntura marcada por el avance del crimen organizado, la incertidumbre política y las amenazas contra el orden público, la Policía Nacional del Perú PNP asume responsabilidades de-

cisivas para preservar la paz social, defender la democracia y proteger a millones de peruanos que exigen vivir y trabajar en seguridad.

Precisamente, el principal desafío que enfrenta hoy la PNP es la lucha

contra la violencia criminal que se expande peligrosamente por todo el territorio nacional. La extorsión, el sicariato, el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de personas y otras expresiones del crimen organizado ya no constituyen amenazas aisladas, sino estructuras cada vez más articuladas que desafían la autoridad del Estado, siembran temor en la población y afectan gravemente la actividad económica.

La seguridad se ha convertido en un requisito indispensable para el desarrollo nacional. Ningún país puede atraer inversiones, generar empleo ni sostener su crecimiento cuando miles de emprendedores, comerciantes, transportistas y empresarios viven bajo la amenaza permanente de la violencia y la extorsión. Defender la seguridad ciudadana no es únicamente combatir el delito; es proteger las bases mismas sobre las cuales se construyen el progreso, la estabilidad y el bienestar de la Nación.

Esta situación resulta especialmente preocupante en momentos en que el Perú mantiene fortalezas económicas que lo distinguen en la región. Sin embargo, ninguna estabilidad macroeconómica está garantizada si la criminalidad continúa avanzando sobre espacios que corresponden al Estado. Allí radica la importancia de fortalecer a la Policía Nacional como primera línea de defensa de la legalidad y la convivencia pacífica.

La preservación del orden interno constituye otra de las responsabilidades fundamentales de nuestra institución. En un contexto marcado por cuestionamientos al reciente proceso electoral y convocatorias a movilizaciones que podrían afectar el libre tránsito y las actividades económicas, corresponde garantizar tanto el derecho a la protesta pacífica como los derechos de millones de ciudadanos a trabajar, desplazarse y vivir en tranquilidad. La experiencia demuestra que cuando las manifestaciones son infiltradas por grupos radicales o violentistas, los principales perjudicados son los sectores más vulnerables de la población.

La lucha contra la corrupción dentro de la Policía Nacional constituye un desafío permanente que debe enfrentarse con determinación y sin tolerancia alguna frente a quienes traicionan el uniforme para obtener beneficios indebidos o favorecer actividades ilícitas. Sin embargo, también corresponde reconocer que la inmensa mayoría de policías cumple su deber con honestidad, sacrificio y vocación de servicio, muchas veces arriesgando su vida en defensa de la ciudadanía. Combatir la corrupción es una obligación institucional, pero hacerlo no debe conducir a generalizaciones que afecten la moral de los efectivos honestos ni debiliten la confianza de la población en una institución fundamental para la seguridad del país.

Otro desafío relevante es la controversia sobre las competencias en la investigación criminal. La Constitución establece que la Policía Nacional previene, investiga y combate la delincuencia, mientras que el Ministerio Público conduce la investigación del delito desde su inicio. Con el propósito de precisar estas funciones, el Congreso aprobó la Ley N.º 32130, que ratifica la

La lucha contra la corrupción dentro de la Policía Nacional constituye un desafío permanente que debe enfrentarse con determinación y sin tolerancia alguna frente a quienes traicionan el uniforme para obtener beneficios indebidos o favorecer actividades ilícitas.

responsabilidad de la Policía en la investigación preliminar. Resulta preocupante que persistan discrepancias sobre un marco legal ya definido, pues la falta de coordinación entre instituciones debilita la capacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado. Cuando las entidades encargadas de combatir la delincuencia actúan sin unidad de criterio, quienes terminan beneficiándose son los delincuentes y las organizaciones criminales.

Aunque la Ley N.º 32130 fue cuestionada por el Ministerio Público ante el Tribunal Constitucional, este confirmó su constitucionalidad y precisó que la conducción fiscal corresponde al ámbito jurídico de la investigación, mientras que la labor técnica, operativa y especializada para el esclarecimiento de los delitos recae en la Policía Nacional. El pronunciamiento del Tribunal Constitucional debería poner fin a una controversia que solo beneficia a la delincuencia. El país necesita fiscales y policías trabajando de manera coordinada, no enfrentados en disputas que favorecen la impunidad. Del mismo modo, resulta indispensable brindar seguridad jurídica a quienes arriesgan su vida en defensa de la ley, porque ningún Estado puede exigir resultados a sus policías si no les garantiza el respaldo necesario para cumplir su misión.

Resulta preocupante la creciente judicialización de decisiones adoptadas por autoridades policiales en escenarios de alta conflictividad,

pues puede generar incertidumbre y desalentar a quienes tienen la responsabilidad constitucional de preservar el orden público y proteger a la población peruana. La rendición de cuentas es indispensable en toda democracia, pero también lo es el respeto a la actuación legítima de quienes arriesgan su vida en defensa de la ley. La Policía Nacional constituye uno de los pilares fundamentales del Estado y una garantía para la estabilidad democrática, la paz social y la seguridad de los peruanos. Por ello, resulta urgente fortalecer sus capacidades operativas, tecnológicas y de inteligencia, así como brindar el respaldo jurídico e institucional necesario para que cumpla su misión con eficacia, autoridad y seguridad jurídica.

Frente al avance de la criminalidad y a las amenazas al orden democrático, el Estado no puede permitirse divisiones que debiliten su capacidad de respuesta. El Perú necesita una Policía fuerte, profesional, respetada y respaldada por sus instituciones. Debilitar su autoridad, cuestionar permanentemente su accionar o limitar sus capacidades solo favorece a la delincuencia y al crimen organizado. La verdadera disyuntiva es simple. O fortalecemos a la Policía y al Estado de derecho, o dejamos más espacio al crimen organizado. Ha llegado el momento de asumir esa responsabilidad con decisión, porque lo que está en juego no es el futuro de una institución, sino la seguridad, la democracia y el futuro del Perú.

* Presidente de la Asociación de Oficiales Generales del Perú



Christian Pardo Reyes

Candidato a la Alcaldía – Partido Visión Perú

San Luis Seguro, Moderno y Ordenado

Sostenibilidad: Instalación de contenedores de basura soterrados, ampliación de ciclovías y concurso distrital de parques y jardines.

Deporte todo el año y Cultura

Acceso libre y moderno: Recuperación total de la “Falsa Videna” (Parque Zonal Túpac Amaru) y modernización del Complejo de la Av. Circunvalación (piscina todo el año).

Estadio accesible: Reducción drástica del costo de alquiler de canchas para los residentes.

Identidad local: Creación del Museo de Sitio y puesta en valor de las Huacas Túpac Amaru.

Gestión Social y Transparencia

Atención prioritaria: Programas de excelencia para el Adulto Mayor, fortalecimiento de OMAPEP, Vaso de Leche y Comedores Populares. Creación de la Guardería Municipal.

Bienestar animal: Programa de atención veterinaria y refugio para mascotas abandonadas.

Cuentas claras: Política de austeridad, auditoría a las multas de grúas y participación vecinal en la fiscalización del presupuesto.

¡Con tu apoyo, transformaremos San Luis en el distrito referente de Lima Moderna!

Su misión es hacer de San Luis un modelo de gestión innovador, eficiente y participativo en Lima Metropolitana, elevando la calidad de vida de todos los vecinos bajo tres principios: Honestidad, Compromiso y Excelencia.

Seguridad Ciudadana y Orden

Liderazgo contra el crimen: Presidencia proactiva del CODISEC para desarticular bandas, combatir la delincuencia y eliminar la corrupción interna.

Reforma legal: Impulso ante el Congreso para la revisión de las leyes pro-crimen.

Salud e Infraestructura Pública

Hospital para San Luis: Gestión para convertir el Centro de Salud en un Hospital de Segundo Nivel con emergencias 24 horas. Reapertura de la Posta Médica de la Urb. San Pablo.

Grandes obras urbanas: Construcción del Centro Cívico (con coworking), el Velatorio Municipal, la Alameda Túpac Amaru, el Parque Yerbateros y mejoras viales en las avenidas San Juan, Rosa Toro, Aviación y Circunvalación.

Ciudad Digital y Emprendimiento

San Luis Digital: Trámites municipales 100% en línea y Wi-Fi gratuito en todos los parques y paraderos del distrito.

Incubadora de Startups: Apoyo técnico y financiero prioritario para estudiantes y emprendedores locales.

Vialidad, Ornato y Medio Ambiente

Recuperación de accesos: Plan de embellecimiento y señalización en ingresos críticos y zonas residenciales.

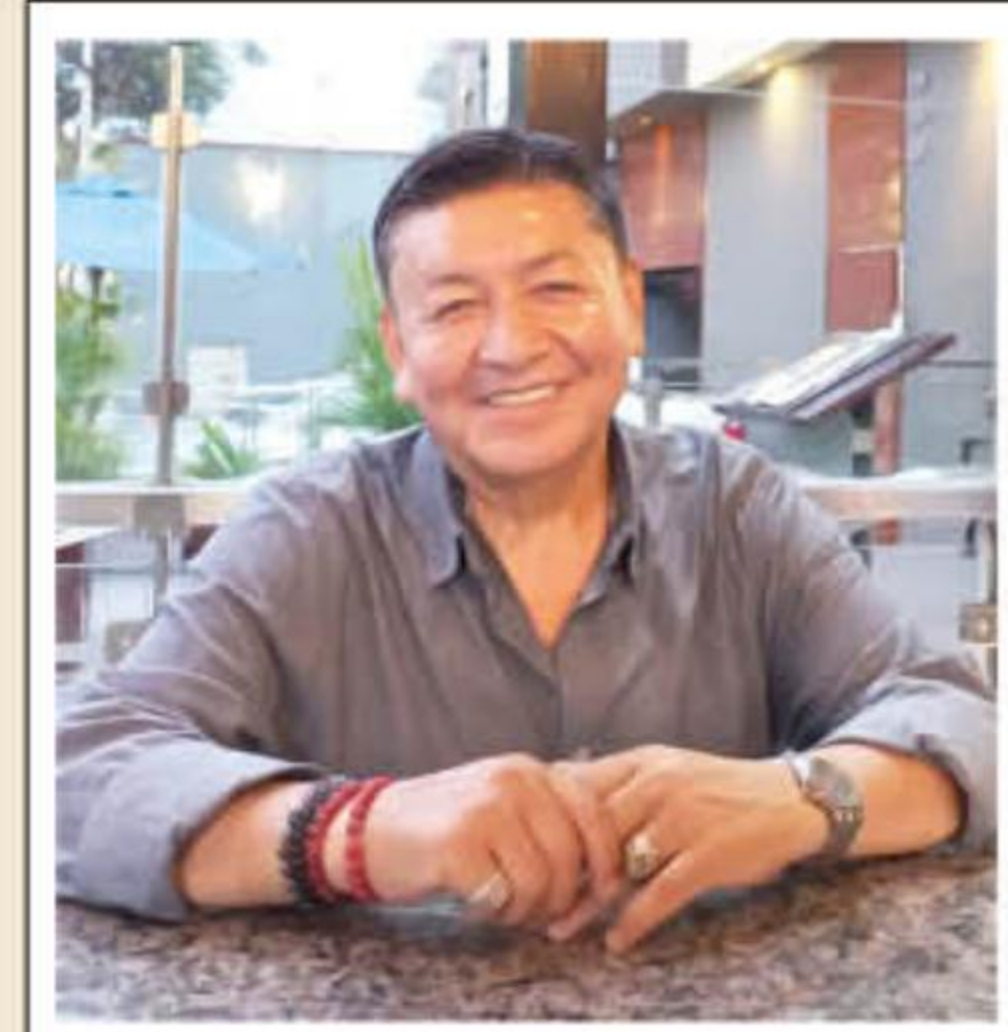
Las Falsas Narrativas de la Izquierda

Si hay algo que ha calado fuerte y, sobre todo, en el último quinquenio, son las falsas narrativas de la izquierda en el escenario político nacional. A pesar de lo erróneas que son dichas narrativas, su trillada repetición y el hecho de que han sido difundidas por varios actores izquierdistas han hecho que sean tomadas como ciertas por un gran sector de la población. A todo esto hay que ponerle un alto. Por ejemplo: han repetido malévolamente, hasta el cansancio, que Keiko Fujimori ha gobernado el país, lo cual no es cierto, porque la lideresa de Fuerza Popular ni ha sido presidenta de la República ni congresista en estos cinco años de gestión.

Al contrario, muchos de los que han difundido esta falsedad son precisamente quienes han gobernado en este quinquenio. Veamos. Quien inició el gobierno en estos cinco años fue el izquierdista Pedro Castillo; luego le siguió, por sucesión, la vicepresidenta de izquierda Dina Boluarte, que acompañó en la plancha al profesor chotano; y actualmente nos gobierna un izquierdista del partido Perú Libre que ganó la elección, José María Balcázar.

Entonces, la respuesta se cae de madura: quien nos ha gobernado todo este periodo ha sido la iz-

quierda y no Keiko Fujimori, como nos han querido hacer creer con su narrativa distorsionada estos sectores de izquierda violentista que no creen en la democracia y que solo participan en ella para ganar el poder y luego implantar una dictadura al mismo estilo de Cuba, Venezuela, Nicaragua y más. Esto fue, precisamente, lo que intentó implementar Pedro Castillo, aunque no logró concretarlo gracias a la reacción de los sectores democráticos del país y al rol de las Fuerzas Armadas y Policiales, que no acataron su intento de cierre de las instituciones democráticas. Otra falsa narrativa de la izquierda es culpar al fujimorismo de haber



Por: Alejandro Ramírez Merino*

tenido el control del Congreso y de haber promulgado las mal llamadas leyes “procrimen”. Esto tampoco es cierto, pues Fuerza Popular solo cuenta en el actual Parlamento con 22 congresistas y recién ocupó la presidencia del Congreso en el último período legislativo, mientras que la izquierda ha tenido como vicepresidente del Congreso, desde el comienzo hasta el final, a Waldemar Cerrón.

Son tantas las narrativas falsas de la izquierda que sería largo enumerarlas. La última de estas, y que resaltamos por ser la coyuntura del momento, es acusar sin ninguna prueba a la ONPE y al JNE de un fraude electoral en contra de su candidato, Roberto Sánchez, que solo existe en su imaginación maliciosa. Buscan manchar la elección que legítimamente ganó la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y de esta forma petardear la democracia, en la cual ellos no creen y que solo la usan como instrumento para su intención final: instaurar un régimen dictatorial, aboliendo la libertad y los derechos humanos de los ciudadanos que falsamente dicen defender.

Una de las prioridades en el gobierno de Keiko Fujimori debe ser desmontar y aclarar todas estas falsas narrativas izquierdistas para que la verdad prevalezca en el país y así el Perú tenga gobernabilidad.



*Analista Político y CEO de la Consultora Estrategia & Poder.

Reforma Integral de la Ley de Seguridad Ciudadana

“CERO IMPUNIDAD. CERO MIEDO”

Una Propuesta para Recuperar la Tranquilidad de los Peruanos

“El miedo se ha convertido en una realidad cotidiana que ningún ciudadano debería aceptar como normal.”



Por: Rodolfo A. Pacheco Vera*



Un país que pide volver a vivir sin miedo

Cada día, millones de peruanos salen de sus hogares con una preocupación que no debería formar parte de la vida diaria: regresar seguros a casa.

El comerciante que abre su negocio teme recibir una llamada de extorsión. El transportista trabaja bajo amenaza de muerte. La madre espera que sus hijos regresen con tranquilidad. El ciudadano común modifica sus horarios, sus rutas, sus costumbres y tiene miedo de subir al transporte público porque la inseguridad ha comenzado a limitar su libertad.

Cuando el crimen organizado avanza, cuando asesinan personas, cuando las extorsiones se convierten en una fuente de ingresos para delincuentes y cuando la población percibe que las instituciones no responden con la firmeza necesaria, el problema deja de ser únicamente policial y se convierte en un desafío para todo el Estado.

Durante 2025, 31 de cada 100 peruanos fueron víctimas de un hecho delictivo. Pero detrás de cada porcentaje existen historias humanas: familias que perdieron sus seres queridos, personas afectadas, negocios cerrados, proyectos frustrados y ciudadanos que han aprendido a convivir con el temor.

El Perú no puede acostumbrarse a vivir así.

La seguridad ciudadana no puede continuar siendo un tema de discursos temporales o acciones improvisadas. Requiere una reforma integral que establezca responsabilidades claras, fortalezca las instituciones, profesionalice la gestión y garantice que los recursos públicos se conviertan en resultados reales.

Por ello nace la propuesta de Reforma Integral de la Ley de Seguridad Ciudadana, basada en un principio fundamental: CERO IMPUNIDAD. CERO MIEDO

Los cuatro pilares de la reforma

I Responsabilidad y consecuencias para quienes tienen el deber de proteger

La seguridad ciudadana requiere autoridades comprometidas y responsables.

Durante años, muchos planes, acuerdos y compromisos en materia de seguridad han quedado únicamente en documentos sin resultados concretos. La ciudadanía no puede seguir siendo espectadora de promesas incumplidas mientras la delincuencia continúa afectando sus vidas.

Esta reforma plantea establecer mecanismos efectivos de responsabilidad para autoridades que conforman el CONASEC, alcaldes y gobernadores regionales que incumplan sus obligaciones en materia de seguridad ciudadana, no ejecuten adecuadamente los recursos asignados o presenten información falsa sobre las acciones realizadas.

La función pública implica poder, pero también responsabilidad. Quien administra recursos destinados a proteger vidas debe responder por sus decisiones.

II Profesionales al mando: seguridad con conocimiento técnico

La seguridad ciudadana no puede estar basada en improvisaciones.

La complejidad actual del delito exige profesionales preparados para analizar riesgos, diseñar estrategias, coordinar instituciones y evaluar resultados.

Por ello, la reforma propone que los Secretarios Técnicos de Seguridad Ciudadana sean profesionales con formación especializada, como:

- Licenciados en Gestión de Seguridad y Riesgos.
- Criminólogos.
- Abogados especializados en seguridad ciudadana.
- Profesionales con experiencia acreditada en gestión pública y prevención del delito.

El Perú necesita que las decisiones de seguridad sean tomadas con conocimiento, metodología y evidencia. La seguridad no puede depender de criterios políticos; debe estar dirigida por capacidades técnicas.

III Fuerza institucional contra el crimen organizado

El crecimiento del crimen organizado exige un Estado firme y articulado.

Las organizaciones criminales han demostrado capacidad para infiltrarse en diferentes niveles de la sociedad e incluso afectar instituciones encargadas de administrar justicia y seguridad.

Por ello, la propuesta plantea medidas severas contra quienes traicionen la función pública y colaboren con el delito organizado:

- Penas de hasta 35 años para policías, militares, fiscales y jueces que participen o colaboren con organizaciones criminales (secuestros, extorsión, sicariato, minería ilegal, tráfico de armas, tráfico ilícito de drogas, etc.)
- Mecanismos especializados para enfrentar procesos contra estructuras criminales de alta peligrosidad, garantizando el debido proceso.
- Participación de las Fuerzas Armadas en zonas críticas, conforme al marco constitucional con apoyo del Ministerio Público y PNP.
- Fortalecimiento del control policial dentro de los establecimientos penitenciarios para impedir que las cárceles continúen siendo centros de planificación criminal.

El mensaje debe ser claro: el Estado debe proteger al ciudadano honesto y actuar con firmeza contra quienes utilizan la violencia para imponer miedo.



IV

Cero recursos perdidos: eficiencia y control del presupuesto

La seguridad ciudadana no siempre requiere más dinero; requiere mejor gestión.

El Estado ya dispone de importantes recursos destinados a enfrentar la inseguridad. La propuesta plantea fortalecer la fiscalización y garantizar la correcta ejecución de los aproximadamente S/ 1 500 millones destinados a seguridad ciudadana.

Cada recurso público debe traducirse en resultados:

- Más prevención.
- Mejor coordinación institucional.
- Mayor capacidad operativa.
- Evaluación permanente de objetivos.

El ciudadano tiene derecho a saber cómo se utilizan los recursos destinados a protegerlo.



La seguridad ciudadana no es un tema de un gobierno de turno. Es una política de Estado que debe mantenerse más allá de los cambios políticos, porque protege lo más importante de una nación: la vida, la libertad y la tranquilidad de sus ciudadanos.

Una nueva visión de seguridad ciudadana

Esta propuesta nace de una convicción: el Perú necesita dejar atrás una visión reactiva de la seguridad y avanzar hacia un modelo preventivo, profesional y responsable. No basta con reaccionar cuando el delito ya ocurrió. Se necesita anticiparse, analizar riesgos, fortalecer instituciones y exigir resultados.

La seguridad ciudadana no es un tema de un gobierno de turno. Es una política de Estado que debe mantenerse más allá de los cambios políticos, porque protege lo más importante de una nación: la vida, la libertad y la tranquilidad de sus ciudadanos.

Esta reforma ha sido planteada desde una visión técnica por profesionales que han dedicado años de formación al estudio de la seguridad y gestión de Riesgos en seguridad ciudadana, con la convicción de que el país necesita soluciones estructurales y no respuestas temporales.

El Perú merece recuperar sus calles, sus espacios públicos y, sobre todo, recuperar la confianza.

Porque una sociedad donde el ciudadano vive con miedo y el delincuente actúa con confianza necesita cambiar de rumbo.

> Reflexión final

La seguridad ciudadana no se recupera solamente con leyes más duras. Se recupera cuando existe un Estado organizado, autoridades responsables, profesionales técnicos capacitados e instituciones que cumplen su función.

El verdadero objetivo no es solo combatir al delincuente.

El verdadero objetivo es devolverle al ciudadano el derecho de vivir tranquilo.

Porque la libertad comienza cuando una persona puede caminar por su barrio sin miedo, abrir su negocio sin amenazas y enviar a sus hijos al colegio con esperanza.

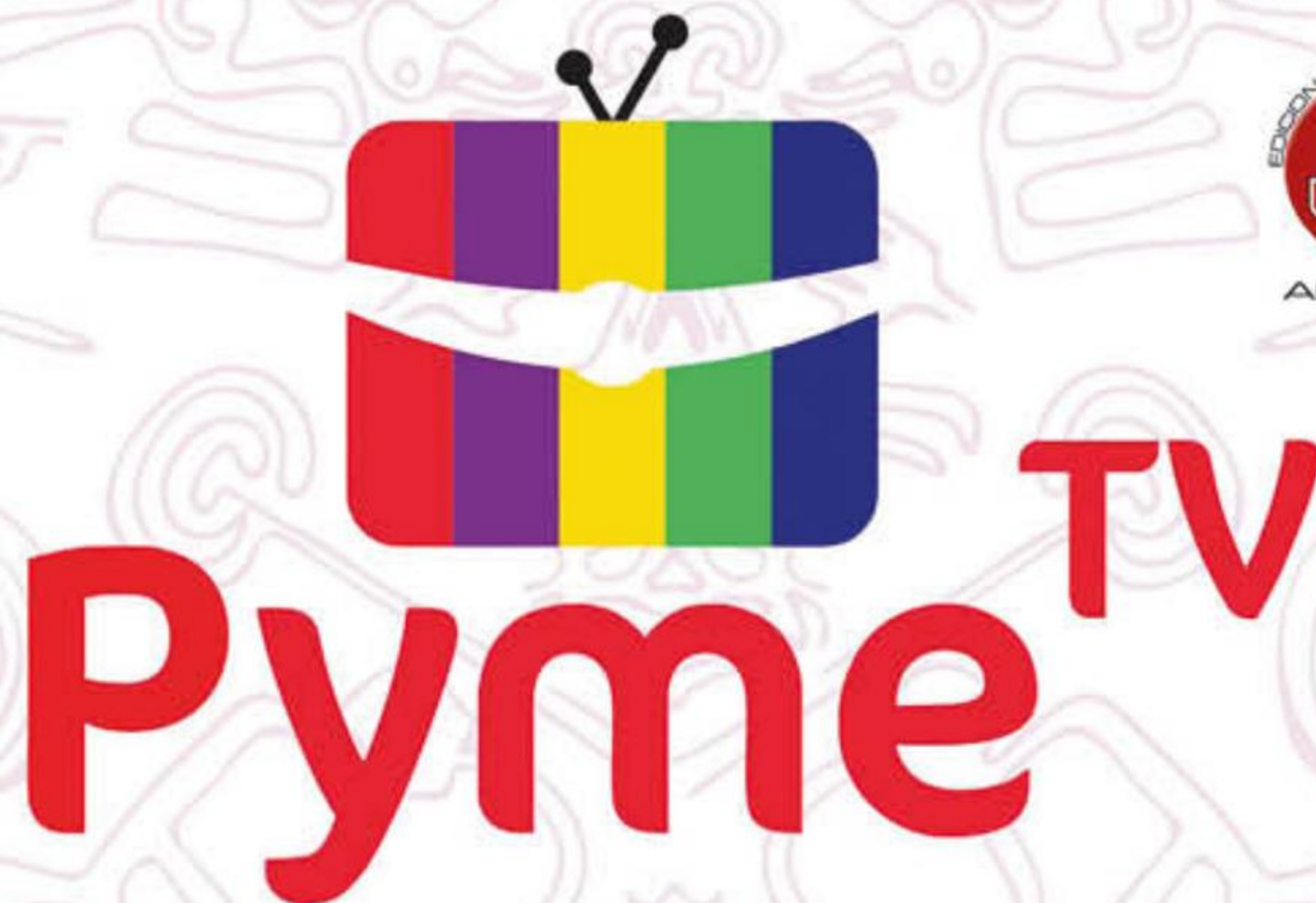
El Perú no necesita más improvisación.

Necesita decisión, capacidad y responsabilidad.

“La seguridad no se improvisa; se planifica, se ejecuta y se responde por sus resultados.”

* Lic. En Gestión de Seguridad y Riesgos / Presidente de la Asociación de Licenciados en Gestión de seguridad y Riesgos del Perú.

Pymetv 100% empresarial





EL SERENAZGO FUERZA PREVENTIVA

El Serenazgo en los distritos se consolida como la primera línea de defensa vecinal contra la delincuencia. Organizado de forma autónoma por cada comuna distrital y provincial, este cuerpo de seguridad ciudadana cumple un rol estratégico en el patrullaje preventivo, la disuasión del delito, el auxilio rápido y el cumplimiento de las ordenanzas locales. Su actuación operativa se despliega siempre en estricto apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP) y demás autoridades competentes.

Con el objetivo de optimizar su impacto y evitar conflictos de competencias, el marco normativo nacional delimita con claridad las funciones de los agentes, enfocándolos exclusivamente en labores de vigilancia, orientación y asistencia ciudadana, sin duplicar las facultades de orden público propias de la policía.

Las municipalidades tienen la responsabilidad legal y social de diseñar estrategias continuas para combatir la inseguridad en sus comunas. A través de un patrullaje eficiente, la recuperación de espacios

públicos y el uso de tecnología como cámaras de videovigilancia, los gobiernos locales son la primera línea de defensa frente a la delincuencia. El objetivo central de esta labor persistente es recuperar la paz en los barrios y garantizar un entorno seguro donde las familias puedan vivir con total tranquilidad.

¿Aprueba o desaprueba la labor del serenazgo en su distrito?

MAGDALENA DEL MAR
Francis Allison Oyague



APRUEBA	72.6%
DESAPRUEBA	22.2%
N/R	5.2%

SAN BORJA
Marco A. Álvarez Vargas



APRUEBA	72.2%
DESAPRUEBA	23.6%
N/R	4.2%

LINCE
Malca Schnaiderman



APRUEBA 71.4%
DESAPRUEBA 25.2%
N/R 3.4%

JESÚS MARÍA
Jesús Gálvez Olivares



APRUEBA 70.3%
DESAPRUEBA 25.4%
N/R 4.3%

LA VICTORIA
Rubén Cano Altez



APRUEBA 69.2%
DESAPRUEBA 26.4%
N/R 4.4%

S. DE SURCO
Carlos Bruce



APRUEBA 68.8%
DESAPRUEBA 27.1%
N/R 4.1%

SAN ISIDRO
Nancy Vizurraga T.



APRUEBA 68.2%
DESAPRUEBA 27.3%
N/R 4.5%

BARRANCO
Jessica Vargas Gómez



APRUEBA 67.7%
DESAPRUEBA 28.2%
N/R 4.1%

SAN MIGUEL
Eduardo Bless C.



APRUEBA 67.2%
DESAPRUEBA 28.3%
N/R 4.5%

CARABAYLLO
Pablo Mendoza Cueva



APRUEBA 66.5%
DESAPRUEBA 30.3%
N/R 3.2%





SURQUILLO
Cintia Loayza



APRUEBA 65.4%
DESAPRUEBA 31.4%
N/R 3.2%

LIMA
Renzo Reggiardo



APRUEBA 64.6%
DESAPRUEBA 31.2%
N/R 4.2%

SAN LUIS
Ricardo Pérez Castro



APRUEBA 64.4%
DESAPRUEBA 31.2%
N/R 4.4%

RÍMAC
Néstor de la Rosa V.



APRUEBA 64.2%
DESAPRUEBA 31.8%
N/R 4.0%



S. MARTÍN DE PORRES
Hernán Sifuentes Barca



APRUEBA 63.5%
DESAPRUEBA 32.3%
N/R 4.2%

EL AGUSTINO
Richard Soria Fuerte



APRUEBA 63.2%
DESAPRUEBA 33.7%
N/R 3.1%

MIRAFLORES
Carlos Canales A.



APRUEBA 62.8%
DESAPRUEBA 33.1%
N/R 4.1%

S. J. DE LURIGANCHO
Jesús Maldonado Amao



APRUEBA 61.6%
DESAPRUEBA 34.2%
N/R 4.2%

FICHA TÉCNICA: Sondeo de Opinión **AGENCIA:** Sondeo Popular SAC
AUTORIZACIÓN: Registro N° 000477-REE/JNE **FINANCIA:** Revista JustoMedio
UNIVERSO: Personas de 18 a más años de edad que residen en los 40 distritos de Lima y El Callao en evaluación.
TÉCNICA DE LA ENCUESTA: El diseño muestral es polietápico, probabilístico y estratificado según zonas urbanas. La selección de los entrevistados se hizo respetando las cuotas de edad y sexo en cada uno de los distritos seleccionadas.
TAMAÑO DE LA MUESTRA: 2,400 encuestas, (60 casos por distritos). Con un margen de error para el total de 1.5%, en el supuesto de máxima dispersión de los resultados para un nivel de confianza del 95%.
FECHA DEL TRABAJO DE CAMPO: Del 02 al 08 de julio del 2026

EL RIMÁC

Alcalde promueve Chequeos Cardíacos Gratuitos a favor de Cientos de Vecinos



Con el objetivo de fortalecer la prevención y el cuidado de la salud de la población, la Municipalidad del Rímac que lidera el alcalde Econ. Néstor de la Rosa Villegas, recorre el distrito con una importante campaña de salud cardiovascular en beneficio a cientos de vecinos con chequeos cardíacos gratuitos mediante moderno electrocardiograma.

Gracias a esta iniciativa los vecinos pueden acceder a evaluaciones que le permitan detectar oportunamente posibles afecciones cardíacas y recibir orientación profesional para el cuidado de su salud.

Durante la actividad, los especialistas destacaron la importancia de realizar controles preventivos periódicos, ya que las enfermedades cardiovasculares continúan siendo una de las principales causas de mortalidad en el país. El moderno equipo de electrocardiografía facilita una atención rápida, segura y eficiente para los beneficiarios.

CARABAYLLO

Aniversario del Distrito mas Exitoso de Lima

En el marco de las festividades locales, se desarrollaron diversas actividades en variadas zonas del distrito, tales como el desfile y pasacalle escolar, un matrimonio masivo y eventos deportivos.

El alcalde Pablo Mendoza agradeció el apoyo incondicional de su esposa, Rosario Peláez, destacando su gran labor social junto a las organizaciones vecinales. Asimismo, dio a conocer los proyectos que se vienen ejecutando por más de 30 millones de soles en pistas y veredas para diversas zonas de Carabayllo.

Limpieza Pública

Con el fin de evitar que malos ciudadanos arrojen basura en la vía pública, se instalaron contenedores móviles en puntos estratégicos. Gracias a estas acciones y a las nuevas unidades adquiridas por la gestión, el distrito luce más limpio.



Seguridad Ciudadana

En un trabajo conjunto entre la PNP y el equipo de Serenazgo, se ejecutan operativos inopinados de manera constante. Estas intervenciones ya reflejan resultados positivos e importantes capturas para la tranquilidad de las familias. Finalmente, la autoridad edil agradeció el respaldo de los contribuyentes, cuyo cumplimiento en el pago de impuestos demuestra la unión y el compromiso por consolidar un distrito sólido. ¡Que viva Carabayllo!

LINCE

Nueva iluminación y accesibilidad en el Parque Ramón Castilla



La Municipalidad de Lince modernizó el sistema de iluminación interna del Parque Mariscal Ramón Castilla con tecnología LED para reforzar la seguridad vecinal. La intervención en esta Área de Reserva Ambiental incluyó la mejora de veredas peatonales, la instalación de senderos podotáctiles, rampas y zonas de descanso accesibles.

La alcaldesa Malca Schnaiderman destacó que estas obras garantizan la autonomía de niños, adultos mayores y personas con discapacidad. "Nos propusimos construir un distrito sin exclusiones donde todos disfruten de los espacios públicos", afirmó.

LA VICTORIA

Reforzando la Seguridad Ciudadana

Con el firme objetivo de cerrarle el paso a la delincuencia y devolverle la tranquilidad a los vecinos, la Municipalidad de La Victoria presentó oficialmente una moderna flota de trece (13) camionetas Mitsubishi L200, destinadas a fortalecer la capacidad operativa de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y la Subgerencia de Serenazgo, permitiendo optimizar las labores de patrullaje integrado, incrementar la presencia del serenazgo en las zonas más críticas y reducir drásticamente los



tiempos de respuesta ante situaciones de emergencia.

La ceremonia de presentación estuvo liderada por el alcalde del distrito, Ruben Cano, quien estuvo acompañado por el Coronel PNP Jhon William Luján Munive, jefe de la División Policial Centro 2. Ambos funcionarios destacaron que esta adquisición es un reflejo del compromiso de la gestión municipal por modernizar sus herramientas de protección y trabajar

en estrecha alianza con la Policía Nacional del Perú (PNP).

"La seguridad de nuestros vecinos no puede esperar. Con estas 13 nuevas camionetas no solo estamos equipando a nuestro cuerpo de Serenazgo con herramientas dignas y de última generación, sino que estamos potenciando el patrullaje integrado para recuperar el orden público en cada rincón de La Victoria", afirmó el alcalde Ruben Cano.

MAGDALENA

Inauguran Plaza del Valor y la Paz

En un emotivo acto, la Municipalidad de Magdalena del Mar inauguró la Plaza del Valor y la Paz. Este espacio rinde homenaje a los Técnicos Desactivadores de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional del Perú que cayeron en el cumplimiento del deber o arriesgaron sus vidas por la pacificación del país.

El lugar alberga una escultura donada por personal policial en retiro, la cual simboliza el reconocimiento, gratitud y respeto a su valentía. De este modo, se preserva el legado de quienes entregaron todo por la paz del Perú.

La ceremonia contó con la participación del alcalde distrital, Francis



Allison Oyague, altos oficiales de la PNP, miembros de la familia UDEX en actividad y retiro, familiares e invitados especiales.

Cabe destacar que la UDEX es una de las especialidades más emble-

máticas de la institución. Desde su creación, ha sido fundamental en la lucha contra el terrorismo y la neutralización de explosivos, consolidándose como un referente de excelencia y compromiso con la seguridad nacional.



Campaña de Desratización

La Municipalidad de Jesús María continúa desarrollando campañas de desratización en diversos sectores del distrito como parte de las acciones preventivas orientadas a

proteger la salud de la población y mantener espacios públicos seguros y saludables.

Estas intervenciones buscan controlar la presencia de roedores y

reducir el riesgo de enfermedades zoonóticas, contribuyendo a preservar las condiciones sanitarias en parques, áreas comunes y otros espacios de uso público.

Las campañas forman parte del trabajo permanente que realiza la comuna en materia de salud ambiental, promoviendo medidas preventivas que favorecen el bienestar de los vecinos y fortalecen la limpieza y el cuidado del entorno urbano.

La Municipalidad de Jesús María recuerda que la participación y colaboración de la ciudadanía son fundamentales para el éxito de estas acciones, mediante el adecuado manejo de residuos sólidos y el mantenimiento de espacios limpios en viviendas y establecimientos.

Una Mirada desde la Gestión Pública



Por: Ing. Marcos Daniel Paucar Cotrina*

¿Por qué fracasan los horarios de recolección de residuos municipales?

El camión de la basura pasa con música festiva anunciando su llegada. El mensaje vecinal es claro: “saque sus residuos de 8:00 p. m. a 9:00 p. m.”. Sin embargo, la unidad aparece a las 10:00 p. m., transita a excesiva velocidad sin recolectar nada o, simplemente, nunca llega. Si le preguntan a un vecino al azar de alguno de los distritos del Perú, seguramente les dirá que lo señalado lo ha vivido muchas veces.

Por tanto, esta desconexión entre la norma local (los horarios de recolección son establecidos en ordenanzas municipales) y la realidad operativa no es una anécdota; es una constante en múltiples distritos del Perú. El resultado político y administrativo es devastador: se quiebra la confianza del ciudadano y se destruye la credibilidad de la autoridad (afectando directamente a la gobernabilidad del distrito).

Ante la ausencia de contenedores y la falta de fiabilidad del servicio, el vecino termina abandonando sus bolsas en la vía pública, originando los denominados “puntos críticos”.

La raíz del problema es directa: en la mayoría de las municipalidades las propias autoridades incumplen los horarios que establecen mediante ordenanzas.

¿Por qué no pueden cumplir sus horarios?

Cuando el servicio es tercerizado,



las fallas provienen principalmente del incumplimiento de las empresas proveedoras: retrasos, flota incompleta o averías mecánicas en ruta. El error institucional radica en el diseño de las bases de licitación. Los funcionarios competentes deben estructurar penalidades basadas en la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) que desincentiven el incumplimiento. Si asumir la multa le resulta más económico al proveedor que subsanar la falta, el contrato social y administrativo

fracasa. Las bases deben exigir, de forma rigurosa, estándares mínimos de antigüedad y capacidad de carga de los vehículos.

Por otro lado, cuando la gestión es directa, el colapso responde a la ausencia de un plan estructurado de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria. A esto se suma una deficiente gestión del talento humano. El personal operativo enfrenta rutinas extenuantes sin capacitación ni un sistema de valoración laboral, percibiendo además sus haberes de manera tardía. Esta precariedad genera una alta deserción y un servicio inestable.

¿Se debe mantener el sistema de horarios de recolección?

La evidencia demuestra que el sistema tradicional de horarios fijos de recolección ha dejado de ser viable y fiable en las urbes de alta densidad. El norte de la gestión moderna exige migrar progresivamente hacia sistemas de contenerización pública (soterrados o superficiales). Esta infraestructura debe articularse con Programas de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva, en estricto cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1278 (Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos).

Estas transiciones requieren que la Alta Autoridad se comprometa



y trabajo de la mano con su funcionario responsable. Siendo un ejemplo de transiciones exitosa, la iniciada en la Municipalidad de Magdalena del Mar durante la gestión del alcalde Carlo Magno Chacón, demostrando que el cambio de paradigma es posible. Diseñar un servicio público eficiente no es un asunto de buena voluntad, sino de ingeniería, fiscalización contractual y visión política moderna.

Asimismo, es fundamental priorizar la Educación Ambiental. Las municipalidades deben implementar sus Programas EDUCCA (Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental); sin embargo, para muchas gestiones esto representa únicamente una partida presupuestal

obligatoria, desaprovechando su verdadero impacto. En la práctica operativa, las gerencias de administración suelen catalogar esta inversión erróneamente como “un gasto”, una barrera burocrática que los especialistas técnicos debemos afrontar constantemente. Como se explicó, la población ya no cree en sus autoridades ni se fía del sistema de limpieza pública. Por ello, se debe trabajar (en colaboración con las áreas de participación vecinal) para restablecer esta confianza. Al impactar directamente en la calidad de vida, la educación ambiental se transforma en la columna vertebral de la gestión ambiental municipal. Lamentablemente, diversos “gestores” aún desconocen y minimizan su valor estratégico.

¿y el gobierno central puede ayudar a mejorar?

Si, y una manera directa y rápida son Los Programas de Incentivos Municipales, estos evalúan actualmente la erradicación de puntos críticos y la disposición final en rellenos sanitarios. No obstante, para asegurar la sostenibilidad, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el MINAM deberían incorporar como criterio la sustentación obligatoria del cumplimiento de rutas y horarios mediante el acceso en tiempo real a los sistemas GPS de las unidades de recolección. Esto forzaría a las municipalidades a implementar un control de supervisión estricto.

* Especialista en Gestión de Residuos Sólidos

Instituto Catastral de Lima

Impulsando el Desarrollo del Catastro a Nivel Nacional

La gestión que convirtió a una entidad técnica en referente nacional e internacional del catastro y de gestión territorial.

Desde el inicio de la gestión de Luis Molina Arles como Presidente Ejecutivo del Instituto Catastral de Lima (ICL), en enero de 2023, la institución ha experimentado el proceso de transformación más importante de su historia reciente. Lo que durante años fue una entidad eminentemente técnica, hoy se ha consolidado como un referente nacional e internacional en materia de catastro, geomática, innovación tecnológica y planificación territorial.



Con una visión estratégica, liderazgo institucional y una apuesta decidida por la modernización, Luis Molina ha impulsado un nuevo modelo de gestión basado en la innovación, la eficiencia administrativa y el fortalecimiento de las capacidades técnicas del Estado, posicionando al Instituto Catastral de Lima como un actor clave para el desarrollo urbano sostenible del país.

El trabajo articulado entre la Presidencia Ejecutiva, el Consejo Directivo, la Gerencia General y todo el equipo técnico y profesional del ICL ha permitido alcanzar resultados históricos que hoy benefician directamente a las municipalidades provinciales y distritales, y a millones de ciudadanos.



Un hito histórico: la actualización catastral del Cercado de Lima después de 21 años

Uno de los mayores logros de esta gestión es la actualización catastral masiva del Cercado de Lima, proyecto que permaneció paralizado durante más de dos décadas.

Gracias al convenio suscrito con la Unidad Ejecutora N.º 003 – COFOPRI y al financiamiento del Banco Mundial, el ICL ejecuta una inversión superior a S/ 15 millones, destinada a actualizar la información de más de 156 predios, fortaleciendo el ordenamiento territorial

y permitiendo mejorar la planificación urbana, la gestión municipal y la recaudación tributaria.

Este proyecto representa uno de los procesos de modernización territorial más importantes ejecutados en la capital en los últimos años y permitirá incrementar la base tributaria del SAT en no menos del 25 %, generando mayores recursos para obras y mejores servicios públicos.

El levantamiento y actualización catastral del Cercado de Ica

Bajo el liderazgo de Luis Molina Arles, el ICL inició su expansión hacia otras regiones del país mediante la ejecución del levantamiento catastral del Cercado de Ica, proyecto desarrollado en convenio con la Municipalidad Provincial de Ica, con una inversión de S/ 8.1 millones y una meta de 83,644 predios del Cercado de Ica. Este trabajo constituye un modelo replicable que permitirá a otras ciudades contar con información territorial moderna para planificar su crecimiento, ordenar el desarrollo urbano y mejorar la calidad de los servicios municipales.

Impulsando el catastro a nivel nacional

Uno de los pilares de esta gestión ha sido descentralizar la experiencia técnica del Instituto. Desde el 2023, el ICL ha fortalecido su presencia en prácticamente todo el país mediante la suscripción

de más de 160 convenios marco y específicos con municipalidades provinciales y distritales, alcanzando 22 departamentos del Perú. Esta estrategia ha permitido brindar asistencia técnica especializada en catastro, cartografía y geomática, fortaleciendo las capacidades de los gobiernos locales y consolidando al Instituto como el principal aliado técnico de las municipalidades peruanas para el desarrollo territorial.

Tecnología de última generación al servicio del territorio

La transformación institucional también ha estado acompañada por una profunda modernización tecnológica. Durante la gestión de Luis Molina Arles, el Instituto renovó completamente su capacidad operativa mediante la adquisición de equipos de alta precisión como drones profesionales, escáneres LiDAR, estaciones totales, receptores GPS geodésicos, modernos equipos fotogramétricos, así como una data center segura y eficiente. Asimismo, se desarrolló la Ortofoto del Cercado de Lima, fortaleciendo la infraestructura geoespacial institucional, permitiendo ofrecer información cartográfica más precisa, interoperable y disponible para la toma de decisiones públicas.

Una institución financieramente sólida

La gestión también deja resultados concretos en materia administrativa y financiera.



Cuando Luis Molina asumió la Presidencia Ejecutiva en 2023, el Instituto enfrentaba una situación económica en rojo. Hoy, gracias a una administración eficiente, el ICL presenta indicadores financieros positivos históricos.

Asimismo, el presupuesto institucional pasó de S/ 5.46 millones en 2023 a S/ 11.44 millones para el ejercicio 2026, debido al incremento de los ingresos propios, registrando cifras históricas y reflejando un crecimiento sostenido financiero por los servicios especializados que hoy brinda el Instituto a nivel nacional.

El Perú fue sede de la cumbre catastral más importante de Iberoamérica

El posicionamiento alcanzado por el ICL también trascendió las fronteras nacionales. En 2025, Lima fue sede del XVI Simposio y XI Asamblea del Comité Permanente sobre el Catastro en Iberoamérica (CPCI), evento internacional organizado por el Instituto Catastral de Lima.

La cumbre reunió a representantes de 20 países, organismos multilaterales, universidades, especialistas y autoridades de América Latina, Europa y Asia para debatir sobre Inteligencia Artificial y Gobernanza del Catastro, consolidando al Perú como referente regional en innovación catastral.





Sección Jurídica Internacional FIA



Federación Interamericana de Abogados Capítulo Peruano

Av. Camino Real 1080. San Isidro. Lima 27-Peru. Teléfono: (+51) (01) 441-2637
e-mail: riveraorejesuantonio@gmail.com/ jesusriveraore@outlook.com

Lima, 26 de junio del 2026

Sr. Doctor

Marco Antonio Arrunategui

Presidente del Directorio de la Revista Justo Medio

Presente. –

De mi especial consideración,

Es grato dirigirme a Ud. para expresarle mi deferencia y en representación del Capítulo Peruano de la FIA, le extendiendo un cordial saludo y asimismo felicitarlo por su exitosa gestión bajo la dirección de tan prestigioso medio de comunicación.

En su calidad de miembro de miembro individual de la Federación Interamericana de Abogados, tiene conocimiento de la 62° Conferencia Anual, Rosario – Argentina del 9 a 12 de junio del presente año, donde los diferentes Comités han presentado ponencias sobre las nuevas tendencias del derecho y dando énfasis al Derecho en la Era Digital, en vía de ilustración le envió el mensaje del Presidente Edson Antonio Miranda – Presidente y de la Dra. María Alejandra Pasquet – Vicepresidente y Presidenta del Comité Organizador, quienes presentaron ambicioso programa que fue destacado por los participantes y asistentes por la calidad del evento. El 8 de junio del presente año se apertura el Congreso con las formalidades que prescribe el protocolo, en este acto se distinguieron a destacados profesionales como es, el Dr. Moisés Tambini del Valle y el Dr. Jesús Antonio Rivera, quienes recibieron la máxima condecoración del FORO denominado “Eduardo Couture”, distinguido jurista y procesalista que apor-

ta con ideas y proyectos al derecho Latinoamericano y Europeo. En el epílogo del Programa académico del día 11 de junio, los abogados Miguel Ángel Rodríguez y Raúl Lozano fueron distinguidos por la Universidad Abierta Interamericana como Maestro del derecho.

El Comité IX- Educación Legal y Abogacía presentó el día miércoles 10 de junio un Ciclo de Conferencias bajo la presidencia del Dr. Jesús Antonio Rivera Oré – Perú, donde participaron los Dres. Iván Torres de La Torre (Perú), Nabil Miguel (Bolivia), Reynaldo R. Alegría (Puerto Rico), donde destacaron los valores deontológicos y ética en la formación del abogado, la formación del abogado en el derecho comparado, el desafío jurídico cuando el dinero busca refugio, educar para proteger la niñez en la era algorítmica como imperativo moral.

Marco Antonio, te agradeceré entregar este material a uno de tus idóneos profesionales, para que lo digiten y destaque la premiación de los Dres. Moisés Tambini del Valle y Jesús Antonio Rivera Oré, quienes recibieron la máxima condecoración “Eduardo Juan Couture Etcheverry” uno de los grandes juristas y procesalistas en nuestra América Latina, cuyo legado perdura hasta nuestros días y late en nosotros como si esta prolífica vida jamás se hubiera apagado. Es importante destacar su acendrado humanismo, su amor por el derecho.

Aprovecho esta oportunidad para reiterarle mi deferencia y estima personal.

JESÚS ANTONIO RIVERA ORE.

Presidente del Capítulo Peruano de la FIA



Mensaje del Presidente de la FIA Edson Antonio Miranda

Estamos llegando al momento más importante del calendario de la Federación Interamericana de Abogados – Inter-American Bar Association – FIA/IABA, que es la celebración de nuestra Conferencia Anual.

Este año nos reuniremos en la bellísima Ciudad de Rosario en la República Argentina, del 9 al 12 de junio de 2026.

Será la 62ª Conferencia en 86 años de vida institucional de la FIA/IABA, ahora con el tema “Universalidad del Derecho en la era de las nuevas tecnologías” El evento, como en las ocasiones anteriores, tiene un carácter gremial, académico, social y cultural, de gran importancia para la Abogacía del Continente Americano. Abogados de distintos países estarán juntos para intercambiar conocimientos y experiencias.

Seremos gratamente recibidos por las autoridades del Colegio de Abogados de Rosario y las autoridades, profesores y estudiantes de la Universidad Abierta Interamericana de Rosario, quienes nos brindan su fraternal apoyo para que el evento alcance el éxito que todos esperamos.

En mi condición de presidente de la Federación Interamericana de Abogados, tendré el grato honor de darles la bienvenida en la Ciudad de Rosario – República Argentina.

EDSON ANTONIO MIRANDA
Presidente
Federación Interamericana de Abogados

Mensaje de María Alejandra Pasquet Vicepresidente Primera FIA

Estimados colegas y amigos de la abogacía interamericana:

Es para mí un honor y una inmensa alegría darles la bienvenida a la 62ª Conferencia Anual de la Federación Interamericana de Abogados (FIA/IABA). En esta ocasión, nos convoca un tema de vanguardia y vital importancia: “Universalidad del Derecho en la era de las nuevas tecnologías”, un desafío que exploraremos profundamente a través de nuestro nutrido programa académico.

Rosario, la “Cuna de la Bandera”, nos abre sus puertas con la calidez que la caracteriza. Esta ciudad, estratégica y vibrante a orillas del majestuoso río Paraná, no es solo un centro de referencia legal y académico en Argentina, sino un escenario donde la historia y la modernidad convergen en armonía. Los invito a dejarse cautivar por su arquitectura emblemática, su variada oferta cultural y su prestigiosa gastronomía, que invita al encuentro y al disfrute de sabores locales en un entorno acogedor que brindarán el entorno ideal para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de nuestros lazos fraternales.

Este encuentro es posible gracias al apoyo incondicional del Colegio de Abogados de Rosario y la Universidad Abierta Interamericana (UAI), cuyas autoridades y estudiantes se han volcado en la organización para asegurar que su estancia sea productiva e inolvidable.

Como organizadora de este evento, mi mayor deseo es que estas jornadas en Rosario representen un hito en nuestra formación profesional y una celebración de nuestra unidad como abogados del continente.

¡Bienvenidos a Rosario y a la 62ª Conferencia Anual de la FIA!

MARÍA ALEJANDRA PASQUET
Vicepresidente Primera FIA
Presidenta del
Comité Organizador
Federación Interamericana
de Abogados (FIA/IABA)





Comentario de Miguel Ángel Rodríguez Mackay

Querida presidenta de la FIA, Dra. María Alejandra Pasquet y en tu nombre a todos, pero a todos los honorables miembros de nuestra octogenaria federación:

Ya apostado en Lima con la total pausa que merece estas líneas para ti, con tal altísima membresía de la Juridicidad Panamericana de la que estás investida, deseo expresarte vivamente mi reconocimiento por la exitosa 62° Conferencia Anual de nuestra Federación.

Atendiste en forma personalizada -lo mismo todo tu equipo-, para llegar en la mejor performance a Rosario. La mano de tu predecesor, el ilustre Jurista Edson Miranda, se vio de comienzo a fin. Veo en perspectiva que la FIA ha entrado en un punto de inflexión interna positiva sumamente auspiciosa y en alza, en cuyo decurso el capítulo boliviano con el afable Marco Antonio García claros y su indesmayable compañera de gesta académico y logística, Mabel Antezana, fueron decisivos para darle calma a nuestro gremio, indispensable para sus nuevas venturas y en ese proceso de estabilidad mi país ha jugado su rol con la experiencia de nuestro apreciado Raúl Lozano, Pas presidente de la FIA.

Los tiempos que siguen suponen nuevas metas y estoy persuadido que las próximas reuniones del consejo y conferencia anual, reflejarán el renovado ambiente que hemos vivido y experimentado en argentina.

Quisiera terminar estas líneas saludando con respeto y regocijo a la delegación peruana, con la que fuimos honrados en integrar mi hija María Alejandra, también abogada y yo, y que estuvimos presididos con dos altos juristas nacionales que merecen el mayor de mis respetos, los doctores moisés Tambini del valle y Jesús Antonio Rivera Oré, y desde luego a todos los delegados nacionales.

Te deseo, presidenta, el mayor de los éxitos, y por tu medio, con el ruego de hacer llegar mis saludos y agradecimientos a todas las instituciones jurídicas y académicas que coadyuvaron al éxito de la conferencia en rosario.

Un afectuoso abrazo con el deseo de pronto vernos todos.

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ MACKAY
Exministro de Relaciones Exteriores del Perú -
Consejero de la FIA

Queridos amigos,

La Conferencia Interamericana de Abogados de la Federación Interamericana de Abogados fue un éxito gremial, académico y profesional.

La delegación peruana asistente a Rosario, Santa Fe, Argentina tuvo una destacadísima participación.

Nos sentimos muy orgullosos que nuestro líder y presidente de nuestro Centro don Moisés Tambini y nuestro primer vice presidente del Centro don Jesús Antonio Rivera fueran reconocidos y condecorados con la máximo presea que otorga la FIA cual es la condecoración en el más alto grado denominada Eduardo Couture en homenaje al presidente FIA de 1952 a 1954.

Fueron ratificados en sus cargos de Consejeros por Perú don Moisés Tambini, don Ivan Torres y don Miguel Rodríguez.

Fue elegido por la Asamblea como nuevo consejero peruano don Walter Rivera.

Por otro lado, don Miguel Rodríguez y Raúl Lozano fueron distinguidos por la Universidad Abierta Interamericana UAI como maestros del derecho por dicha casa de estudios.

En lo personal recibí el reconocimiento del Colegio de Abogados de Rosario.

Felicitaciones a nuestros queridos y emblemáticos miembros de este selecto grupo por sus merecidos reconocimientos y mis mejores deseos para que este grupo solvente y de honor prosiga gestando con su presencia el reconocimiento internacional de la abogacía peruana.

Abrazos y éxitos!





Sección Jurídica Internacional FIA



Con gran éxito se llevó a cabo la 62ª Conferencia Anual en el marco de los 86 años de vida institucional de la FIA/IABA, celebrada del 9 al 12 de junio en la ciudad de Rosario, República Argentina. Bajo el lema “Universalidad del Derecho en la era de las nuevas tecnologías”, el encuentro mantuvo su tradicional carácter gremial, académico, social y cultural, consolidándose como un espacio de gran relevancia para la abogacía del continente americano, donde profesionales de distintos países intercambiaron conocimientos y experiencias.

Asimismo, las autoridades del Colegio de Abogados de Rosario, junto con directivos, profesores y estudiantes de la Universidad Abierta Interamericana de Rosario, brindaron un fraternal apoyo que resultó fundamental para el éxito del evento.





Sección Jurídica Internacional FIA





RESOLUCION de la III CUMBRE AMERICANA DE ABOGADOS

Washington, DC., 13 de julio de 2026

En ocasión de celebrarse la III Cumbre Americana de Colegios de Abogados en el marco de la 62ª Conferencia de la Federación Interamericana de Abogados, en la Casa del Foro del Colegio de la Abogacía de la ciudad de Rosario, Argentina, el día 9 de junio de 2026, y siendo los ejes de debate propuestos: el rol de los Colegios ante los desafíos de la era digital; la modernización de los sistemas judiciales; el ejercicio profesional y el uso ético de la Inteligencia Artificial (IA).

CONSIDERAMOS:

1. Transformación digital de la profesión jurídica

La abogacía enfrenta una transformación profunda derivada de la digitalización de los procesos judiciales y administrativos.

La pandemia aceleró la virtualización de la justicia y del ejercicio profesional.

La tecnología constituye una herramienta imprescindible para mejorar la eficiencia y el acceso a la justicia.

2. Inteligencia Artificial y ejercicio profesional

La IA ya forma parte de la práctica cotidiana de abogados, jueces y árbitros.

Su utilización genera beneficios significativos en materia de gestión, investigación jurídica y procesamiento de información.

Existen riesgos asociados a las denominadas “alucinaciones” de la IA, la generación de doctrina o jurisprudencia inexistente y la reproducción de sesgos.

3. Centralidad de la ética profesional

La ética profesional debe constituir el eje rector del uso de tecnologías emergentes.

El abogado conserva la responsabilidad profesional sobre todo documento, escrito o actuación que suscribe. La IA no sustituye el juicio profesional ni la responsabilidad jurídica del abogado.

4. Rol institucional de los Colegios de la Abogacía

Los colegios profesionales son garantes de la ética, la capacitación continua y la defensa de la independencia profesional.

Deben liderar la elaboración de pautas, recomendaciones y protocolos para el uso responsable de la IA.

Deben promover la actualización permanente de la matrícula frente a los nuevos desafíos tecnológicos.

5. Defensa de la dignidad profesional

Se manifestó preocupación por plataformas digitales que promueven la subasta de honorarios profesionales.

Tales prácticas pueden afectar la dignidad de la profesión, la ética profesional y los sistemas legales de honorarios mínimos.

6. Situación de la abogacía joven

Se advirtió una creciente dificultad para el desarrollo profesional de los novatos abogados.

Resulta necesario fortalecer programas de capacitación tecnológica, ética y nuevas incumbencias profesionales.

7. Protección de derechos fundamentales

La expansión de la IA plantea desafíos respecto de:

- Privacidad y protección de datos.
- Honor e imagen de las personas; o violencia digital.
- Violencia contra mujeres.
- Protección de niñas, niños y adolescentes.
- Pornografía infantil generada mediante tecnologías de manipulación digital.



Sección Jurídica Internacional FIA



Concluyendo, se decidió elaborar la siguiente **RESOLUCIÓN**:

Artículo 1°

Ratificar el compromiso de los Colegios de Abogados de América con la defensa del Estado de Derecho, la independencia profesional y el acceso efectivo a la justicia.

Artículo 2°

Reconocer a la Inteligencia Artificial como una herramienta de apoyo para el ejercicio profesional y la administración de justicia, cuyo uso deberá realizarse bajo supervisión humana permanente.

Artículo 3°

Reafirmar que la responsabilidad ética y jurídica por los actos profesionales corresponde exclusivamente al abogado o abogada actuante, aun cuando utilice herramientas de inteligencia artificial.

Artículo 4°

Recomendar a los Colegios de la Abogacía la adopción de:

- Protocolos de uso ético de IA.
- Guías de buenas prácticas.
- Programas de capacitación permanente.
- Mecanismos de verificación y control de la información producida por sistemas de IA.

Artículo 5°

Exhortar a los poderes judiciales y organismos públicos a impulsar procesos de modernización tecnológica que garanticen:

- El acceso a la justicia.
- La transparencia.

- La protección de derechos fundamentales.
- La preservación del debido proceso.

Artículo 6°

Promover el desarrollo de marcos normativos nacionales e internacionales que regulen el uso responsable de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico.

Artículo 7°

Instar a los Colegios de Abogados a fortalecer la formación de la abogacía joven en:

- Ética profesional.
- Competencias digitales.
- Inteligencia artificial aplicada al derecho.
- Nuevas áreas de ejercicio profesional.

Artículo 8°

Manifestar la preocupación de esta Cumbre respecto de prácticas tecnológicas que vulneren la dignidad de la profesión, la justa retribución profesional o los principios éticos de la abogacía.

Artículo 9°

Reafirmar que toda innovación tecnológica debe estar orientada al fortalecimiento de la persona humana, la protección de los derechos fundamentales y la consolidación de sociedades democráticas e inclusivas.

Artículo 10°

Remitir la presente resolución con carácter de RECOMENDACIÓN a la Federación Interamericana de Abogados, a los Colegios de Abogados miembros, a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a las autoridades judiciales competentes para su conocimiento y difusión.

María Alejandra Pasquet
Presidente



INTER-AMERICAN BAR ASSOCIATION
FEDERACION INTERAMERICANA DE ABOGADOS
FEDERACAO INTERAMERICANA DE ADVOGADOS
FEDERATION INTER-AMERICAINE DES AVOCATS
(IABA - FIA)





CIVIL LAW

¿El Derecho Continental necesita Reinventarse para Sobrevivir al siglo XXI?

Entre la seguridad jurídica de los códigos y la velocidad de un mundo que cambia todos los días

Por: ARRUNATEGUI PARTNERS – Abogados | Consultores | Litigios Estratégicos

“Durante más de dos siglos, el Derecho Continental ha ofrecido seguridad jurídica mediante la ley escrita. Hoy enfrenta una pregunta inevitable: ¿puede un código seguir el ritmo de una sociedad que cambia más rápido que el legislador?”

El sistema Civil Law, también conocido como Derecho Continental, constituye el modelo jurídico predominante en Europa continental, América Latina y gran parte del mundo. Su principal característica es que la ley escrita ocupa el centro del ordenamiento jurídico y se convierte en la fuente principal del Derecho.

Este modelo, heredero del Derecho Romano y consolidado con los grandes códigos civiles del siglo XIX, ha permitido construir sociedades con altos niveles de seguridad jurídica, estabilidad normativa y predictibilidad.

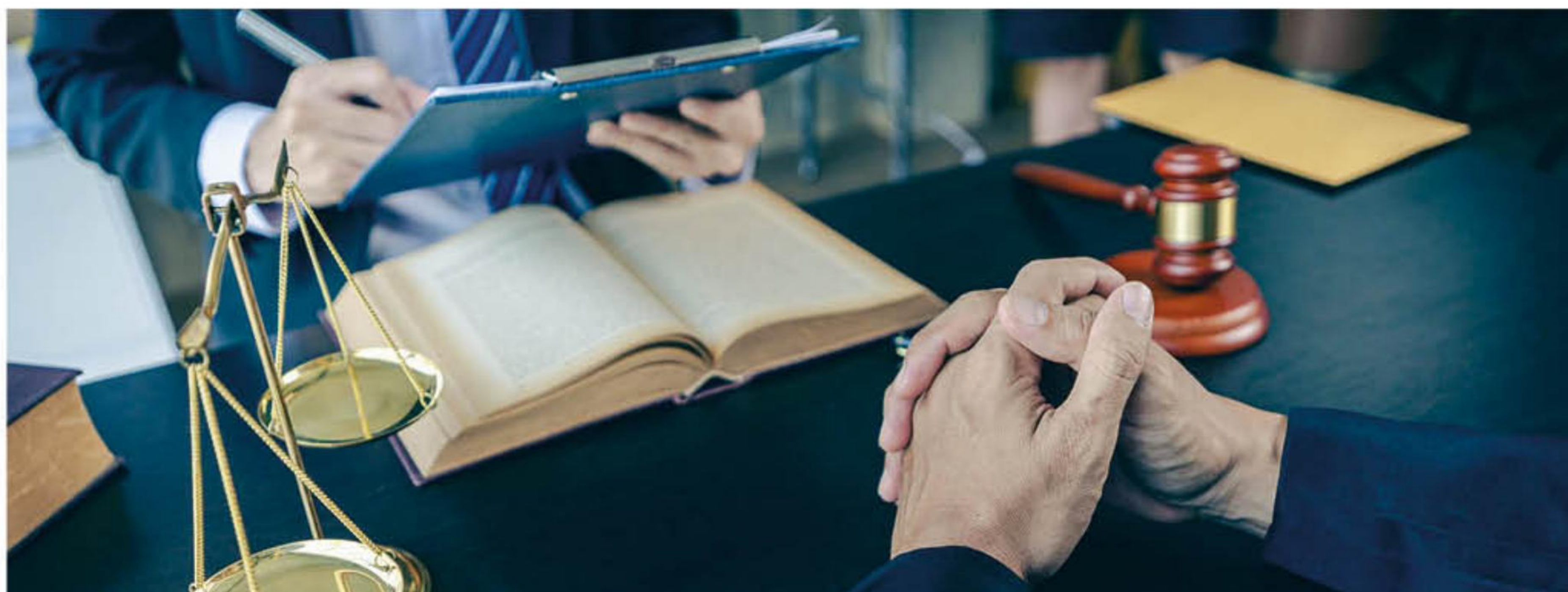
Sin embargo, el mundo del siglo XXI plantea un desafío sin precedentes.

La inteligencia artificial, los contratos inteligentes (smart contracts), las criptomonedas, la economía digital y la globalización avanzan a una velocidad que ningún Congreso puede igualar.

Y allí surge una pregunta incómoda para los juristas:

¿Puede un sistema basado principalmente en leyes escritas responder con eficacia a una realidad que cambia todos los días?

La respuesta merece un debate profundo.





Sección Jurídica Internacional FIA



La fortaleza del Civil Law

El Derecho Continental nació con un propósito claro: evitar que las decisiones judiciales dependieran exclusivamente del criterio personal de cada juez.

Por ello, los códigos civiles, penales, comerciales y procesales establecieron reglas generales aplicables a todos los ciudadanos.

La ley escrita ofrecía igualdad.

La ley escrita brindaba previsibilidad.

La ley escrita limitaba la arbitrariedad.

Ese principio continúa siendo uno de los mayores aportes del Civil Law.

En un Estado democrático, los ciudadanos deben conocer previamente cuáles son sus derechos y obligaciones.

La seguridad jurídica constituye uno de los pilares del desarrollo económico.

Cuando la ley llega tarde

Pero también existe otra realidad. Mientras el procedimiento legislativo puede tardar meses o incluso años, la tecnología modifica diariamente las relaciones sociales.

Hace apenas diez años no discutíamos sobre inteligencia artificial generativa, algoritmos capaces de redactar contratos, plataformas digitales de trabajo, identidad digital o metaverso.

Hoy esos temas forman parte de la agenda jurídica internacional. El problema no es la ley.

El problema es el tiempo que necesita para adaptarse.



Mientras tanto, los jueces deben resolver conflictos utilizando normas que muchas veces fueron redactadas para una realidad completamente distinta.

¿Demasiadas leyes... y poca justicia?

América Latina ofrece una paradoja. Muchos países poseen miles de leyes, reglamentos, decretos y disposiciones administrativas.

Sin embargo, ello no siempre se traduce en mayor seguridad jurídica.

En ocasiones ocurre exactamente lo contrario.

La proliferación normativa genera contradicciones, incertidumbre y dificultades para interpretar correctamente el ordenamiento jurídico.

Más normas no significan necesariamente mejor Derecho.

El verdadero desafío consiste en producir normas claras, coherentes y estables.

El protagonismo de los jueces

Tradicionalmente se enseñó que en el Civil Law los jueces aplicaban la ley.

Hoy esa afirmación resulta insuficiente.

La constitucionalización del Derecho, la protección internacional de los derechos humanos y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional han otorgado a los jueces un papel mucho más activo en la interpretación jurídica.

Las sentencias de los tribunales constitucionales, de las cortes supremas y de los tribunales internacionales influyen cada vez más en la evolución del Derecho.

En la práctica, el Civil Law comienza a acercarse, aunque parcialmente, a algunos elementos propios del Common Law, donde la jurisprudencia ocupa un papel central.

Lejos de debilitar el sistema, esta evolución refleja la necesidad de interpretar la ley conforme a los principios constitucionales y a la realidad social.



¿Codificar o simplificar?

Durante décadas, la respuesta frente a nuevos problemas consistió en aprobar nuevas leyes. Hoy muchos especialistas sostienen que el camino debería ser distinto.

Tal vez el futuro del Derecho Continental no pase por multiplicar normas, sino por simplificarlas.

Un sistema jurídico excesivamente complejo favorece la litigiosidad, incrementa los costos de cumplimiento y reduce la confianza de ciudadanos e inversionistas.

La calidad del Derecho importa mucho más que su cantidad.

El Perú y el desafío del Civil Law

Nuestro país forma parte de la tradición romano-germánica.

El Código Civil, el Código Procesal Civil y las demás codificaciones continúan siendo la base del sistema jurídico.

Sin embargo, el Perú también enfrenta los mismos desafíos que el resto del mundo:

- Transformación digital.
- Inteligencia artificial.
- Comercio electrónico.
- Protección de datos personales.
- Ciberseguridad.
- Activos digitales.
- Nuevas formas de contratación.

El Derecho deberá responder a estas realidades sin perder los principios que históricamente han caracterizado al Civil Law: legalidad, seguridad jurídica, igualdad y protección de los derechos fundamentales.

Cinco desafíos para el Derecho Continental

La evolución del Civil Law exige

La constitucionalización del Derecho, la protección internacional de los derechos humanos y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional han otorgado a los jueces un papel mucho más activo en la interpretación jurídica.

una agenda moderna orientada a fortalecer sus principales virtudes. Entre las prioridades destacan:

Primero. Modernizar los códigos sin perder su coherencia sistemática.

Segundo. Reducir la inflación legislativa y privilegiar normas más simples y estables.

Tercero. Incorporar reglas claras sobre inteligencia artificial, economía digital y protección de datos.

Cuarto. Fortalecer la calidad técnica de la legislación mediante procesos de evaluación previa y análisis de impacto regulatorio.

Quinto. Consolidar una justicia especializada, independiente y apoyada en herramientas tecno-

lógicas que permitan interpretar la ley con mayor eficiencia y uniformidad.

El futuro del Civil Law

Lejos de desaparecer, el Derecho Continental probablemente evolucionará hacia un modelo más flexible, donde la ley escrita continuará siendo la principal fuente del Derecho, pero convivirá con una jurisprudencia cada vez más influyente, una mayor integración del Derecho Internacional y el uso de tecnologías aplicadas a la administración de justicia.

El desafío no consiste en abandonar los códigos.

Consiste en hacerlos capaces de responder a una sociedad en permanente transformación.

Reflexión Final

El Civil Law ha demostrado, durante más de dos siglos, ser uno de los sistemas jurídicos más sólidos y estables del mundo. Su fortaleza radica en ofrecer seguridad jurídica mediante normas generales, previsibles y democráticamente aprobadas. Sin embargo, la revolución tecnológica obliga a repensar algunos de sus mecanismos sin renunciar a sus principios esenciales.

Desde ARRUNATEGUI PARTNERS – Abogados | Consultores | Litigios Estratégicos, consideramos que el futuro del Derecho Continental no depende de redactar más leyes, sino de construir un sistema normativo inteligente, coherente y capaz de adaptarse con rapidez a los desafíos de la sociedad digital. La verdadera modernización jurídica no consiste en sustituir la tradición romano-germánica, sino en actualizarla con visión de futuro. Porque el mejor Derecho no es el que cambia todos los días, sino aquel que ofrece estabilidad para el ciudadano y, al mismo tiempo, flexibilidad para responder a los cambios que impone el siglo XXI.



DERECHO ROMANO

¿Reliquia Académica o Columna Vertebral del Derecho Moderno?

La incómoda vigencia de una tradición jurídica que seguimos usando sin reconocerlo

“El Derecho Romano no está muerto. Vive cada vez que hablamos de propiedad, contratos, obligaciones, posesión, herencia, buena fe y responsabilidad.”

Por: ARRUNATEGUI PARTNERS – Abogados | Consultores | Litigios Estratégicos

Cada cierto tiempo se escucha una afirmación ligera: que el Derecho Romano pertenece al museo de la historia jurídica y que su enseñanza debería reducirse para dar paso a materias “más modernas”. Bajo esa mirada, estudiar Roma sería una especie de lujo académico, interesante para la cultura general, pero poco útil para el abogado del siglo XXI.

La afirmación puede sonar práctica, pero es profundamente equivocada.

El Derecho Romano no es una pieza arqueológica. Es una de las bases intelectuales sobre las que se construyó buena parte del Derecho Civil contemporáneo. Muchos conceptos que hoy utilizamos en juzgados, contratos, notarías, registros públicos y arbitrajes tienen raíces romanas, aunque pocas veces se diga expresamente.

La pregunta, entonces, es polémica pero necesaria:

¿Estamos formando abogados modernos o simples operadores de normas que desconocen el origen de las instituciones que aplican? Roma no nos dejó solo historia; nos dejó método

El mayor aporte del Derecho Romano no fue únicamente un conjunto de reglas. Fue una forma de razonar jurídicamente.

Los juristas romanos desarrollaron categorías que permitieron ordenar la vida social con precisión: persona, cosa, acción, posesión, propiedad, obligación, contrato, sucesión, responsabilidad. No eran conceptos abstractos para decorar manuales universitarios. Eran herramientas prácticas para resolver conflictos concretos.

Esa es una lección que hoy parece olvidarse.

En tiempos de inflación normativa, donde cada problema pretende resolverse con una nueva ley, el Derecho Romano recuerda que el buen Derecho no depende de producir más normas, sino de pensar mejor los conflictos.

La propiedad: una institución siempre discutida

Uno de los grandes legados romanos fue la idea de propiedad como poder jurídico sobre una cosa, pero también como institución sometida a límites.

Hoy, cuando se debate sobre expropiaciones, posesiones informales, invasiones, saneamiento físico legal, propiedad comunal, vivienda y seguridad jurídica, el viejo debate romano vuelve a aparecer bajo nuevas formas.

La propiedad no puede ser absoluta hasta desconocer el interés social, pero tampoco puede ser debilitada hasta vaciarla de contenido.



Sección Jurídica Internacional FLA



Ese equilibrio sigue siendo uno de los grandes desafíos del Perú.

Un país que no protege adecuadamente la propiedad desalienta la inversión, debilita el crédito y multiplica los conflictos. Pero un país que ignora la realidad social de millones de personas sin título formal también produce exclusión e inseguridad.

Allí está la vigencia del Derecho Romano: no en repetir fórmulas antiguas, sino en comprender que detrás de cada institución jurídica existe una tensión entre libertad, orden y justicia.

Contratos y buena fe: la lección que incomoda

El Derecho Romano también nos heredó una idea fundamental: los contratos obligan, pero deben interpretarse conforme a la buena fe. Ese principio, tan citado y tan poco practicado, debería ocupar un lugar central en la vida jurídica actual.

En el Perú abundan los contratos extensos, las cláusulas defensivas, las penalidades severas y los litigios interminables. Sin embargo, muchas veces falta lo esencial: cumplimiento leal de la palabra empeñada.

La buena fe no es ingenuidad. Es una exigencia jurídica de conducta honesta, coherente y razonable.

Quizá por eso incomoda tanto.

Porque obliga a mirar más allá del texto y preguntarse si las partes actuaron con lealtad o si utilizaron la forma legal para encubrir un abuso.

El proceso: de la acción romana al litigio moderno

Los romanos entendieron que no basta tener un derecho si no existe una vía eficaz para reclamarlo.

De allí la importancia de las acciones.

Hoy, esa idea conserva plena actualidad. Una persona puede tener razón, documentos y derechos reconocidos, pero si el proceso judicial demora años, la justicia pierde eficacia.

La enseñanza romana es clara: el Derecho necesita procedimientos que hagan posible su realización. Un sistema judicial lento convierte el derecho sustantivo en una promesa incumplida.

¿Por qué el Derecho Romano resulta polémico hoy?

Porque nos obliga a reconocer una verdad incómoda: muchas reformas jurídicas fracasan no por falta de leyes, sino por falta de comprensión de las instituciones. Se legisla sobre propiedad sin entender posesión.

Se modifica el régimen contractual sin comprender la lógica de las obligaciones.

Se habla de responsabilidad civil sin distinguir adecuadamente daño, culpa, causalidad y reparación.

Se invoca la justicia sin construir procedimientos eficaces.

El resultado es un Derecho cada vez más abundante, pero no necesariamente más justo.

Cinco razones para mantener vivo el Derecho Romano

El Derecho Romano sigue siendo indispensable por cinco razones:

Primero, porque enseña a pensar jurídicamente antes que a memorizar artículos.

Segundo, porque permite comprender el origen de instituciones civiles que aún utilizamos.

Tercero, porque ayuda a interpretar el Derecho con mayor profundidad histórica y técnica.

Cuarto, porque ofrece criterios de equilibrio entre propiedad, contrato, responsabilidad y justicia.

Quinto, porque recuerda que el Derecho no nace de la improvisación, sino de una tradición razonada.

Reflexión Final

El Derecho Romano no debe enseñarse como una colección de fechas, latinismos y fórmulas antiguas. Debe enseñarse como una escuela de razonamiento jurídico. Su valor no está en mirar con nostalgia el pasado, sino en entender mejor el presente.

Desde ARRUNATEGUI PARTNERS – Abogados | Consultores | Litigios Estratégicos, consideramos que retirar importancia al Derecho Romano en la formación jurídica sería empobrecer la cultura del abogado. Un profesional puede conocer la ley vigente, pero si desconoce las raíces de las instituciones que aplica, corre el riesgo de convertirse en un técnico del expediente y no en un verdadero jurista.

La modernidad jurídica no consiste en romper con la tradición, sino en saber actualizarla. Roma sigue hablando. El problema es que muchos abogados han dejado de escucharla.

Homenaje a “Los Chacales”

El Comando Institucional de la Policía Nacional del Perú rindió homenaje a la Promoción de Oficiales EX PIP “Túpac Amaru - Los Chacales”, al conmemorarse los 60 años de su ingreso a la institución policial.



La ceremonia fue presidida por el General PNP Carlos Augusto Vargas Mormontoy, director de Criminalística, junto al Gral. PNP Julio Becerra Gamarra, director de Investigaciones de la Inspectoría General; Gral. PNP Olger Benavides Ponce de León, director de Inspecciones IG; y el

Gral. PNP Leiby Huamán Daza, director Antidrogas.

Este significativo acto reconoció la trayectoria, entrega y legado de quienes dedicaron su vida al servicio de la investigación policial y la seguridad del país, dejando una huella imborrable en la historia de la institución.

Los actos oficiales de las bodas de diamante incluyeron la entrega de una ofrenda floral en honor a los mártires de la promoción.

Esta valiosa promoción de Oficiales fue Integrada por detectives de la “vieja escuela” que ingresaron hace seis décadas al Centro de Instrucción con la misión de esclarecer delitos basándose en la verdad.

Sus miembros enfrentaron el crimen organizado y al terrorismo durante las etapas más complejas de la historia del Perú.

Entre sus filas resalta el General Juan Gonzáles Sandoval, reconocido por su desempeño contra el MRTA y su gran labor en favor de la pacificación en el Cusco en 1988.





“Los Tiempos de Dios son Perfectos” Foto del recuerdo: el General PNP (r) Juan Luis Gonzales Sandoval junto a Keiko Fujimori, hoy presidenta electa del Perú, y al lado del pastor Rodolfo Gonzáles.

El General Gonzales Sandoval es miembro de la Asociación Cristiana Evangélica (ACEPM) y fue candidato al Congreso de la República con el N° 26 por Lima en el año 2011, una participación respaldada por el expresidente Alberto Fujimori. Con una trayectoria ampliamente reconocida a nivel nacional, ha sido condecorado en múltiples oportunidades por diversos presidentes de la República y por el propio Congreso como Héroe de la Pacificación.



El Comandante General de la FAP, General del Aire Mario Contreras León Carty, presidió la Asamblea General del 7 de julio en homenaje a la institución y al Héroe Nacional, Capitán FAP José Quiñones. Lo acompañan, el Mayor General FAP Orlando Tafur del Águila y los Coroneles FAP Jorge Chávez y Abel Vásquez; al lado izquierdo se encuentran los Coroneles FAP Juan Montoya y Ricardo Gutiérrez.

Resiliencia y Solidez Macroeconómica



Por: Gustavo Montoya Chávez*

Las reservas del Banco Central de Reservas del Perú superan los US\$ 100,000 millones

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Perú, gestionadas por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), alcanzaron una cifra histórica de US\$ 100,835 millones al 14 de mayo de este año. Este hito consolida a la economía peruana como una de las más sólidas y con mayor liquidez de América Latina, equivalente a más del 30% de su Producto Bruto Interno (PBI).

De acuerdo con los reportes financieros del emisor, la estructura de las RIN se distribuye de manera diversificada para garantizar seguridad, liquidez y rentabilidad:

- 73% en valores internacionales: Invertidos principalmente en bonos soberanos de alta calidad, como los del Tesoro de los Estados Unidos.

- 21% en depósitos bancarios: Custodiados en instituciones fi-

nancieras de primer nivel en el exterior para disposición inmediata.

- 6% en oro físico: Mantenido como un activo de refugio tradicional frente a la inflación y la devaluación de divisas global.

Utilidad e impacto en la economía nacional

Este nivel histórico de reservas funciona como un blindaje macroeconómico ante situaciones adversas y ofrece tres beneficios críticos para el país:

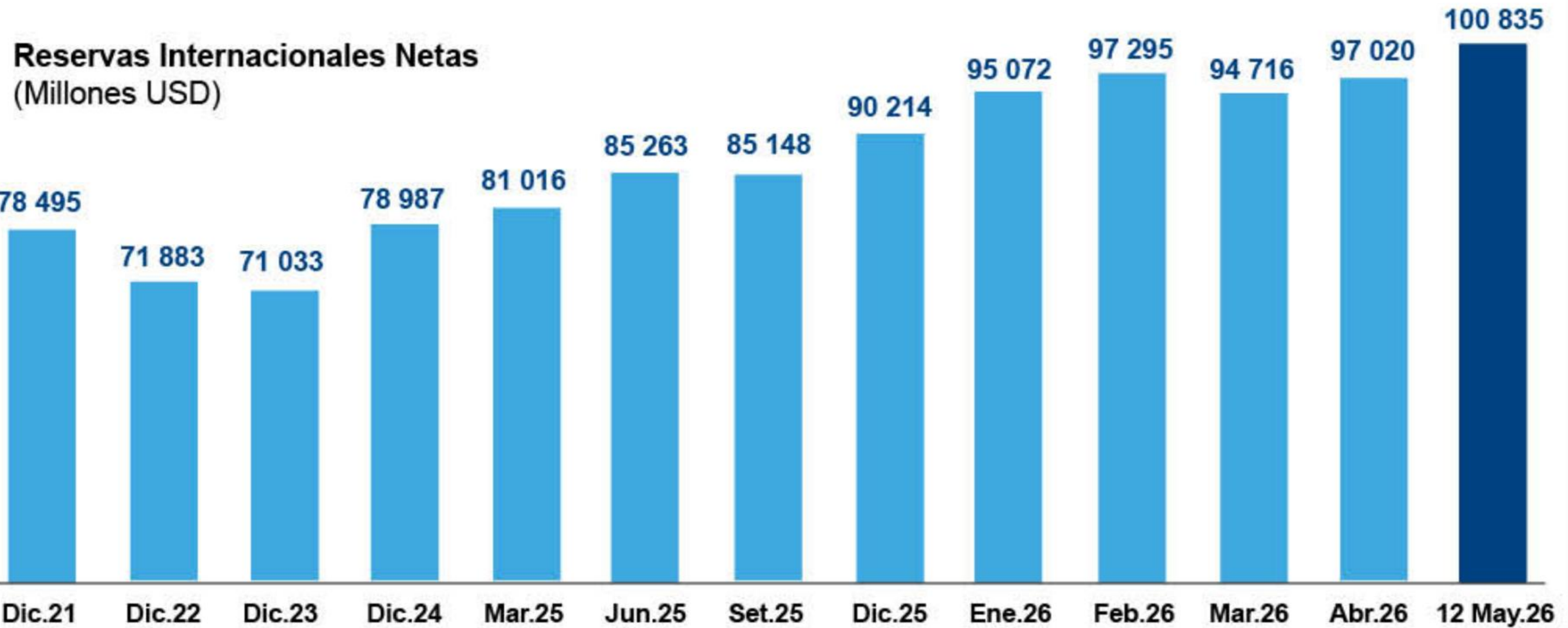
Estabilidad cambiaria y financiera: Otorga al BCRP una alta capacidad de liquidez para mitigar la volatilidad extrema en el tipo de cambio. El emisor explica que las RIN garantizan la disponibilidad de divisas para enfrentar situaciones extraordinarias y shocks externos, tales como un retiro significativo de depósitos en moneda extranjera o una fuga abrupta de capitales del sistema financiero.

Reducción del Riesgo País:

Una sólida posición de divisas mejora las calificaciones crediticias del Perú y reduce el riesgo país. Esto abarata los costos de financiamiento internacional, permitiendo que tanto el Estado como las empresas peruanas accedan a créditos en el extranjero en mejores condiciones de tasa y plazo.

RESERVAS INTERNACIONALES

Las reservas internacionales están constituidas por inversiones diversificadas en activos internacionales líquidos y contribuyen a la estabilidad económica y financiera del país. Al 12 de mayo de 2026, las Reservas Internacionales Netas totalizaron USD 100 835 millones y su nivel actual es equivalente a 30 por ciento del PBI.



La Posición de Cambio al 12 de mayo de 2026 alcanzó el valor de USD 66 845 millones, mayor en USD 5 344 millones al registrado a fines del año 2025.

Resumen Informativo Semanal del BCR: 14 de mayo de 2026

Atracción de inversión extranjera:

La holgada relación entre las RIN y el PBI proyecta predictibilidad en el manejo macroeconómico. En un contexto global de mercados volátiles, barreras comerciales cambiantes y fluctuación en el precio de los metales, este escudo económico incentiva a las corporaciones globales a mantener y expandir sus inversiones en el territorio nacional.

Las recientes alzas de los precios de los commodities por la guerra del Medio Oriente incremento el valor de las exportaciones peruanas y el ingreso de dólares al país. Esto hace que parte de esos flujos de divisas sean adquiridos por el BCR y así fortalecer las reservas internacionales.

Hay que recordar que a comienzo de los años 2000 las reservas inter-



nacionales apenas estaban a los \$8.555 millones.

Uno de los ratios más altos en la región

Así, por ejemplo, cuando las RIN del Perú estaban US\$ 98.500 mi-

llones el 18 de marzo de este año, representaban el 28,5% del PBI, un ratio superior al de Brasil (16,5%), Colombia (15,1%), Chile (14,1%), México (14,1%), de acuerdo a las estadísticas del ente emisor en su reciente Reporte de Inflación.

* Doctorado en humanidades/ Magister en Gestion Pública / Licenciado en Economía con un Diplomado en Comunicación Política en ESAN.

El País que Reconstruye Más de lo que Previene

El Perú parece condenado a repetir una historia que conoce demasiado bien. Cada cierto tiempo, las lluvias intensas, los huaicos y las inundaciones vuelven a poner en evidencia las fragilidades de un país que, pese a acumular décadas de experiencia frente a desastres naturales, continúa respondiendo más a la emergencia que a la prevención. Lo preocupante es que no se trata de un problema de desconocimiento. Los riesgos están identificados, los informes técnicos existen y las advertencias son permanentes. Lo que falta es convertir esa información en decisiones oportunas.



Por: Mercedes Fernández



La amenaza que vuelve

La reciente elección presidencial coincide con un escenario de creciente preocupación climática. Mientras la atención pública se concentra en la inseguridad, economía y estabilidad política, especialistas advierten sobre la

posible llegada de un fenómeno de El Niño de gran intensidad. En los últimos años se popularizó el término “Godzilla” para describir eventos excepcionalmente fuertes, como el registrado entre 2015 y 2016. Aunque no es una denominación científica, refleja

la magnitud de fenómenos capaces de afectar gravemente la economía, la infraestructura y la vida de millones de personas. A diferencia de un Niño moderado, un evento extremo puede generar pérdidas humanas, destrucción de infraestructura crítica y daños económicos de enorme escala.

Los peruanos no necesitan recurrir a hipótesis para entender sus consecuencias. El Niño Costero de 2017 dejó 162 fallecidos, más de 286 mil damnificados y alrededor de 1.5 millones de afectados, según cifras oficiales. Las pérdidas económicas superaron los US\$ 3 mil millones y los daños alcanzaron carreteras, puentes, sistemas de drenaje, colegios, establecimientos de salud y miles de viviendas. Más allá de la fuerza del fenómeno, la emergencia puso en evidencia las brechas acumuladas en infraestructura, gestión del riesgo y planificación territorial. La pregunta relevante no es cuánto daño produjo aquel desastre, sino cuánto de ese impacto pudo evitarse con inversiones preventivas oportunas y sostenidas.

La prevención postergada

La experiencia demuestra que el Estado peruano despliega su mayor capacidad de respuesta cuando la tragedia ya se ha producido. Es entonces cuando aparecen transferencias extraordinarias, créditos suplementarios, procedimientos excepcionales y anuncios de millonarias inversiones para la reconstrucción. En contraste, las acciones destinadas a prevenir riesgos avanzan con menor urgencia, recursos limitados y escasa prioridad política. Esta lógica constituye uno de los principales desafíos para el próximo gobierno, pues en un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático la gestión del riesgo debería ocupar un lugar central en la agenda pública. Sin embargo, las inversiones destinadas a reducir vulnerabilidades siguen siendo desplazadas por demandas coyunturales, pese a que la evidencia demuestra que prevenir siempre resulta menos costoso que reconstruir.

Las señales de alerta son evidentes. La Autoridad Nacional de Infraestructura ANIN, informó recientemente que solo cinco de los nueve proyectos prioritarios previstos para fortalecer la protección frente a inundaciones recibieron financiamiento. El recorte redujo los recursos solicitados de 830 millones a poco más de 200 millones de soles, dejando fuera obras vinculadas a defensas ribereñas y sistemas de drenaje en zonas altamente vulnerables del norte del país. En regiones como Lambayeque persisten importantes retrasos en intervenciones consideradas estratégicas para reducir riesgos futuros.

Las prioridades equivocadas

El problema no radica únicamente en la disponibilidad de recursos, sino en una cuestionable escala de prioridades. Resulta difícil comprender por qué un país que conoce las consecuencias de los fenómenos climáticos extremos

reduce inversiones precisamente en las obras destinadas a mitigar sus impactos, más aún cuando especialistas advierten que el calentamiento anómalo del mar frente a la costa norte podría intensificarse en los próximos meses. En esa línea, el economista Milton Von Hesse sostiene que el Perú no está preparado para enfrentar un evento de gran magnitud debido a una década de inestabilidad política y debilidad institucional, situación que se refleja en los bajos niveles de ejecución de los proyectos de prevención y evidencia que el problema no es solo financiero, sino también de gestión y capacidad para convertir los recursos disponibles en acciones concretas.

La situación obliga a una reflexión más profunda. Durante años, el país ha construido una cultura política basada en la administración de emergencias. Cada desastre genera conmoción, moviliza recursos y produce promesas de cambio. Sin embargo, una vez superada la crisis, las prioridades se desplazan y los compromisos se diluyen. El resultado es un ciclo repetitivo donde las mismas poblaciones vuelven a sufrir consecuencias similares frente a amenazas ampliamente conocidas.

La prevención tiene un problema político evidente. Sus resultados rara vez son visibles. Un río que no se desborda no genera titulares. Un drenaje que funciona adecuadamente no aparece en los noticieros. Una infraestructura resistente al impacto de lluvias extremas di-

ficilmente se convierte en símbolo de una gestión exitosa. En cambio, la reconstrucción posterior suele ofrecer mayor visibilidad pública y un margen más amplio para el anuncio de inversiones millonarias.

Sin embargo, la verdadera eficiencia del Estado debería medirse precisamente por aquello que logra evitar. Cada puente que permanece operativo, cada comunidad protegida y cada familia que no pierde su vivienda representan el resultado de decisiones adoptadas antes de que aparezcan las cámaras y los discursos de emergencia.

Es hora de actuar

El nuevo gobierno tiene la oportunidad de romper con esa lógica. Su liderazgo será evaluado no solamente por la capacidad de responder ante una eventual crisis climática, sino por las acciones que impulse mientras aún existe margen para prevenir daños. Ello implica fortalecer la coordinación entre niveles de gobierno, acelerar obras críticas, mejorar los sistemas de alerta temprana y garantizar que las decisiones técnicas prevalezcan sobre las consideraciones políticas de corto plazo.

El Perú conoce sus riesgos. Están identificadas las zonas críticas, las obras pendientes y las acciones que deberían ejecutarse para reducir el impacto de un fenómeno extremo. Las advertencias técnicas existen y la experiencia acumulada es irrefutable. Lo que aún está por verse es si esta vez prevalecerá la prevención sobre la improvisación. Porque cuando lleguen las lluvias, la naturaleza no evaluará planes, discursos ni promesas. Pondrá a prueba la capacidad de un Estado que, durante demasiado tiempo, ha destinado más recursos a reconstruir lo perdido que a evitar que la tragedia ocurra. Y entonces la factura de la inacción volverá a recaer, como siempre, sobre las poblaciones más vulnerables.

El Niño Costero de 2017 dejó 162 fallecidos, más de 286 mil damnificados y alrededor de 1.5 millones de afectados, según cifras oficiales.

¿Hacia dónde se Dirigirá la relación entre el Perú y China con el nuevo Gobierno?



Con el 100% de las actas procesadas, Keiko Fujimori obtuvo la victoria por un margen inferior a cincuenta mil votos, iniciando un nuevo ciclo político en el Perú. Cada cambio de gobierno suele despertar expectativas sobre posibles ajustes en la política exterior y económica. Y siendo China el principal socio comercial del país, la manera en que la nueva administración gestione la relación bilateral será, sin duda, un tema de interés tanto para los peruanos como para la comunidad internacional.

Con frecuencia, el debate sobre la política exterior peruana se reduce a una pregunta simplista: ¿acercarse más a China o a Estados Unidos? Sin embargo, un gobierno maduro no define su política exterior desde la ideología, sino desde el interés nacional. La verdadera discusión no consiste en decidir quién es más importante, sino en determinar qué tipo de relaciones internacionales benefician más al desarrollo del Perú.

Naturalmente, el nuevo gobierno tiene todo el derecho de revisar los mecanismos de cooperación existentes. Si aún existen aspectos



por mejorar en materia de supervisión de la inversión extranjera, protección ambiental, derechos laborales, diálogo con las comunidades o transparencia de los proyectos, corresponde fortalecer las instituciones y hacer cumplir la ley. No importa si la inversión proviene de China, Estados Unidos, Europa o cualquier otro país: todos deben respetar la legislación peruana, contribuir al desarrollo nacional y generar empleo, inversión y bienestar para la población.

Sin embargo, elevar los estándares de la cooperación no significa cambiar su rumbo. Tras años de desarrollo, China se ha convertido en el principal destino de las exportaciones peruanas y en un inversionista clave en sectores como minería, energía, electricidad y puertos. Miles de millones de dólares en cobre, arándanos, uvas, paltas, harina de pescado y otros productos llegan cada año al mercado chino, sosteniendo la actividad de numerosas empresas y los ingresos de miles de familias peruanas. Esta realidad no responde a una afinidad ideológica, sino a una relación económica construida por la dinámica del mercado.

En los últimos años, la entrada en operación del Puerto de Chancay ha mejorado significativamente la conexión logística entre el Perú y



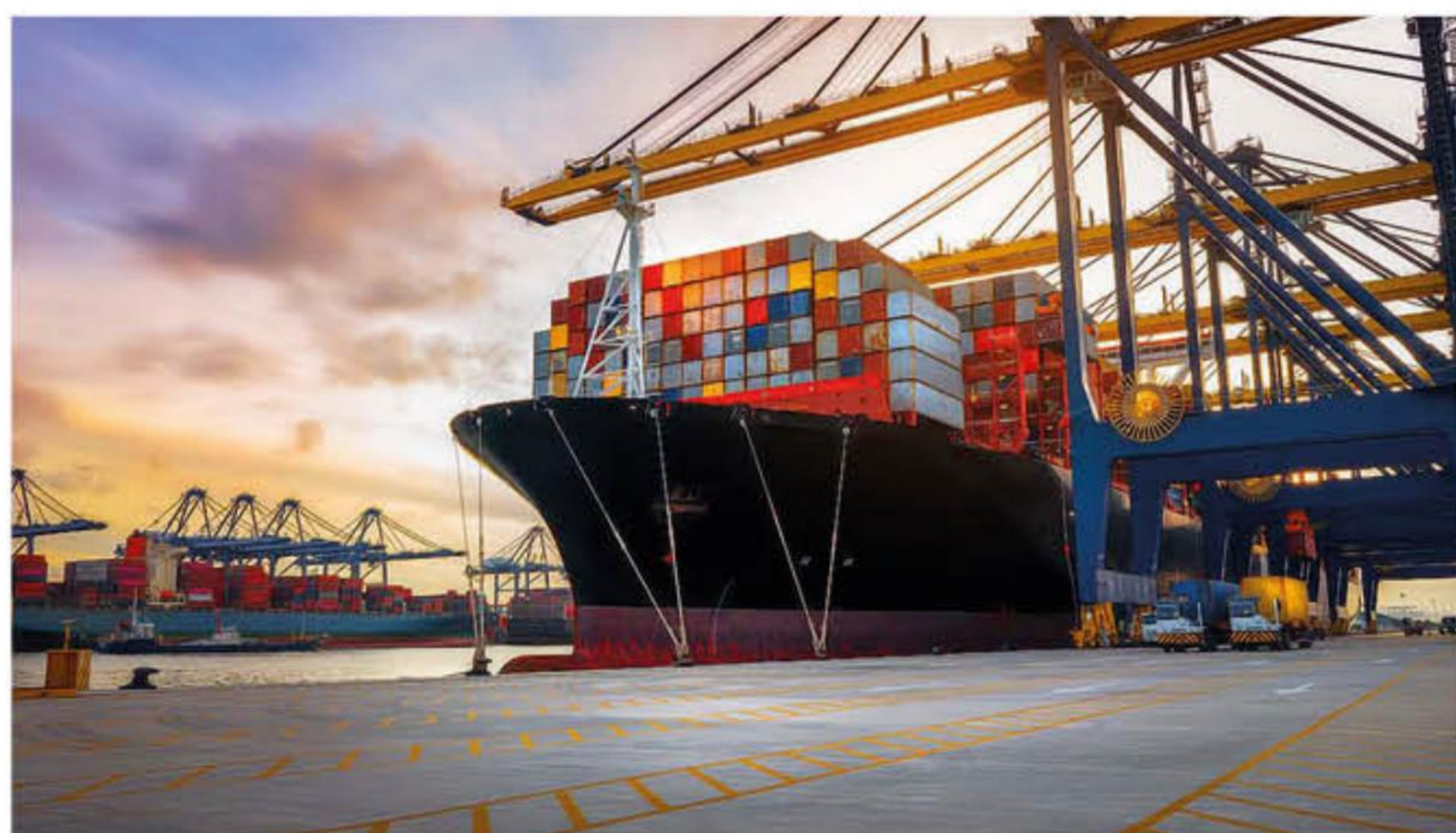
Asia. Como consecuencia, la cooperación entre ambos países ha comenzado a trascender el comercio tradicional para extenderse a la logística, la inversión industrial y la integración de cadenas de suministro. Hoy, la relación entre el Perú y China ya no representa únicamente un vínculo comercial, sino un componente importante del desarrollo económico nacional.

Por ello, el nuevo gobierno puede introducir ajustes en sus políticas, pero esos cambios deberían orientarse a lograr una cooperación más transparente, más eficiente y beneficiosa para el Perú, y no a generar incertidumbre innecesaria. Si la relación bilateral con China se deteriorara de manera significativa, el primer afectado no

sería China, sino el propio Perú. Las exportaciones podrían verse perjudicadas, la confianza de los inversionistas disminuiría y se perderían oportunidades de empleo. Al final, quienes asumirían el costo serían las familias peruanas. Además, si cada cambio de gobierno implicara un giro drástico en la política exterior, también se debilitaría la confianza internacional en la estabilidad institucional del país, uno de los factores más valorados por los inversionistas.

Al mismo tiempo, fortalecer la relación con China no significa descuidar los vínculos con Estados Unidos, Europa, Japón u otros socios internacionales. Para el Perú, una política exterior exitosa no consiste en alinearse con una potencia o con otra, sino en mantener relaciones constructivas con todos aquellos países que contribuyan al desarrollo nacional, siempre sobre la base de la defensa del interés del Perú.

Los gobiernos cambian y las políticas pueden ajustarse, pero el interés nacional debe permanecer inalterable. El futuro de la relación entre el Perú y China no debería depender de la ideología ni de presiones externas, sino de un principio mucho más simple y fundamental: hacer aquello que beneficie más al desarrollo del Perú y al futuro de los peruanos.



Medio Oriente

Una Guerra Prolongada, una Paz incierta y un Nuevo Orden Geopolítico

“Las guerras del siglo XXI ya no se libran únicamente por territorios. También se disputan el control de rutas comerciales, recursos estratégicos, tecnología, influencia política y seguridad global.”

Por: Equipo Multidisciplinario de la Revista JustoMedio

El conflicto en Medio Oriente ha dejado de ser un enfrentamiento regional para convertirse en uno de los principales factores de incertidumbre de la economía y la política internacional. La guerra entre Israel e Irán, la persistencia del conflicto en Gaza, la participación de grupos armados respaldados por distintos actores regionales y la intervención diplomática y militar de las grandes potencias han configurado un escenario complejo cuyas conse-

cuencias trascienden las fronteras de la región.

Hoy, la estabilidad del Medio Oriente influye directamente en los mercados energéticos, las cadenas globales de suministro, el comercio internacional y las decisiones estratégicas de países de todos los continentes.

Una región marcada por conflictos históricos

Las tensiones entre Israel e Irán no surgieron recientemente. Du-

rante décadas ambos países han mantenido profundas diferencias políticas, ideológicas y estratégicas. Mientras Israel considera que el programa nuclear iraní representa una amenaza para su seguridad, Irán cuestiona la política exterior israelí y respalda a diversos grupos armados presentes en la región.

El conflicto alcanzó una nueva dimensión tras los acontecimientos ocurridos en Gaza y el incremento de las operaciones militares di-

rectas e indirectas entre ambos países. Aunque en determinados momentos se han producido altos al fuego parciales y esfuerzos diplomáticos, la posibilidad de una escalada regional continúa siendo motivo de preocupación para la comunidad internacional.

El impacto económico de la guerra

Los efectos del conflicto trascienden el ámbito militar.

Medio Oriente concentra una parte significativa de la producción mundial de petróleo y gas natural. Cualquier incremento de las tensiones genera incertidumbre en los mercados internacionales, afectando los precios de la energía, los costos del transporte marítimo y las cadenas globales de abastecimiento.

El estrecho de Ormuz y otras rutas marítimas estratégicas continúan siendo puntos de especial atención para el comercio internacional. Una eventual interrupción del tránsito comercial tendría repercusiones sobre la inflación, los costos logísticos y el crecimiento económico de numerosos países.

Aunque el Perú no participa directamente en este conflicto, una prolongada inestabilidad internacional puede traducirse en mayores costos de combustibles, incremento del precio de algunos alimentos importados y presión sobre diversos sectores productivos.

La diplomacia frente a un escenario complejo

La comunidad internacional enfrenta uno de sus mayores desafíos diplomáticos de los últimos años.

Las Naciones Unidas, junto con diversos países y organismos multilaterales, han promovido iniciativas orientadas a reducir las hostilidades, facilitar ayuda humanitaria y evitar una escalada regional de mayores proporciones. Sin embargo, alcanzar una paz

duradera resulta particularmente complejo debido a la diversidad de actores involucrados, las diferencias históricas y los intereses geopolíticos que confluyen en la región.

La experiencia demuestra que los conflictos prolongados difícilmente encuentran soluciones exclusivamente militares. La diplomacia, el diálogo y el respeto al derecho internacional continúan siendo los instrumentos más eficaces para construir escenarios de estabilidad.

El nuevo equilibrio internacional

La guerra en Medio Oriente también refleja un proceso más amplio: la transformación del orden internacional.

Las relaciones entre las grandes potencias atraviesan una etapa de creciente competencia estratégica. Estados Unidos busca mantener su liderazgo global, mientras China amplía su influencia económica y Rusia continúa desempeñando un papel relevante en distintos escenarios geopolíticos.

El papel de América Latina

Aunque América Latina se encuentra geográficamente alejada del

conflicto, no permanece ajena a sus consecuencias.

La región enfrenta el desafío de preservar su estabilidad económica frente a la volatilidad de los mercados internacionales y, al mismo tiempo, fortalecer una política exterior basada en el respeto al derecho internacional, la solución pacífica de controversias y la cooperación entre los Estados.

Para el Perú, la prioridad debe seguir siendo consolidar una política exterior pragmática, orientada a diversificar mercados, atraer inversión y fortalecer su presencia en los principales espacios multilaterales.

Más allá de la guerra

La historia demuestra que ningún conflicto produce vencedores absolutos.

Las guerras dejan profundas consecuencias humanas, económicas y sociales que pueden prolongarse durante generaciones. Por ello, la reconstrucción de la confianza entre los Estados, la cooperación internacional y el fortalecimiento de los mecanismos multilaterales continúan siendo elementos esenciales para preservar la paz.

Reflexión Final

El conflicto en Medio Oriente constituye un recordatorio de la fragilidad del equilibrio internacional. La paz no puede darse por sentada; requiere diálogo permanente, instituciones sólidas y compromiso con el derecho internacional.

Para el Perú, este escenario representa una oportunidad para reafirmar una política exterior basada en la neutralidad activa, el multilateralismo, la cooperación y la búsqueda de soluciones pacíficas. Al mismo tiempo, invita a fortalecer la resiliencia económica frente a un entorno internacional cada vez más incierto.

Desde la Revista Justo Medio, consideramos que los desafíos globales exigen respuestas igualmente globales. La paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible solo serán posibles si la comunidad internacional privilegia el diálogo sobre la confrontación, la cooperación sobre la rivalidad y el interés común sobre las diferencias geopolíticas. En un mundo interconectado, la seguridad de una región termina siendo, en mayor o menor medida, la seguridad de todos.

Estados Unidos, China y Rusia:

La nueva Competencia por el Liderazgo Mundial

“El siglo XXI ya no está definido por un solo centro de poder. La competencia entre las grandes potencias configura un nuevo orden internacional cuyos efectos alcanzan la economía, la tecnología, la seguridad y la política global.”

Por: Equipo Multidisciplinario de la Revista JustoMedio



El escenario internacional atraviesa una de las transformaciones más profundas desde el final de la Guerra Fría. La hegemonía indiscutible que durante décadas ejerció Estados Unidos ha dado paso a un sistema internacional

cada vez más multipolar, donde China consolida su influencia económica y tecnológica, mientras Rusia busca preservar su peso geopolítico y estratégico.

Esta competencia no responde únicamente a diferencias ideo-

lógicas o militares. Se desarrolla también en los campos del comercio, la innovación tecnológica, la inteligencia artificial, la energía, la ciberseguridad y el control de recursos estratégicos. En un mundo profundamente interconectado, las decisiones de estas potencias repercuten directamente en el crecimiento económico, la estabilidad financiera y las relaciones internacionales de países como el Perú.

Estados Unidos: liderazgo en transformación

Estados Unidos continúa siendo la principal potencia militar del mundo y una de las economías más innovadoras. Su liderazgo en sectores como la inteligencia artificial, la industria aeroespacial, la biotecnología y los servicios financieros mantiene una posición privilegiada en la economía global.

No obstante, enfrenta importantes desafíos internos, como la polarización política, el incremento de la deuda pública, las tensiones migratorias y la necesidad de preservar su competitividad frente al avance tecnológico de otras economías.

China: crecimiento económico e influencia global

En apenas cuatro décadas, China pasó de ser una economía en desarrollo a convertirse en una de las principales potencias económicas del planeta. Su liderazgo manufacturero, el crecimiento de su mercado interno y sus inversiones

en infraestructura alrededor del mundo le han permitido ampliar significativamente su presencia internacional.

A través de proyectos de conectividad, financiamiento e inversión, China ha fortalecido sus vínculos con Asia, África y América Latina, consolidándose como uno de los principales socios comerciales de numerosos países.

Rusia: influencia estratégica y poder energético

Aunque su economía es menor en comparación con la de Estados Unidos y China, Rusia conserva una notable capacidad de influencia internacional sustentada en su poder militar, sus recursos energéticos y su papel en diversos escenarios geopolíticos.

Su participación en conflictos regionales y su capacidad para influir en los mercados internacionales de energía continúan otorgándole un lugar relevante dentro del sistema internacional.

Una competencia que va más allá del ámbito militar

La rivalidad entre estas tres potencias se manifiesta principalmente en cinco áreas estratégicas:

Tecnología. La inteligencia artificial, los semiconductores, las telecomunicaciones y la computación cuántica se han convertido en sectores decisivos para el liderazgo económico y la seguridad nacional.

Comercio internacional. Las disputas comerciales, la relocalización de cadenas de suministro y la búsqueda de nuevos mercados modifican continuamente la dinámica de la economía mundial.

Energía. La transición hacia fuentes renovables convive con la importancia estratégica del petróleo, el gas natural y los minerales críticos necesarios para las nuevas tecnologías.

Ciberseguridad. La protección de la infraestructura digital y la seguridad de la información constituyen hoy un componente esencial de la defensa nacional.

Influencia geopolítica. La competencia por fortalecer alianzas políticas, económicas y militares continuará definiendo buena parte de la agenda internacional durante los próximos años.

¿Qué significa este escenario para el Perú?

Aunque el Perú se encuentra geográficamente alejado de las principales zonas de tensión, forma parte de una economía global donde las decisiones de las grandes potencias tienen efectos directos sobre el comercio, la inversión y los mercados financieros.

Estados Unidos continúa siendo un socio estratégico en materia de inversión, cooperación y comercio. China se ha consolidado como uno de los principales destinos de las exportaciones peruanas, especialmente de minerales y productos agroindustriales. Rusia, por su parte, mantiene relaciones diplomáticas y comerciales que

pueden ampliarse en sectores específicos.

En este contexto, la política exterior peruana debe sustentarse en principios de pragmatismo, diversificación de mercados, respeto al derecho internacional y fortalecimiento de las relaciones con todos sus socios estratégicos, evitando depender excesivamente de un solo actor internacional.

El desafío del nuevo orden mundial

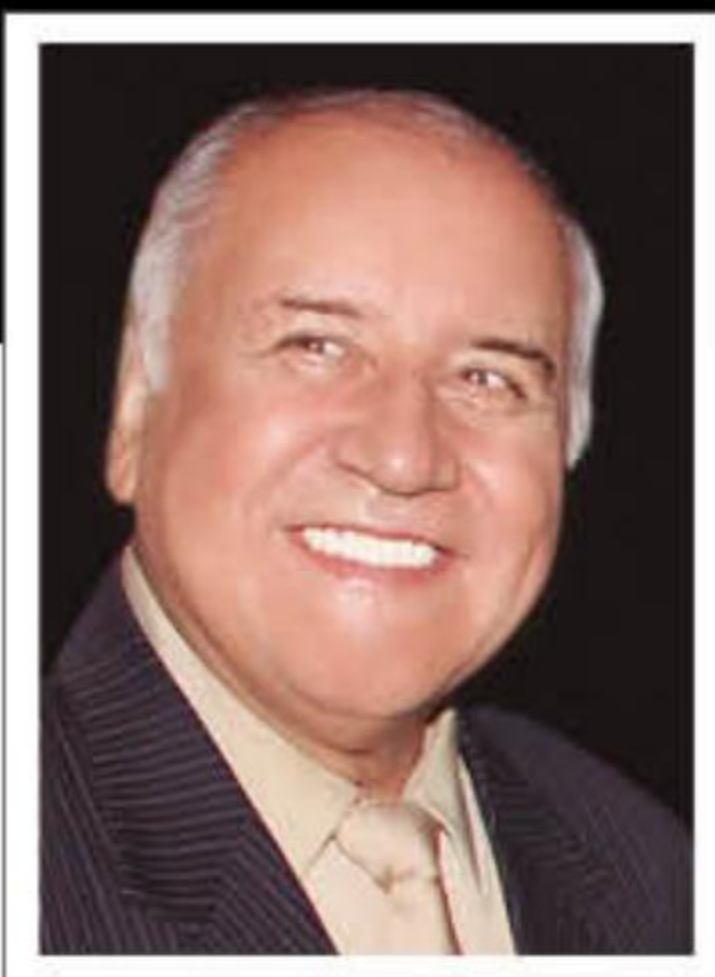
La competencia entre Estados Unidos, China y Rusia no necesariamente debe interpretarse como un escenario de confrontación permanente. También representa una oportunidad para que economías emergentes fortalezcan su integración internacional, diversifiquen sus alianzas y aprovechen las nuevas dinámicas del comercio global.

Para lograrlo, el Perú necesita consolidar su estabilidad institucional, mejorar su competitividad, impulsar la innovación y fortalecer su inserción en los mercados internacionales mediante acuerdos comerciales, infraestructura logística y una política exterior de largo plazo.

Reflexión Final

El mundo avanza hacia un orden internacional más complejo, donde el poder se distribuye entre múltiples actores y la competencia trasciende el ámbito militar para extenderse a la economía, la tecnología y la innovación. En este escenario, los países que mejor aprovechen las oportunidades serán aquellos que fortalezcan sus instituciones, inviertan en conocimiento y mantengan una política exterior basada en el equilibrio, la cooperación y la defensa de sus intereses nacionales.

Desde la Revista Justo Medio, consideramos que el Perú debe observar esta transformación con una visión estratégica y de largo plazo. Más que alineamientos ideológicos, el país necesita una diplomacia moderna que priorice la atracción de inversiones, la diversificación de mercados, la innovación tecnológica y la integración internacional. En un mundo cada vez más competitivo, la mejor política exterior será aquella que contribuya al desarrollo económico, la estabilidad democrática y el bienestar de todos los peruanos.



SECCIÓN DIPLOMÁTICA

Director: ORLANDO TAFUR DEL ÁGUILA
tafurorlando@hotmail.com

Estados Unidos

250° Aniversario

La Embajada de Estados Unidos en el Perú conmemoró el 250.º aniversario de la independencia estadounidense con una concurrida recepción que reunió a altas autoridades, miembros del cuerpo diplomático, empresarios e invitados especiales. Esta histórica celebración coincidió con el bicentenario de las relaciones diplomáticas bilaterales, un hito que resalta los profundos lazos de cooperación entre ambas naciones.

Durante la ceremonia, el embajador estadounidense en el Perú, Bernie Navarro, elogió el continuo fortalecimiento del vínculo estratégico y expresó: “Muy contento de hacer esta fiesta tan grande en el Perú. No solo son los 250 años de Independencia de los Estados Unidos, sino también los 200 años de relación con el Perú”.



Luis Arroyo Sánchez, presidente del Consejo de ministros, Bernie Navarro, embajador de los Estados Unidos y el canciller Carlos Pareja Ríos.



Gustavo Nakamura, Rochi del Castillo, Diana Castillo y Andrés de Leo.

Canada Day



Chantal Chastenay, Jean-Dominique Ieraci, embajador de Canadá y Aleisha Arnusch.

El embajador de Canadá en el Perú, Jean-Dominique Ieraci, presidió una recepción oficial por el Canada Day, evento que reafirmó la sólida relación bilateral. Organizada en conjunto por la Embajada de Canadá (con representación para Perú y Bolivia) y la Cámara de Comercio Canadá Perú (CCCP), la celebración reunió a autoridades, empresarios y líderes de ambos países. Durante la ceremonia, el embajador Ieraci reiteró el compromiso de su nación de seguir siendo un socio estratégico clave para el desarrollo peruano, fortaleciendo así los lazos de amistad, cooperación e inversión.



Marcelo Uribe, Christian Effio, Carla Martínez y Javier Montalván.

SECCIÓN DIPLOMÁTICA

República Árabe de Egipto



Embajador, Eric Anderson; Ahmed Hamdi Bakr Mohamed, embajador de Egipto y Mahy Arafat Rashad Abdallah.

Abdulla bin Assim Al Zeyara, embajador de Qatar, Jorge Raffo y Hassan Bin Mohammed Alansari, embajador del Reino de Arabia Saudita.



María Jesús San Sebastián y Micaela Belmont.

75° Aniversario

Con motivo de la Fiesta Nacional de Egipto, el Embajador Ahmed Bakr y su esposa ofrecieron una recepción el pasado 9 de julio en el histórico Salón de los Espejos de la Municipalidad de Lima. El evento se convirtió en un escenario clave para consolidar los lazos de fraternidad y cooperación con el Perú.

La ceremonia tuvo como Invitado de Honor al Vice-ministro de Relaciones Exteriores, Embajador Eric Anderson, altas autoridades nacionales, miembros del Cuerpo Diplomático y representantes institucionales, quienes coincidieron en el compromiso mutuo de seguir fortaleciendo la agenda bilateral de ambas naciones.

Adriana Mazzanti, Claudia y Clemente Baena Soares, embajador de Brasil y Massimiliano Mazzanti, embajador de Italia.

Italia

Día Nacional

El embajador de Italia en el Perú, Massimiliano Mazzanti, y su esposa, Adriana Maria Dantas Mazzanti, ofrecieron una recepción en su residencia oficial en Lima con motivo de la Fiesta de la República Italiana.

El evento, que conmemoró el 80.º aniversario de la proclamación republicana, reunió a autoridades locales, miembros de la comunidad italiana y representantes del cuerpo diplomático.



Bronwen Griffith, Fred Reich y Sandra Pleviani.

Javier Gonzales Olaechea, Patricia Dutari con Veronica y Eduardo Ferrero Costa.

Expo Embajadas San Isidro 2026

Con una colorida ceremonia realizada en el parque Andrés Avelino Cáceres, la Municipalidad de San Isidro inauguró la Expo Embajadas San Isidro 2026. Este encuentro internacional reunió a más de 30 delegaciones en un espacio diseñado para la integración cultural, gastronómica y turística.

El evento contó con la presencia de la alcaldesa del distrito, Nancy Vizurraga; el canciller del Perú, embajador Carlos Pareja Ríos; así como representantes del cuerpo diplomático acreditado, autoridades locales e invitados especiales. Durante el recorrido por los módulos internacionales, los asistentes destacaron la importancia de afianzar los vínculos de cooperación, amistad e intercambio cultural entre el Perú y las naciones participantes. Asimismo, cientos de visitantes disfrutaron de expresiones artísticas, muestras gastronómicas y exhibiciones tradicionales.

La alcaldesa Nancy Vizurraga resaltó que esta iniciativa, organizada por tercer año consecutivo, busca aproximar a la ciudadanía a la diversidad global. Además, subrayó su valor al promover ofertas laborales y programas de becas internacionales para los jóvenes.

La Expo Embajadas San Isidro 2026 se llevó a cabo del 10 al 12 de junio. Con este evento, el distrito ratifica su rol como comunidad internacional y consolida espacios de fraternidad global.





Gran Feria de Embajadas 2026 en San Luis

La cuarta edición de la Gran Feria de Embajadas concluyó con éxito tras reunir a representantes de más de 30 países del 29 al 31 de mayo en la Plaza de Banderas de la Videna (San Luis). Este encuentro consolidó a Lima como una ventana global de integración cultural y cooperación internacional.

Durante tres días, miles de jóvenes, profesionales y familias accedieron de forma gratuita a información sobre becas, estudios en el extranjero, intercambios académicos y validación de títulos. La inauguración contó con la presencia de Sergio Ludeña (presidente del IPD), Ricardo Pérez (alcalde de San Luis) y los embajadores de El Salvador y Panamá.

Además de la oferta educativa, los asistentes disfrutaron de talleres, presentaciones artísticas y un concurrido Pabellón Gastronómico Internacional. Con este evento, respaldado por delegaciones de América, Europa, Asia y Medio Oriente, la Municipalidad de San Luis reafirma su compromiso de seguir promoviendo la educación global y el intercambio cultural en el país.





Celebra su Segundo Aniversario en el Sector Fintech Peruano

La fintech peruana Aora Solución conmemoró su segundo aniversario institucional, con una elegante ceremonia realizada en las instalaciones de Villa Cosentino, consolidando su posicionamiento como la empresa peruana del sector fintech especializada en brindar soluciones financieras a trabajadores dependientes, jubilados y pensionistas.

La velada reunió a autoridades, representantes de instituciones públicas, clientes, colaboradores e invitados especiales, destacando la presencia del congresista Eduardo Salhuana.

Los invitados fueron testigos de una noche dedicada al reconocimiento del crecimiento alcanzado por la empresa y a la proyección de nuevos desafíos.

Pamela Navarrete, gerente general de Aora Solución, destacó el compromiso del equipo humano y la confianza de miles de clientes como pilares fundamentales para el desarrollo sostenido de la organización durante estos dos años.

El programa continuó con las intervenciones de distinguidas autoridades y representantes institucionales, entre ellos: Gastón Roger Remy (ONP); Jesús Manuel Aparicio Nizama (SUNAFIL); Maricriz Navarrete López; Giancarlo Porro Zamalloa; David Ríos Villacorta; y Óscar Orcón Hinojosa.





Testimonios y reconocimientos

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la participación de los usuarios, quienes compartieron sus experiencias con la empresa. Los clientes Aldo Cristian Pérez Soto y el señor Macalupú Ordóñez ofrecieron valiosos testimonios sobre el impacto positivo que los servicios financieros de Aora Solución han tenido en sus vidas personales y profesionales.

Como parte central de la celebración, la empresa rindió un merecido homenaje a 11 colaboradores, reconociendo su compromiso, dedicación y contribución clave al crecimiento institucional.

La jornada concluyó con una destacada presentación artística a cargo de la Orquesta Fallo Muñoz,

dando paso a una noche de confraternidad y celebración junto a colaboradores, clientes y aliados estratégicos.

Una fintech peruana en constante crecimiento

Aora Solución es una empresa peruana del sector fintech que ofrece principalmente préstamos personales dirigidos a trabajadores dependientes, jubilados y pensionistas.

Desde 2024 se encuentra inscrita en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda administrado por la SBS, mediante la Resolución SBS N.° 00562-2024.

Entre los servicios que ofrece destacan préstamos desde S/ 500

hasta montos mayores sujetos a evaluación crediticia, con plazos aproximados de 3 a 18 meses, aprobación basada en la capacidad de pago del solicitante y la posibilidad de realizar pagos anticipados sin penalidad.

Asimismo, la empresa informa que desarrolla sus operaciones cumpliendo la normativa peruana sobre protección de datos personales, prevención del lavado de activos y protección al consumidor.

Con este segundo aniversario, Aora Solución reafirma su compromiso de continuar impulsando soluciones financieras responsables, fortaleciendo la confianza de sus usuarios y contribuyendo al desarrollo del ecosistema fintech en el Perú.



Networking Empresarial de CONMIEP Fortaleció la Integración y el Liderazgo Empresarial en el Día del Padre

En el marco de las celebraciones por el Día del Padre, la Confederación Mundial de Instituciones y Empresas Privadas (CONMIEP) realizó un exitoso Networking Empresarial que reunió a empresarios, directivos y asociados en una jornada orientada al fortalecimiento de vínculos institucionales, el intercambio de experiencias y la generación de nuevas oportunidades de colaboración.





La actividad fue promovida por la directora de CONMIEP, Sindy Hidalgo Saldaña, quien destacó la importancia de reconocer el rol de los padres empresarios en el desarrollo de sus familias, empresas y comunidades.

El encuentro contó con la participación del presidente del Directorio de CONMIEP, Marco Antonio Arrunátegui y del actor y empresario Carlos Thornton, vicepresidente de la entidad gremial. Ambos compartieron reflexiones sobre los desafíos actuales del sector empresarial en un ambiente de confraternidad y optimismo.

Liderazgo empresarial y experiencias de éxito

Uno de los momentos más destacados fue la exposición “Liderazgo en Restaurantes: estilos que perduran con resultados sólidos”, a cargo del empresario Fernando Cáceres, director y cofundador de las cadenas gastronómicas Rikoton Chicken y Walpa Chicken. Cáceres compartió estrategias sobre gestión de equipos, cultura organizacional y sostenibilidad, subrayando la importancia de construir organizaciones sólidas basadas en confianza, disciplina e innovación.

Un espacio para generar oportunidades

El Networking Empresarial permitió que empresarios de diversos sectores establecieran contactos estratégicos, compartieran proyectos y exploraran posibilidades de cooperación comercial. Los asistentes coincidieron en la necesidad de continuar impulsando este tipo de actividades como herramientas clave para fortalecer el ecosistema empresarial y promover alianzas de valor.

Compromiso institucional

Los directivos de CONMIEP reafirmaron su compromiso de seguir promoviendo iniciativas que contribuyan al crecimiento empresarial y la formación de liderazgos. La institución ratificó su rol como espacio de articulación empresarial mediante actividades de networking, ruedas de negocios, convenciones y encuentros de intercambio de conocimientos.

La jornada concluyó con un mensaje que sintetizó el espíritu del evento: “Empresarios que se apoyan, negocios que crecen.”



Foro Internacional

“Lucha contra la Corrupción y el Crimen en Nuestro País”

En el marco del Foro Internacional “Lucha contra la Corrupción y el Crimen en Nuestro País”, realizado en el Auditorio José Faustino Sánchez Carrión del Congreso de la República, se reafirmó el compromiso de las autoridades, especialistas y representantes de la sociedad civil con la construcción de un Perú más seguro, transparente y con mayores oportunidades de desarrollo.

Este importante espacio de diálogo permitió unir esfuerzos entre el sector legislativo, los gobiernos locales, los medios de comunicación y la ciudadanía, con el propósito de fortalecer las estrategias de lucha contra la corrupción y la inseguridad ciudadana.

La Mesa de Honor estuvo conformada por destacadas personalidades, entre ellas el Lic. Omar Salvatierra, en representación del Dr. Marco Antonio Arrunátegui Cevallos, Director General de la Revista Justo Medio; Congresista Miguel Angel Ciccía Vásquez; William Valladares, Gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Los Olivos; periodista Marisol



Vásquez Rengifo, Directora de la Revista Realidades; y Teófilo Ugarte Dañoveitia, conferencista, motivador y coach.

Asimismo, en el marco de la conmemoración de sus 20 años de fundación, la Revista Realidades organizó la ceremonia de recono-

cimiento “Premio a la Excelencia: Hombres y Mujeres con Liderazgo Gerencial y Éxito Empresarial 2026”, una distinción otorgada a destacadas personalidades que contribuyen al desarrollo, la gobernabilidad y el progreso del país.

Entre los homenajeados se reconoció a profesionales, empresarios, autoridades locales, regionales y nacionales, parlamentarios, embajadores y líderes de diversos sectores, seleccionados por el Consejo Editorial de la revista.

La ceremonia resaltó la importancia de promover valores, fortalecer la identidad nacional y reconocer el trabajo de quienes, con compromiso y responsabilidad, contribuyen al crecimiento y bienestar del Perú.



MAURO LIONEL

Prodigio Peruano que Conquista Teatros

Con solo 12 años el joven compositor y director se consagra no solo como un talento emergente, sino como una de las figuras formidables de la música contemporánea en el Perú.

La historia musical del Perú se reescribió recientemente en el majestuoso Gran Teatro Nacional con la platea abarrotada. Mauro Lionel Malca Peñaranda, el prodigio nacional de 12 años y reciente ganador del Global Child Prodigy Award 2025, ofreció una actuación deslumbrante que superó todas las expectativas con su octavo concierto oficial, “Sólo Clásicos”.

En una velada diseñada como un profundo homenaje a la Mujer Peruana, el joven compositor y director limeño demostró una madurez artística asombrosa, consagrándose no solo como un talento emergente, sino como una

de las figuras más formidables de la música clásica contemporánea en el país.

Una Proeza de Resistencia y Memoria: Los Tres Récores de Mauro Lionel

El concierto “Sólo Clásicos” no fue un simple recital; fue un desafío atlético y cognitivo monumental que culminó con el establecimiento de tres impresionantes récords personales para el joven maestro.

La Hazaña de la Memoria Absoluta

Desafiando los límites de la dirección orquestal, Mauro Lionel dirigió más de 44 minutos de música sinfónica original de absoluta

memoria, sin una sola partitura en su atril, incluyendo su Primera Sinfonía, Sinfoslow (35m 20s).

Un Catálogo sin Precedente

Con el estreno de 17 obras inéditas durante la velada, Mauro Lionel elevó su récord personal a un total de 44 composiciones originales estrenadas en sus 8 conciertos oficiales. Un hito inaudito para un creador de su edad, confirmando su estatus como un compositor prolífico y en constante evolución.

Mauro Lionel también se ha presentado en el Salón de los Espejos del Teatro Municipal de Lima, testigo de sus hazañas a sus cortos 12 años. Suerte Maestro.

Enrique Victoria Obando, director de la Orquesta Sinfónica de Arequipa

Rumbo al Estrellato Internacional

Por: Julio Alzola Castillo

- Enrique Victoria Obando, apunta al doctorado en Dirección de Orquesta en USA.
- Admirador del Teatro Municipal de Lima, saluda y felicita a la MML por la Temporada de Ópera en Lima.
- Afirma que es una Temporada que no tiene nada que envidiar a otros países.

Oído a la música. Enrique Victoria Obando (40), natural de la Ciudad Blanca, Arequipa, desde hace 12 años es el director de la Orquesta Sinfónica de Arequipa, pero además es admirador del Teatro Municipal de Lima. Una vez dirigió en ese recinto a la Orquesta Sinfónica Nacional y ahora hacerlo muchas veces más, porque es un espacio emblemático no solo para el Perú, sino para América Latina.

Los nuevos pasos de Enrique Victoria lo llevarán en búsqueda del doctorado en Dirección de Orquesta. Es licenciado en violín (performance) en el Conservatorio de Música de Puerto Rico; maestría en viola y dirección de orquesta de la University of New Mexico (USA); y, cuenta con postgrado Artist Diploma en dirección de orquesta de la IamCathloc of America (USA).

¿Qué recuerdos del Teatro Municipal de Lima?

Gratos recuerdos que los guardo en el corazón...Es un espacio emblemático donde se han presen-

tado grandes directores, solistas, orquestas extranjeras y peruanas. Me gustaría volver a presentarme allí.

¿Ahora es recinto de la temporada de ópera?

Es una grata sorpresa ver una temporada de ópera muy amplia. Con directores extranjeros y locales. Es una temporada que no tiene nada que envidiar a otros países. El Teatro Municipal hay que cuidarlo, porque es un espacio histórico y su acústica es hermosa. Es muy importante saber cuál es el horizonte de la programación y, sobre todo, enfocada en la ópera. Creo que estamos avanzando para proyectos

grandes, tanto el Teatro Nacional como el Teatro Municipal.

¿Hay que llevar la cultura hacia el interior del país?

Se necesita crecer no solo en Lima, sino en Arequipa, Trujillo y otras ciudades. Hay lugares que no tienen orquestas, coros y elencos artísticos...hay que trabajar en ese sentido para generar trabajo a los jóvenes que estudian música.

¿Quiénes son sus referentes?

Carmen Moral (residente en Estados Unidos), David del Pino, Pablo Sabat, Fernando Valcárcel, Leopoldo La Rosa, Manuel Castro Basulto y José Santos Ormeño.

Enrique Victoria participó como director invitado del ballet "La Bella Durmiente del Bosque", producción que reunió al Ballet Nacional del Perú y a la Orquesta Sinfónica Nacional en el Gran Teatro Nacional.

Con casi medio siglo de trayectoria, Javier Castañón se ha consolidado como uno de los artistas más queridos de la música romántica en el Perú y en el extranjero. Su voz, estilo y versatilidad lo han llevado a recorrer escenarios internacionales, recibiendo múltiples reconocimientos y manteniendo siempre vivo el sentimiento en cada interpretación.

Su carrera está marcada por grandes hitos: fue nominado al Grammy Latino en dos ocasiones, primero en 2011 con el álbum *Boleros Rancheros* y luego en 2013 con *Volver, Volver*. Asimismo, su más reciente gira en Estados Unidos, de casi seis meses, lo consagró frente al público hispano, que lo premió con el Disco de Oro, el Trofeo Azteca Inka Word 2024 y el galardón de la revista *Éxito Internacional*, por su impecable desempeño artístico.

Una nueva producción y un estreno especial

Tras el éxito de su última producción *Simplemente Boleros*, que lo ha posicionado como un referente del género, Javier sorprende ahora en una nueva faceta como autor y compositor con su más reciente creación, la cumbia “La Gringa Bella”, un tema alegre y bailable que marca un giro fresco en su carrera, reafirmando su capacidad de reinventarse sin perder su esencia romántica.

El artista y su legado

Javier Castañón es un intérprete versátil que ha sabido mantenerse vigente gracias a su entrega y pasión por la música. Su propuesta abarca géneros diversos, desde los boleros y rancheras hasta el merengue y la cumbia, demostrando que su talento no tiene fronteras.

Hoy, más que nunca, Javier Castañón reafirma su compromiso con su público, entregando su arte con el mismo entusiasmo con el que comenzó hace casi 49 años.

En el mes de setiembre para ser más exactos el día 26, Javier nos deleitará nuevamente con un concierto imperdible en el Centro de Convenciones Bianca (grandes invitados), una velada musical que reunirá lo mejor de su repertorio junto a nuevas propuestas. La cita será un encuentro inolvidable con la música romántica, los boleros, los temas rancheros y, por supuesto, la esperada cumbia de estreno.

JAVIER CASTAÑÓN:

El Romanticismo hecho Música y una nueva Etapa como Cantautor



Contacto de prensa, entradas y contrataciones: 981 237 025

HOLLYWOOD en Transformación

Creatividad, Inteligencia Artificial y el Futuro de la Industria Audiovisual



POR: GIAN CARLO ARRUNÁTEGUI
VARILLAS: Director de Arte, Cine
y Espectáculos en EEUU

"El cine siempre ha sabido reinventarse. Hoy enfrenta uno de sus mayores desafíos: integrar la innovación tecnológica sin perder el valor de la creatividad humana."



La industria cinematográfica mundial atraviesa uno de los procesos de transformación más importantes desde la llegada del cine sonoro. El auge de las plataformas de streaming, la consolidación de la inteligencia artificial, los cambios en los hábitos de consumo y la necesidad de encontrar nuevos modelos de negocio están redefiniendo la forma de producir, distribuir y disfrutar el entretenimiento.

Hollywood, considerado durante más de un siglo el principal referente de la industria audiovisual, continúa liderando el mercado mundial, pero enfrenta un escenario mucho más competitivo y diverso que hace apenas una década.

Un nuevo modelo de consumo

El público ya no depende exclusivamente de las salas de cine

para acceder a una película. Las plataformas digitales han ampliado significativamente la oferta de contenidos, permitiendo que millones de personas disfruten estrenos desde sus hogares y elijan qué ver, cuándo verlo y desde qué dispositivo.



Esta transformación ha impulsado una mayor competencia entre estudios cinematográficos y plataformas de entretenimiento, obligando a invertir en producciones de mayor calidad, historias originales y tecnologías innovadoras que mejoren la experiencia del espectador.

Sin embargo, las salas de cine continúan desempeñando un papel fundamental para las grandes producciones. Las películas de acción, ciencia ficción y aventuras siguen convocando a millones de espectadores que buscan vivir una experiencia colectiva difícil de replicar en el hogar.

La inteligencia artificial llega al cine

Uno de los cambios más significativos de los últimos años es la incorporación de la inteligencia artificial en distintas etapas de la producción audiovisual.

Hoy estas herramientas permiten optimizar procesos de edición, generar efectos visuales, restaurar imágenes, mejorar el sonido, traducir contenidos e incluso colaborar en la elaboración de guiones o en la planificación de escenas.

No obstante, este avance también ha generado un intenso debate sobre la protección de los derechos de autor, el reconocimiento del trabajo creativo y la necesidad de establecer límites éticos para el uso de estas tecnologías.

La creatividad continúa siendo el principal patrimonio del cine. La tecnología debe potenciarla, no reemplazarla.

Contenidos cada vez más diversos

La industria audiovisual también refleja una creciente diversidad cultural.

Historias provenientes de Asia, América Latina, África y Europa alcanzan hoy una difusión internacional gracias a las plataformas digitales, ampliando las oportunidades para nuevos directores, actores y productores.

Esta apertura ha enriquecido la oferta cinematográfica y ha permitido que públicos de distintas regiones conozcan realidades, tradiciones y perspectivas antes poco visibles en el mercado global. El cine confirma así su capacidad para promover el diálogo intercultural y fortalecer el entendimiento entre las sociedades.

El Perú y la oportunidad de crecer

El cine peruano también experimenta un proceso de consolidación.

Durante los últimos años, diversas producciones nacionales han obtenido reconocimiento en festivales internacionales, demostrando la calidad del talento artístico y técnico existente en el país.

Sin embargo, persisten importantes desafíos relacionados con el financiamiento, la distribución, la formación especializada y el acceso a nuevas tecnologías.

Fortalecer la industria audiovisual peruana requiere una mayor articulación entre el Estado, la empresa privada, las universidades y los productores independientes.

La economía creativa representa una oportunidad para generar empleo, promover el turismo, fortalecer la identidad cultural y ampliar la presencia internacional del Perú.

El futuro de la industria

El cine del futuro combinará creatividad, tecnología e innovación.

Las producciones incorporarán cada vez más herramientas de inteligencia artificial, realidad virtual, animación avanzada y efectos digitales. Sin embargo, el éxito seguirá dependiendo de aquello que ninguna tecnología puede sustituir: una buena historia, personajes memorables y la capacidad de emocionar al público.

La evolución tecnológica modifica la forma de producir películas, pero el valor del arte cinematográfico continúa residiendo en la imaginación humana.



Reflexión Final

A lo largo de su historia, el cine ha superado profundas transformaciones: el paso del blanco y negro al color, la llegada del sonido, la televisión, los efectos digitales y las plataformas de streaming. Hoy enfrenta un nuevo desafío con la irrupción de la inteligencia artificial y las nuevas formas de consumo audiovisual.

Desde la Revista Justo Medio, consideramos que la innovación tecnológica debe entenderse como una aliada del talento humano y no como un sustituto de la creatividad. Hollywood y la industria audiovisual mundial seguirán evolucionando, pero su verdadero valor continuará siendo la capacidad de contar historias que inspiren, eduquen y conecten a las personas. Para el Perú, fortalecer el cine nacional significa apostar por la cultura, la innovación y una industria creativa con enorme potencial para contribuir al desarrollo económico y proyectar nuestra identidad al mundo.

La Actitud como mi Filosofía de Vida

Hace unas semanas participé en el Congreso Internacional de Doctores en Guatemala, donde tuve el honor de dictar la cátedra magistral: “La actitud como filosofía de vida”. Asimismo, el Colegio Oficial Internacional de doctores me otorgó en la Ceremonia Internacional de Colegiación la colegiación oficial en reconocimiento a mis logros académicos, profesionales, sociales y humanos.



Por: Dr. Jesús Ochoa*

Estos momentos me permitieron reafirmar una verdad que he comprobado a lo largo de mi vida: la actitud lo es todo. No se trata solo de una frase inspiradora, sino del pilar sobre el cual he construido mi camino personal y profesional.

Como todos, he enfrentado desafíos, cambios y momentos difíciles. Y entendí algo esencial: no siempre podemos controlar lo que nos ocurre, pero sí podemos elegir cómo reaccionar. Esa elección es la que define si avanzamos o nos quedamos estancados.

Estoy convencido de que el optimismo es la chispa que enciende el éxito. Una actitud positiva genera pensamientos constructivos; estos impulsan acciones correctas y, finalmente, producen resultados extraordinarios. No podemos esperar un buen desenlace si

sostenemos una mentalidad negativa. Cuidar nuestra actitud es, en realidad, cuidar nuestro destino.

También he aprendido que la verdadera grandeza no se mide por lo que poseemos, sino por nuestra humildad y por la forma en que tratamos a los demás. De todo lo que llevamos puesto, la actitud es lo más importante: es lo que proyectamos, lo que inspira confianza y lo que construye relaciones sólidas y duraderas.

La vida no es una línea recta. Todos caemos alguna vez. Lo importante es levantarnos con rapidez, aprender la lección y seguir adelante. Cada dificultad puede transformarse en una oportunidad si decidimos afrontarla con determinación. La actitud positiva es la llave que vuelve a abrir puertas cuando parecen cerradas.

Disfrutar la vida, contagiar energía, reconocer los logros de otros, practicar la amabilidad —incluso con desconocidos— y mantener una visión optimista del futuro son decisiones diarias que fortalecen nuestro carácter. Ser felices por el éxito ajeno demuestra seguridad, madurez y abundancia interior.

Nada de lo que he construido tendría sentido sin mi familia y sin las personas que me acompañan en el camino. Valorar las relaciones es tan importante como alcanzar metas. El verdadero éxito no se acumula: se comparte.

Hoy puedo afirmar con convicción que la actitud no es solo una herramienta; es mi filosofía de vida. Es una elección diaria que me impulsa a seguir creciendo, sirviendo y construyendo. Porque, al final, el éxito nace en la mente, se fortalece en el corazón y se refleja en la manera en que decidimos vivir cada día.



*Director De Multident



**TU SEGURIDAD
ES NUESTRO COMPROMISO**



- ✓ Servicio de resguardo y custodia de mercadería en tránsito
- ✓ Servicio de seguridad privada
- ✓ Servicio de custodia de bienes controlados
- ✓ Centro de control de monitoreo las 24 horas
- ✓ Certificados por Sucamec



CONTÁCTANOS AL

 **952472935**

 **hivar.pe**

 **logistica@hivar.pe**

 **www.hivar.pe**

¡Vive una
experiencia
inolvidable!



HOSPEDAJE:

Hotel Madre Perla Se encuentra en la parte baja del Castillo.

Hotel Camelot Con vista al mar, está ubicado en la parte alta del castillo.

Juan Francisco Barreto Podesta, Gerente Castillo de Chancay Telf: 764-2274 Cel: 944 574 092

• Precio de entrada adulto. Lunes a Domingo S/ 30.00 • Precio de entrada niños 3 a 10 años. S/ 15.00

Revistas.PeruRadio.net.pe